

La amenaza destituyente.
**El horizonte interior de la movilización social
en Bolivia, Ecuador y Argentina**

Tesis para obtener el grado de Doctora en Cs. Políticas y Sociales
con orientación en Sociología

Presenta: Mtra. Victoria Inés Darling

Asesor Principal:

- Dr. Lucio Oliver

Comité Tutorial:

- Dra. Fabiola Escárzaga
- Dra. Raquel Gutiérrez
- Dra. Raquel Sosa
- Dr. Adolfo Gilly

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Cs. Políticas y Sociales
Ciudad Universitaria, DF, Mexico

Abril de 2012



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

) Reconocimientos (

Una tesis doctoral es algún tipo de lucha silenciosa. Se establece un compromiso pasional con una porción de la realidad social, se reconoce un campo problemático de batalla, se escogen las armas conceptuales, se analiza la correlación de fuerzas en el campo y se discuten ideas una y otra vez, sin tregua. Y la amenaza a desistir se vuelve implacable. Se avanza a pasos infinitesimalmente pequeños y al avanzar, lentamente se ve más claro y una termina descubriendo la ausencia de enemigo, el propio reflejo.

Agradezco la compañía de los que me recordaron que la lucha en Mexico valía la pena. A Lucio Oliver, por su sabia orientación en dosis exactas. A Fabiola, por regalarme su amistad sin desgastarse en el intento de sugerirme mejores contribuciones analíticas para acercarme al universo indígena primero, y a la singularidad latinoamericana después. A Raquel Gutiérrez aunque la admiración me deje sin voz cuando la tengo enfrente. Agradezco tu exilio, Susana García Salord. Al Dr. Andrade por su confianza en un tempo de 2x4. A Nina por su dulzura. A Gustavo y Carmen por estar cerca. A Antonio por su compañía. A Flor por su escucha. A Ana por su insistencia. A los compas de la UNILA por mostrarme *Otro mundo posible* ahora en Brasil. A Roni y su calma servida con café frente al mar. A Susana por su fe en todos los santos, de los que formo parte. A Mo, a Mercedes Seoane y a Julieta por sus diferentes formas de amor. A Carlos, por darme a Victoria de vuelta. A Raquel Sosa siempre. A Eduardo Ruiz, siempre.

Claro que haber realizado trabajo de campo en Bolivia, Ecuador y Argentina me “convirtió”. La violencia de las periferias urbanas, la valentía de sus mujeres, la amenaza de sus madrugadas, la sacralidad del tiempo de escucha, no sólo colaboraron en una tesis. Gracias Luis Gómez, gracias Lucila Choque, gracias Silvia

Rivera en Colectivo, gracias Adriana Soto, gracias Pablo Villegas, gracias con el alma, Uc. Y pues, analizar movilizaciones sociales formando parte de un colectivo de 8 hermanos parece decir algo más de lo pequeño e inmensamente maravilloso de la lucha en clave colectiva. A ellos mis razones. Hasta la Victoria siempre.

Florianópolis, carnaval 2012

Índice

Introducción

Precauciones antes de emprender el recorrido. 7

Capítulo I

Movimientos Sociales y Poder Destituyente en América Latina. 19

- Sobre lo incontenible de las fisuras. Los Mov. Sociales latinoamericanos en el nuevo siglo. **24**
- Sobre el poder popular latente: sus usos y potencialidades. **31**
- Ecuador: "*Mahuad... fuera!*" **34**
- Cinco años después: "*Todos somos forajidos.*" **38**
- Octubre boliviano: "*Fuera Goni vendepatria!*" **42**
- Mesa en Bolivia: "*Fusil, metralla, el pueblo no se calla.*" **45**
- Argentina en 2001: "*Qué se vayan todos... qué no quede ni uno sólo.*" **48**
- Sobre cánticos, renunciadas en papel, escapes y casas de gobierno vacías. **52**
- Ingovernabilidad y crisis política. Apuntes sobre el discurso académico dominante. **54**
- El significado de la crisis en América Latina. **58**

Capítulo II

Acercamiento a los Hilos que conforman la Trama. La construcción teórica del Objeto Empírico. 61

- Sobre el estudio de Organizaciones Sociales en la periferias urbanas de América Latina. **63**
- El protagonismo de los "sujetos marginales" hoy. **65**
- Colocando una lente sociológica móvil sobre los sujetos colectivos. **72**
- Capacidad destituyente y organización social: las prácticas como clave analítica. **74**

- El conflicto como eje de engranaje de la realidad social. **80**
- Reconstruir trayectorias para acercarse a la realidad social. **83**
- La política plebeya como política popular. **85**

Capítulo III

El Horizonte Interior de los Movimientos Sociales: el Contenido de la Amenaza. 88

- Cuando la duda asedia: Salir o no salir a la calle. **92**
 - A. **El Alto: “el lugar más capitalista del mundo.”**
 - El movimiento de Octubre de 2003. Demandas concatenadas y contenidos. **96**
 - El tránsito de los reclamos bolivianos. **99**
 - Calles como trincheras: la *dinámica interior* de la protesta alteña. **107**
 - Mujeres en resistencia. **112**
 - La fiesta de los pobres. **115**
 - B. **Quito: “forajidos, así mismo somos.” 116**
 - Las razones del conflicto. **120**
 - Los quiteños en pie de lucha. **125**
 - La radio como medio para la identificación colectiva. **128**
 - No más promesas de la democracia. **130**
 - El tránsito de los reclamos ecuatorianos. **132**
 - La captura política de la CONAIE. **134**
 - C. **Buenos Aires: “qué venga lo que nunca ha sido.” 140**
 - El tránsito de los reclamos porteños. **143**
 - Sobre los miedos. Del disciplinamiento a la organización social. **147**
 - Piqueteros. **150**
 - Las prácticas como procesos de acumulación política. **152**

- Quiénes luchan. **155**
- El cambio de eje: la cristalización de un proyecto. **158**
- El futuro anticipado en el Presente: las expectativas. **160**
- Movimiento interior y programa alternativo. **161**

Capítulo IV

La Memoria Larga de las luchas y su Confrontación con el Presente. 164

- El movimiento dentro del movimiento. **168**
- Minas y revolución. **168**
- Los pactos democrático-militares. **174**
- Ser o no ser nacional y popular. **179**
- La memoria larga de las luchas. **182**
- La naturaleza de aquello que se destituye. **186**
- La movilización: espejo del tejido social. **194**

Reflexiones conclusivas. 197

Referencias bibliográficas. 201

) Precauciones antes de emprender el recorrido (

América Latina ha transitado con entereza a lo largo de su tumultuosa historia los caminos de la dominación y la emancipación. Su sorprendente capacidad reconstructiva deslumbra una y otra vez a nativos, visitantes e investigadores. Aquí las reglas del juego no están establecidas y cuando lo están, el tiempo no demora en evidenciar quién manda a quién. Los latinoamericanos tenemos habilidades de Ave Fénix, creemos con fe ciega en santos paganos y luchamos por un mundo en que quepan muchos, sabemos que la calle es nuestro campo de batalla, que la resurrección política es inevitable, que nuestras ideas son armas y que el cambio es una decisión.

El interés de la presente investigación consiste en desentrañar el vínculo entre movilización social y destitución de presidentes democráticamente electos en América Latina. Resulta un fenómeno inédito que, a lo largo de los últimos diez años, primeros mandatarios electos por mayoría popular en elecciones abiertas -a décadas de la sucesión de dictaduras militares en el Cono Sur- hayan renunciado o huido de los Palacios de Gobierno por presión y descontento popular. Este fenómeno que impacta por su carácter des-institucional aconteció en diversos países de la región destacándose Bolivia en los años 2003 y 2005, Ecuador en 2005 y Argentina en diciembre de 2001. Ahora bien, como temática de interés a profundizar, cabe señalar que quienes protagonizaron estas movilizaciones sociales generando derrocamientos, son en su mayoría sectores sociales precarizados que sólo en ocasiones incorporaron a sectores medios en la movilización, e incluso -en el caso de Ecuador donde los sectores medios fueron los protagonistas-, su accionar no tuvo como referencia central las decisiones de grupos dominantes. En virtud de estas razones, la experiencia cotidiana de sujetos empobrecidos materialmente, su percepción de la política, su mirada del acontecer cotidiano, sus expectativas de

cambio y la construcción de un proyecto propio en clave colectiva alternativo al dominante, dinamizaron la curiosidad por investigar fenómenos críticos recientes que despliegan en su acontecer particularidades de las formas de ser y estar en América Latina.

Ahora bien, una de las singularidades que motivó la investigación fue constatar el involucramiento de sectores de las periferias urbanas a las capitales latinoamericanas que antes se encontraban fuera de toda participación política contestataria. Grupos sociales de desocupados conformados en colectivos de lucha política en Argentina durante los años '90, sectores medios urbanos ecuatorianos y una gran mayoría de indígenas del Alto boliviano se movilizaron en manifestaciones de gran escala exigiendo transformaciones que, sumadas unas a otras en un proceso político acumulativo, culminaron con el pedido de renuncia de sus Presidentes. Estas movilizaciones que fueron catalogadas en la voz de los latinoamericanos como "tiempos de crisis", tuvieron un impacto decisivo pues no sólo desestabilizaron políticamente el funcionamiento del orden democrático restringido vigente sino que por primera vez en democracia, las crisis desataron procesos de incremento de las demandas transformando la identidad de los propios *sujetos de confrontación*. A primera vista entonces, la supuesta desestabilización del juego democrático, la llamada por sectores dominantes *crisis de gobernabilidad*, se despunta como una tendencia en América Latina que ya no pareciera obedecer a prácticas institucionales para su problematización o intento de resolución, por consiguiente, tampoco para su análisis.

En este sentido, sin perder de vista la complejidad de los procesos de deterioro social y los agravios que decantaron en las crisis, escogimos para el análisis la perspectiva del intelectual boliviano René Zavaleta, quien comprende que la crisis puede ser el mejor espejo, un momento privilegiado, desde el cual mirar e intentar

explicar las relaciones de poder que se entretajan en una sociedad. A partir de la desnudez de las prácticas sociales, discursos y por tanto intereses, de la exposición en su máxima expresión de relaciones conflictivas, es posible visualizar hacia atrás en el tiempo los componentes y desencadenantes que como hilo de una madeja, entretajeron la situación crítica a analizar. Para tal fin nos hemos servido de los conceptos zavaletianos, de sus iluminaciones sobre procesos socio-históricos de mediados del siglo XX y de su construcción analítica de fines de los años '70: sociedad abigarrada, crisis, momentos constitutivos y la peculiaridad del Estado en América Latina han sido las principales herramientas de las que nos apropiamos para explicar el derrotero específico de los colectivos que investigamos. Más aún, la crisis como método de conocimiento nos ha permitido leer en la construcción del horizonte de lucha de los sectores movilizados nuevas opciones para intervenir en el curso de la Historia.

Con el fin de comprender la particularidad de quienes se movilizan en el siglo XXI en la región, buscamos además problematizar la relación entre las condiciones de precariedad material con las apreciaciones teóricas dominantes que explican su peso en la sociedad y las razones de su comportamiento político-cultural. En ese sentido, nos preguntamos hasta qué punto la construcción teórica sobre la Marginalidad explica las condiciones de precariedad material y en qué medida su problematización terminó quedando subsumida a las interpretaciones políticas del discurso neoliberal dominante. Es así que nos involucramos en el debate de la Teoría de la Marginalidad latinoamericana. Recorrimos los ejes de análisis de los años '60, de los '70 y de los '90 llegando a la conclusión que las condiciones en las cuales se despliegan los pobres ya no permite entenderlos como actores portadores exclusivos del germen revolucionario ni como agentes de transformación definibles

por su anclaje territorial periférico o su carencia de trabajo –“componentes activos” del ejército industrial de reserva-.

Las teorías de la cultura de la pobreza y de la marginalidad contribuyeron a estigmatizar a los pobres, atribuyendo a sus *recursos* y formas de interrelación la principal causa de reproducción de la condición de vida en la pobreza. Pues si nos atenemos a la realidad, “lo marginal” es masivo en América Latina así como lo son la informalidad en el empleo y la desprotección social. Sin embargo en ambos casos la Teoría de la Marginalidad supone una relación intensa entre territorio y subcultura (Hopenhayn, 2011). La especificidad de la pobreza en el relato del desarrollo tiende a quedar restringida a sus carencias, a aquello que los pobres no tienen: ingreso, activos productivos, formas de inserción, mecanismos de movilidad social ascendente, capital, derechos efectivos -aún cuando las reacciones a las crisis estén fuertemente cargadas de símbolos-. El uso que en consecuencia se da a lo marginal termina obedeciendo a una perspectiva política típica de la dominación cristalizada en su ámbito de reproducción ampliada como es el discurso académico dominante. En ese sentido, nos distanciamos de este discurso relocalizando *el conflicto de clase* como eje de las situaciones críticas y la precariedad como *resultado del despojo* al que fueron arrojadas estas mayorías a consecuencia de las políticas excluyentes de por lo menos, los últimos cuarenta años.

En un puente analítico hacia el presente, la complejidad de la pobreza post década del '90 arroja una miríada de singularidades que transforma a los pobres en vulnerables, con socio-territorialidad poco definida -en la que enclaves de pobreza urbana se encuentran en zonas acomodadas de la grandes ciudades y *countries* o enclaves de riqueza se encuentran en zonas periféricas- y la pertenencia a una franja laboral se vuelve poco clara pues los planes sociales orientados a fomentar el trabajo y las “changas” o empleos precarios, son la regla. Los precarizados siguen

“lógicas precarias” que, si bien podrían ser catalogadas como *estrategias de supervivencia*, veremos que en los casos que estudiamos las exceden en tanto quienes se movilizan manifiestan estar dispuestos al hambre y al riesgo de perder su propia vida por la transformación política de sus condiciones de existencia. Somos conscientes que el deterioro de las condiciones de vida de estos sectores que pueden ser considerados mayoritarios si contemplamos el espectro de vulnerabilidad en la región, obedece al saldo de numerosas embestidas “desde arriba” para evitar que ellos mismos dispongan de las herramientas necesarias para satisfacer sus propias necesidades, el cultivo de sus modos de vida, de formas de auto-organización y el disfrute de goce. Son a fin de cuentas, sujetos de despojo de tierras, de recursos naturales, de un orden concertado. Por eso el acercamiento a estos sectores implica reivindicarlos como sujetos de derecho, de transformación social y conocimiento. De ahí que la investigación se sustente en los propios relatos de estos sujetos participantes como principal fuente de datos relevados.

La complejidad social latinoamericana escapa a definiciones excluyentes y dicotómicas haciendo explotar teorías tradicionales y eurocéntricas. Los sucesos de lucha de los últimos años en la región fueron protagonizados por indígenas, campesinos, mujeres, *piqueteros*, desempleados, cuya presencia en el derrotero histórico claramente no fue previsto por las teorías sociológicas clásicas. Incluso sus formas de organización entre las que podemos documentar: *piquetes*, formas de autogobierno, asambleas, comunidades eclesiales de base, cooperativas de trabajadores desocupados, cooperativas de fábricas ocupadas, comunidades indígenas, juntas barriales, ollas populares, no han sido objeto de conocimiento privilegiado de las perspectivas más reconocidas del pensamiento social occidental, a diferencia del sindicato, los consejos ciudadanos, los partidos políticos o los Nuevos Movimientos Sociales de tinte europeo.

Nuestros sujetos de confrontación con el orden político vigente tampoco habitan exclusivamente centros urbanos o comunidades rurales. Aquí una vez más sobran las definiciones sociológicas de poca extensión e intensidad explicativa. Las alturas de los Andes, la vecindad a las vías del tren en un paraje abandonado que en los años '80 podía ser considerado urbe pero "ya no más", comunidades indígenas en pueblos de la sierra de difícil acceso, plazas públicas, llanuras o enclaves en la selva amazónica son los espacios socialmente construidos como territorios de resistencia y acción política. Espacios que ni siquiera los contienen plenamente pues nuestros sujetos de confrontación se caracterizan por la movilidad, el tránsito y la búsqueda de mejores condiciones de vida y organización autónoma. Y ni siquiera pueden ser catalogados por la exclusividad del uso de la lengua en su discurso, pues nuestros sujetos de confrontación expresan sus demandas en quechua, aimara, español, lunfardo y guaraní. Difícil encontrar en la teoría crítica de idioma colonial, interpretaciones que habiliten la comprensión de este tipo de discursos.

Y no hay socialismo, anarquía, desarrollo al que llegar o derechos humanos como bandera de lucha. No hay distinción entre democracia formal o mínima, democracia participativa o representativa, orden institucional o legitimidad en el entramado de significaciones de quienes investigamos. Hay sentidos divergentes difíciles de capturar en terminología científica objetivizante: hay dignidad, Pachamama, derechos colectivos, bienestar, hermanos, reciprocidad, recursos propios, territorio. Y esto no le resta racionalidad a sus razones, menos aún coherencia. La capacidad de confrontación en América Latina se despliega en múltiples espacios, es polimorfa y se sirve de todos los recursos que se tienen a la mano. Esto da cuenta de una dificultad y por tanto de un desafío epistemológico a la hora de capturar sus sentidos y derroteros desde las Ciencias Sociales.

Es así que brilla la certeza de la discrepancia entre la construcción de conocimiento y el movimiento de las prácticas políticas transformadoras en América Latina. Pues, el campo de conocimiento en que nos movemos dificulta su aprehensión por parte de las teorías sociológicas tradicionales. Y el corte de conceptos para su utilización se dificulta aún más si la intención es dar cuenta de lo que sucede en el *real* movimiento de la realidad social. Las formas de hacer política y los alcances prácticos de sus luchas no se explican por autores europeos ni por *ejes de confrontación, cooperación y conflicto* formateados por las ciencias políticas norteamericanas. En virtud del mosaico construido para el análisis entonces, recuperamos herramientas de diferentes construcciones explicativas abordadas *in situ* en cada caso. Recuperamos a autores que realizaron trabajo de campo en las periferias, que respiraron el clima de crisis y reconfiguración política: intelectuales-militantes, diría Maristella Svampa.

Pero no pudimos escapar del todo al *canon* de utilizar categorías teóricas europeas: reconocemos que la eficacia de la aplicabilidad contra-hegemónica de los conceptos se encuentra definida por la conciencia de los límites de su uso. Esto significa que la capacidad de tomar los conceptos explicativos de la teoría de la lógica de las prácticas de Bourdieu, desanclando su utilización del punto de vista del autor, ha sido parte de la apuesta metodológica de nuestro trabajo. De hecho, las herramientas utilizadas para la recolección de datos fueron aprehendidas iluminando la hoja de ruta que permitió una entrada ordenada y reflexiva en el trabajo de campo. Aprendimos de la mano de Pierre Bourdieu que “lo social” se construye y se aprehende desentrañando las relaciones que constituyen su existencia. “La honestidad del hecho que se conquista contra la ilusión del saber inmediato” fue un motivo que permitió romper con los prejuicios antes de acercarse al “campo”. Es así que entendimos inmersos en el estudio de la realidad social, la

forma de leer las prácticas de los sujetos, que visualizamos el *habitus* como interiorización de lo social hecho cuerpo desprendiendo del análisis que el concepto implica una estructura de contención pero también un esquema para la liberación. Pues los esquemas de percepción, pensamiento y acción que se muestran en el hacer cotidiano fueron nuestra materia de trabajo, por esto damos importancia al telón de fondo de las prácticas que son “las estructuras de percepción instituidas en el mundo social” como resultado de luchas históricas. Y estas luchas son a veces mencionadas, otras tantas olvidadas. De allí la recuperación de testimonios que permitieran hacer inteligible las prácticas inscritas en acontecimientos. La oportunidad de realizar un trabajo en el que apreciar el *habitus de clase*, nos orientó a su vez al descubrimiento de “un Otro tiempo” de las organizaciones políticas que se plantearon alternativas reales al orden democrático vigente. Este Otro tiempo nos permitió reconocer un *movimiento dentro del movimiento*, espacios de debate donde se fraguan las expectativas, las discordancias, donde se construye un Otro proyecto. A este tiempo de maduración que escapa a la recreación de acciones concretas visibles “hacia afuera”, de impacto público que escapa a los reclamos y al resultado que estos puedan tener, lo incorporamos a la categoría de “horizonte interior” del movimiento social (Gutiérrez Aguilar, 2008). Entendemos entonces que en la alteración de la cotidianeidad de quienes se movilizan se inscribe una nueva visión de mundo que se recrea como horizonte.

Y aún cuando pueda interpretarse que el concepto de *habitus* en tanto esquema de lo social adquirido e interiorizado en prácticas coacciona esta visión sobre un horizonte interior emancipatorio, nuestra certeza es que ambos coexisten dando cuenta de dos partes de la misma realidad. -Pareciera que teorías contradictorias y aparentemente excluyentes entre sí pueden iluminar distintos aspectos de un mismo fenómeno-. La limitación de posibilidades de emancipación

por auto-reproducción del *habitus* puede ser trabajada en el ámbito del horizonte interior con plena conciencia de su impronta. Con esta finalidad traemos hacia el frente la categoría de emancipación en tanto proceso acumulativo que se logra a través de la intersubjetividad (desencadenada en las luchas, en ciertos momentos constitutivos, desde la perspectiva de René Zavaleta). Si emancipación es “el proceso a lo largo del cual una porción de la sociedad recupera su posibilidad de decidir de manera no delegativa sobre los asuntos públicos y donde paulatinamente se inhibe el predominio del valor sobre las personas generalizándose otro modo de relación social que descansa en el despliegue del valor de uso de las cosas, a partir de su reapropiación por las personas libremente asociadas para sus fines autónomos” (Gutiérrez Aguilar, 2008: 23), entonces la valoración de los propios actos que se involucran en dinámicas colectivas transforman la subjetivación de la propia realidad. De allí que la emancipación no implique principalmente un cambio de estado de cosas existentes afuera, en la correlación de fuerzas, sino antes y de manera coherente, un cambio en el modo de concebir la realidad, insertarse en ella y actuar para transformarla.

Pero la construcción de la argamasa de conceptos y categorías para la interpretación de la realidad social estudiada no acaba ahí. A medida que el foco se ajusta, la lente vuelve más nítida la realidad. Entonces la lectura de lo vivido, lo percibido y lo sufrido permitió amarrar aún más la trama incorporando una nueva dimensión constructiva. Y para este fin, la urgente necesidad de un concepto que expresara la fuerza de la acumulación política de las luchas de estos sectores precarizados materialmente pero cargados de recursos para la sobrevivencia y la acción política. “Capacidad destituyente” fue el concepto que *okupamos* y del que nos apropiamos, concepto que es evocado con diferente sentido por Michael Hardt y Tony Negri en sus obras *Imperio* (2000) y *Multitud* (2005), por Maristella Svampa

en sus análisis post 2001 sobre la realidad de algunos países del Cono Sur (2006), por Raúl Zibechi (2003) en sus crónicas sobre la constitución y desenvolvimiento de movimientos contra-hegemónicos que llevaron al poder a nuevos presidentes “progresistas”. Nuestra intención fue resignificar el concepto dándole mayor capacidad explicativa en el contexto latinoamericano actual vinculándolo a procesos de exclusión social y política, al horizonte interior de los movimientos sociales así como a las nuevas prácticas políticas recreadas en procesos de inter-subjetivación. Investigamos cómo se produjo la construcción de esa capacidad por parte de colectivos en resistencia a las políticas de turno. Unimos precariedad con ánimo de destitución, vinculamos proyecto alternativo con destrucción del orden anterior, intentamos dar cuenta de las condiciones que habilitan a desconstruir formas políticas tradicionales con herramientas elementales que se construyen en la práctica cotidiana de quienes se movilizan. Entonces desintegramos el concepto en los recursos que lo componen –habitus de clase, agravio, prácticas concertadas- en el derrotero que su cristalización socio-histórica reciente involucra. Postulamos que en decisiones personales de participación política alimentando decisiones colectivas es posible ver que sucesos virtualmente sencillos, de aparentemente escasa significación, concatenados con otros de manera aglomerada, generan un engranaje complejo de organización y conciencia colectiva que decanta en un reclamo político superlativo a los fines inicialmente supuestos. A esta construcción de actos y sucesos concatenados en una ingeniería autónoma de la movilización social situada¹, obedece la conformación de *capacidad destituyente* en los casos estudiados.

¹ Entendemos por ingeniería la concreción de estructuras que responden a mecánicas -partes que componen un todo móvil-, artificio concertado de un orden esquemático dinámico. Pretendemos con su uso relocalizar el concepto en un debate que excede el campo teórico de la ciencia política norteamericana, marco de su utilización convencional.

Finalmente, vale aclarar que el orden de redacción de la investigación obedece a una depuración del supuesto ordenamiento de estructuración lógica del pensamiento. No obstante, este es otro supuesto. En un **primer capítulo** desarrollamos el diagnóstico que movilizó las preguntas de investigación, pues en estas primeras páginas nos comprometemos en un intento de explicación de las razones de la curiosidad de la investigadora suscitada a partir de acontecimientos vividos en Bolivia y Argentina, y con mayor distancia en Ecuador. A esta problematización inicial le sigue una descripción basada en una investigación hemerográfica que grafica los sucesos externos, el alcance práctico de las protestas desencadenadas. El capítulo cierra con algunas reflexiones teóricas que ponen en cuestión el discurso que “explica” las crisis políticas recurrentes en América Latina como anomalías en virtud de su bajo desarrollo institucional. En el **segundo capítulo** realizamos la selección de las herramientas que nos fueron de utilidad para acercarnos y construir una explicación coherente sobre el objeto empírico. La intensidad de la búsqueda tal vez no logre expresarse, no obstante, el trabajo sobre estas herramientas fue arduo e implicó un mapeo intenso de marchas y contramarchas sobre los elementos que la Sociología ofrece para el abordaje de casos como el que nos propusimos. Este capítulo se centra en Bourdieu recuperando conceptualizaciones de otros autores latinoamericanos en los que se destaca una vez más Zavaleta con su recuperación de la idea situada de crisis y conflicto. En **tercer lugar**, contamos con el capítulo que nos introduce -al fin- en el universo de las movilizaciones desde la perspectiva del *horizonte interior*. Los testimonios son los protagonistas de estas páginas. El hilo desanclado de la teoría los une y habilita, sin mención aparente, comparaciones entre los casos. Cerramos este capítulo con algunas consideraciones conceptuales que costuran el análisis. Finalmente, el **cuarto capítulo** se propone hilvanar los tres anteriores profundizando en los elementos que

se desprenden de la memoria de los relatos de quienes se movilizan. Incorporamos la problematización del tiempo, de las relaciones de dominación en que los sujetos de confrontación se juegan, de los “límites” de la creación de proyectos alternativos, añadiendo un análisis sobre las características del Estado que se cuestiona con la destitución presidencial. Como emergente de este análisis percibimos que existe en la forma más acabada de crisis de hegemonía –en términos de dominación consensual en negociación permanente- una estructura que pervive. Allí nos detenemos para visualizar y comprender la jaula en la que algunos procesos de reivindicación quedan subsumidos. Finalmente, el aliento de esperanza viene de la mano de la conceptualización de Silvia Rivera y una sucinta recapitulación de la *memoria larga* de las luchas, elemento central del horizonte interior de la movilización social en América Latina a ser trabajado con mayor profundidad en futuras investigaciones.

Con la expectativa de que las siguientes páginas iluminen el conocimiento de la peculiaridad de las formas de rebelión en América Latina, ofrecemos este cóctel de ideas sustentado en una perspectiva tendenciosa, del todo subversiva.

Movimientos sociales y poder destituyente en América Latina

Capítulo 1

“Nosotros a los Presidentes los engordamos y después nos lo comemos.
A Evo todavía lo estamos engordando.”

Mujer alteña

A lo largo de los últimos años, diferentes movimientos sociales protagonizaron sucesos reivindicativos de nuevo tipo en América Latina. Las revueltas acontecidas han sido de gran magnitud con multitudinarias movilizaciones en Venezuela, Paraguay, Chile y Perú, a las que se agrega Brasil con reclamos especialmente vinculados a la propiedad de la tierra. En este contexto regional convulsionado del incipiente siglo XXI, los casos más significativos han sido manifestaciones sociales que colaboraron en derribar gobiernos democrático-constitucionales, como ha sido el caso de Ecuador en 2000 y 2005, Argentina en 2001, y Bolivia en 2003 y 2005. No obstante, mencionando los sucesos de mayor impacto reciente, no puede desconocerse el marco en el que estos procesos ocurren y el clima de época que despiertan como evidenció el movimiento que se gestó en Guatemala en rechazo al presidente constitucional en 2010 y las intensas acciones del movimiento de resistencia hondureño, consecuencia del golpe de Estado perpetrado hacia finales de junio del mismo año. El 2011 incluso estuvo atravesado por renovadas protestas de los estudiantes chilenos en reclamo por una educación pública gratuita de calidad, por demandas indígenas en Bolivia consecuencia del “gasolinazo” y por la consulta a indígenas en la deliberación de sus propios asuntos como es la construcción de una carretera sobre un parque nacional protegido que señala la demarcación amazónica de su territorio. Así también en México se

esparcen reclamos contra las políticas implementadas en aras de garantizar la paz y los derechos básicos además de la seguridad ciudadana. Entretanto, intermitentemente, Ecuador, Argentina, Paraguay, Chile, Colombia y Perú se destacan como casos testigo de la conflictividad asociada a reclamos en defensa de sus recursos naturales. Este tipo de manifestaciones se incrementa introduciendo en la Región una aparentemente nueva problematización.

Mucho se ha escrito sobre las características novedosas de los movimientos sociales que en este nuevo siglo se destacaron en contextos signados por crisis económicas, sociales, políticas e incluso culturales derivadas del modelo esencialmente neoliberal que primó las últimas décadas². La literatura más reciente frecuentemente subraya como características sobresalientes la *conformación pluriclasista* de estos movimientos sociales, su lucha por la *defensa de la autonomía*, su novedoso *vínculo de apropiación con el territorio* en el que se encuentran, y en términos generales, el expreso *rechazo al sistema de representación* que restringe la praxis democrática a un juego delegativo con escasas pretensiones reales de participación popular. Vale decir además, alimentando la tesis de la originalidad de los procesos políticos latinoamericanos de los últimos años, que en la mayoría de los casos las referencias concernientes a los patrones distintivos de estos movimientos señalan al año 2000 como referente cronológico de un nuevo ciclo de protesta en la región. Es preciso destacar que el protagonismo y despliegue intermitente de los movimientos sociales además de la llamada de atención sobre sus novedosas formas de organización y manifestación, ha evidenciado la necesidad de construir nuevos mapas interpretativos para el análisis sociológico. De hecho, la vertiginosidad de transformaciones en el campo ha contribuido a gestar una línea de investigaciones

² Para surcar algunas contribuciones teórico-analíticas convergentes, ver: Rozé, Nuñez y Murillo, 2005; Cerutti Gulberg y Mondragón González, 2006; Mirza, 2006; Seoane y Nacci, 2007; Dri (Comp), 2008; Levy y Gianatelli (Comps), 2008; Svampa, 2008; Análisis del periodo de Revistas OSAL 1-22, 2000-2007; Ceceña, 2006; Tapia, 2006 y 2008; Delamata, 2009.

que se alimenta de nuevas formas de abordaje disciplinar incluso en el trabajo de campo. Es así que la suma de investigaciones orientadas a la lectura de los sucesos políticos conflictivos del último tiempo ha devenido en una miríada de enfoques y propuestas teóricas acerca de los diferentes modos de leer a las organizaciones sociales en acción que enriquece su comprensión y a su vez, complejiza el análisis.

Ahora bien, aún cuando las características comunes de los actores sociales que se despliegan en el escenario reivindicativo de este nuevo siglo sintetizan aspiraciones y luchas compartidas, resulta particularmente interesante orientar una reflexión a la dimensión distintiva que coloca la lente tanto sobre las reales como sobre las potenciales capacidades disruptivas de estos movimientos que pugnan el escenario político regional. Se trata de la *dimensión destituyente* y disruptiva del orden democrático dominante de los colectivos que se movilizan.

Desde 2001, pero tendiendo un posible puente analítico hacia los años que suceden, existen en diferentes países de América Latina sucesos contestatarios que cuestionan firmemente los valores y prácticas sobre las que se sustentaban los gobiernos de turno, desafiando y logrando presionar a los presidentes en ejercicio, elegidos democráticamente acorde a sus mecanismos constitucionales, hasta lograr su destitución. Los casos críticos que recuperamos son Argentina en diciembre de 2001, Bolivia en 2003 y Ecuador en 2005, exponentes de este derrotero disruptivo. Lo cierto es que esta potencial capacidad o “renovado poder latente” en sociedades como las latinoamericanas plantea dilemas que requieren un análisis específico. Las formas de apropiación de la política por parte de sectores que hasta entonces se veían distanciados de reales posibilidades de participación política resulta parte esencial del fenómeno. Buscando sus causas pero sin perderse en el entramado complejo de sus aspiraciones, nos preguntamos qué características tiene el “proyecto” de las organizaciones que conforman estos movimientos sociales de

modo de profundizar el análisis en torno a sus expectativas y cristalizaciones políticas recientes en tanto colectivos que construyen prácticas *democráticas* que exceden el derrotero de las prácticas emanadas de gobiernos elegidos *democráticamente*.

La consideración de su “proyecto”, si en este concepto podemos condensar la *búsqueda consensuada de objetivos en el marco de fuertes contradicciones políticas*, merece ser puesto al descubierto resemantizando su funcionalidad y al mismo tiempo, resignificando su vocación como elemento aglutinador de demandas. Esto implica atribuirle temporalidad a su accionar y coherencia a sus prácticas. Los procesos destituyentes parecieran contar con un sinfín de razones aducidas a una voluntad general perdiéndose *vis a vis* el valor específico de lucha de los sujetos sociales involucrados.

Vale una aclaración importante a este punto entonces. Nos ubicamos analíticamente en el marco orientado a recuperar el estudio de la *lógica de las prácticas* de los sujetos sociales. Consideramos que un ángulo imprescindible en la construcción de conocimiento, por su amplitud, profundidad y resiliencia, son las prácticas, reconociendo que la construcción sociohistórica es siempre resultado de procesos sociales complejos en interacción. En este sentido, las posibles diversas formas de acercamiento y construcción del objeto de estudio apuntan a sustentar la existencia de un eje estructurador central de la realidad social cristalizado en *conflictos manifiestos* en un determinado espacio-tiempo. De aquí que creamos que para comprender, dar cuenta y explicar cualquier problemática del campo social no pueda dejarse de lado la consideración del trinomio *realidad social - sujeto - conflicto*, pues cada uno de estos elementos es inherente y constitutivo de la dinámica social situada. Desde este ángulo miramos los procesos reivindicativos de los últimos años, en esta línea proponemos profundizar la dimensión destituyente

de los movimientos sociales de Bolivia, Argentina y Ecuador. La lente hace foco recuperando e identificando a las organizaciones de base –catalogadas inicialmente como periféricas por su ubicación geográfica- que participaron de los procesos políticos de derrocamiento presidencial, sin perder de vista su proyección y posicionamiento. Un cuestionamiento emergente que otorga sentido al análisis en consecuencia, remite las implicancias que las crisis tienen en contextos de fuerte movilización social. Nos preguntamos: ¿Qué se juega en la crisis y que se obtiene como consecuencia para las fuerzas sociales intervinientes? ¿En qué medida la reaparición de crisis políticas en la escena latinoamericana expresa una fractura estructural? Aquí nos detendremos para darle al conflicto su lugar privilegiado en el análisis y para desentrañar cómo y porqué la crisis puede ser una escuela en la que detenerse para observar y actuar.

Ahora bien, no podemos dejar de mencionar que a esta propuesta de problematización se suma otra, de diferente significación que actúa desde los inicios como hipótesis de investigación: movimientos aparentemente pluriclasistas, como los que trabajamos, conformados por organizaciones populares de base, denotan la incorporación de “nuevos” sectores a la dinámica movimentista. Como veremos, es posible postular un proceso de *renovada emergencia de las periferias urbanas a lo largo de los últimos años*, como señal de una *politización* con atributos específicos. Este elemento emergente de la crisis se ha convertido, a partir del trabajo de campo, en cristal de una lectura que sustentada en aportes teóricos latinoamericanos no pretende más que hilvanar una trama que otorgue densidad analítica a los estudios sobre movimientos sociales en la Región.

Sobre lo incontenible de las fisuras

Los movimientos sociales latinoamericanos en el nuevo siglo

Existe dentro de la comunidad académica, un consenso establecido respecto de la pertinencia metodológica de situar el surgimiento de un nuevo ciclo de protesta o la aparición de Movimientos de Resistencia en América Latina, hacia comienzos de siglo XXI. Las razones que con este fin explicativo se aducen refieren al fin de los gobiernos neoliberales que dieron impulso a las reformas estructurales así como a la culminación de la década del '90 en tanto escenario, tiempo y espacio signado eminentemente por la oleada neoliberal y su posterior crisis hegemónica (Oliver, 2007: 4). Aquello que contribuimos en argumentar es que efectivamente consideramos que el ciclo está dado no sólo por las características de los movimientos en sí, su actividad, repertorios de lucha y objetivos, sino también por su relación con el contexto general de la región.

Si bien es claro que diferentes formas de lucha se expresaban activamente en los años '90, la ubicación del 2000 como referente de transformación de los modos que la movilización asume, implica reconocer que ocurre un crecimiento de los hechos conflictivos a la vez que se produce la emergencia y consolidación de nuevos movimientos sociales. Estos convergieron en diferentes procesos de confrontación que, alcanzando una amplia significación nacional, conllevaron a la caída de gobiernos, la apertura de profundas crisis políticas o el fracaso de iniciativas de carácter neoliberal (Seoane y Nacci, 2007: 95). Sustentando esta idea, según un análisis del Observatorio Social de América Latina, en 19 países de la región latinoamericana a lo largo del 2000 y hasta el 2002 se dio un crecimiento de los hechos de conflicto relevados del orden de más del 180%. En términos analíticos, por la magnitud regional que alcanza, por las características que presenta, y por su perdurabilidad, el incremento de la conflictividad social a principio de siglo da

cuenta de la aparición de un nuevo ciclo de protesta social que, inscribiéndose en el campo de fuerzas resultante de las regresivas transformaciones estructurales forjadas por la implantación del neoliberalismo, emerge como contestación (Seoane, Taddei y Algranati, 2006: 230).

¿Quiénes constituyen el colectivo “movimientos sociales”? Los actores que se ponen en evidencia a lo largo de la década en movilizaciones variadas, son movimientos rurales, campesinos e Indígenas, movimiento de trabajadores sin tierra, movimientos de desocupados, trabajadores del Estado, estudiantes universitarios, organizaciones sindicales, sectores urbanos empobrecidos, ambientalistas, movimientos de mujeres, colectivos anti-globalización hegemónica, y organismos no gubernamentales. El denominador común que permite analizarlos conjuntamente en un mismo periodo como parte de un mismo ciclo de lucha, es su acción contestataria a las medidas neoliberales propias de la apuesta política exacerbada en la década de los años '90.

Con el paso del tiempo hay mayor conciencia acerca del nuevo “sujeto social” que resiste. Su lucha se constituye a partir de una sociedad civil llena de particularidades como la fragmentación social, el desempleo masivo, la exclusión, la informalidad (Oliver, 2007: 7). Se trata de un sujeto social y político de la acción colectiva que prácticamente se constituye *en* la lucha, por medio de amplias solidaridades y que tiene como base el fenómeno de la *desintegración social* provocada por las políticas ortodoxas. Se trata de un sujeto constituido por muchos sujetos: los sindicalizados, los desempleados, los pobladores, los excluidos, las clases medias pauperizadas, los trabajadores de la burocracia. Por esto, el carácter diverso de la movilización da cuenta de cierta dispersión de la conflictividad. No obstante, como diversos autores han dado cuenta, la complejidad de los movimientos no significa que el conflicto esencial propio del capitalismo, la puja entre capital y

trabajo, se haya desgranado en otros múltiples conflictos de diferente escala, sino que la demanda por trabajo “digno”, la lucha por mejores condiciones de empleo y justa remuneración continúan siendo reclamos de peso.

Ahora bien, recuperando el contenido de las demandas que primó a lo largo de la presente década, con el fin de contribuir a un análisis diagnóstico preliminar de las luchas del siglo que atravesamos, ciertamente consideramos que son los agravios de las políticas neoliberales las que ven en espejo multiplicados los reclamos en acción. Las demandas más importantes a lo largo de los últimos diez años se orientaron a la reapropiación social del espacio público (en sus diferentes escenarios), el reparto o legalización de tierras, la reivindicación de derechos indígenas, defensa de recursos naturales, reclamos por inseguridad ciudadana, demandas de justicia hacia el Estado represivo, reivindicación de derechos políticos, sociales, culturales y económicos, reivindicación contra la globalización excluyente, lucha contra la desocupación y las políticas públicas ineficientes derivadas de esta situación, demandas de condonación de la deuda externa de los países económicamente dependientes y demandas contra la cristalización de tratados de libre comercio³.

Algunas posturas de las cuales nos distanciamos sostienen que los movimientos sociales latinoamericanos se han ido configurando espontáneamente en torno de realidades concretas, cercanas y locales. En este marco, se los considera *una manifestación normal de las demandas y derechos de sectores amplios de la sociedad a través de canales no institucionales*. Anticipándonos, consideramos que los movimientos son la expresión de una porción de la sociedad en situación de crisis –claramente identificada con una fracción de clase- y a su vez, creemos que la manifestación del conflicto se da en todos los casos bajo un bloqueo de los canales

³ Darling, 2008.

institucionales existentes para la atención de sus necesidades. No existe desde este punto de vista un bajo grado de desarrollo institucional que justifique la incapacidad de resolver los conflictos manifiestos. Más aún, los agravios “desde arriba” parecieran condecirse con los niveles de intensidad de las formas particulares de organización alternativa que se desarrollan.

Claro que existen características distintivas que los movimientos sociales latinoamericanos han asumido en su proceso de conformación y desarrollo que, ya analizados en profundidad por la sociología regional, permiten presentar un paneo descriptivo clarificador. De hecho, algunos ejes aglutinadores destacados de lucha a lo largo de los últimos años pueden ser sintetizados en un franco *cuestionamiento al sistema de representación* manifiesto, en demandas generalizadas de *autonomía organizativa* respecto del sistema político, y en la *apropiación original del territorio* una clave de resistencia.

El cuestionamiento al sistema de representación vigente consiste en el rechazo a los mecanismos institucionales impuestos *democráticamente*. En la medida en que la política formal no representa opciones posibles de participación e intercambio, los mecanismos directos y a viva voz han devenido en su reemplazo. En este caso, la democracia directa y la emergencia de nuevas formas de participación con características de asamblearias, se refleja en la tendencia a crear estructuras flexibles, con tendencias hacia la resolución de controversias en forma horizontal en miras a una profundización de la democracia (Svampa, 2007: 5). Lo cierto es que la lucha contra las políticas neoliberales terminó derivándose en algunos casos, en un franco cuestionamiento al régimen político, al modelo de democracia representativa vigente, y con esto, a las formas de ejercer la política formalmente. De aquí se derivan numerosos ejemplos como las experiencias de exigencia de renuncia de presidentes o funcionarios de gobierno cristalizado en frases como “*que se vayan*

todos” en Ecuador y Argentina, o la demanda de referéndums y consultas públicas populares para dirimir asuntos vinculados al régimen, como ocurrió en Bolivia en 2003 y Venezuela en 2002. Como contraparte de este cuestionamiento ocurrió una revalorización de los mecanismos participativos democráticos que en miras a un tipo de participación no mediada, reinventa la práctica política organizada “desde abajo”. En este sentido Atilio Borón realiza una contribución interesante al evidenciar que la decadencia de los formatos tradicionales de organización se relaciona con la explosión de múltiples identidades (étnicas, lingüísticas, de género, de opción sexual) que redefinen *hacia la baja* la relevancia de las tradicionales variables clasistas. Si a esto le añadimos la inadecuación de los partidos políticos y los sindicatos para descifrar correctamente las claves de nuestro tiempo, la esclerosis de sus estructuras y prácticas organizativas, y el anacronismo de sus discursos y estrategias comunicacionales, se comprenderán muy fácilmente tanto las razones por las cuales estos entraron en crisis, como la emergencia de nuevas formas de lucha social (Borón, 2004: 3).

Por su parte, si bien la revalorización de la experiencia de lucha por la autonomía proviene de la tradición indígena más combativa, como lema organizativo ha sido recuperado por múltiples colectivos en resistencia. Este reclamo se ha convertido en la demanda *madre* de las organizaciones contando como referente indiscutible al movimiento zapatista mexicano⁴. Dentro de la convergencia en torno a un proyecto autonómico, que implica el reconocimiento de

⁴ “La demanda autonómica zapatista formulada en las mesas de negociación en San Andrés Larráinzar en 1996, aceptada por el gobierno, quedó plasmada en los Acuerdos de San Andrés en cuya formulación participaron no sólo los zapatistas sino también dirigentes indígenas, políticos y académicos expertos en la materia, todos ellos expresión de la sociedad civil. Tales Acuerdos debían ser plasmados en la reforma constitucional pendiente. Para exigir al Congreso el reconocimiento de la autonomía indígena los zapatistas realizaron en 2001, con gran apoyo de la sociedad civil nacional e internacional, la Marcha del Color de la Tierra, pero una alianza de senadores y diputados de los tres partidos mayoritarios votó unas reformas diferentes a las propuestas en los Acuerdos de San Andrés, negando personalidad jurídica a las comunidades indígenas y con ello el reconocimiento de la autonomía” (Escárzaga, 2004: 6).

derechos políticos y culturales de los pueblos, se construye un discurso que apela a la etnicidad como catalizador de la diferencia (Sierra, 1997: 132). La recuperación de la identidad constituye uno de los ejes cristalizadores de las reivindicaciones de los últimos años y con ese motivo se han ido construyendo propuestas novedosas para repensar la identidad multicultural no sólo en el contexto del movimiento indígena sino de los distintos grupos socioculturales. Es así que una de las derivaciones consiste en quebrar la estructura de poder del Estado habilitando la recreación de experiencias que construyan poder desde otros lugares no institucional-formalmente establecidos. Luchas emancipatorias con fuerte contenido de autonomía son experiencias como el Cabildo Abierto nacido de la guerra del agua en Cochabamba, las comunidades de vecinos de El Alto, las Juntas de Buen Gobierno de los caracoles zapatistas, las organizaciones de base comunitaria de los indígenas y campesinos ecuatorianos, o las organizaciones de piqueteros argentinos que no sólo expresan sus reclamos específicos sobre las medidas que los agravian, sino que además se presentan recreando formas alternativas de concebir el poder.

La reciprocidad y la autonomía se vuelven convergentes en relaciones que combinan quehacer político y diálogo. Muchas de las normas creadas por los movimientos se consideran consuetudinarias, y tienen que ser puestas en práctica en presencia de otros para entrar en vigencia, como ocurre con las organizaciones que cuentan con alta participación indígena. Finalmente, se trata de normas que los propios colectivos crean para ser regidas por ellos mismos, no escritas, pero sí inscritas en sus propias prácticas.

Más aún, el territorio es el espacio en el que se construyen y disputan relaciones sociales, formas de organización y esquemas de poder autónomos del Estado. Entonces, la apropiación territorial representa la respuesta a la pérdida de territorialidad que el trabajo, como argamasa ordenadora de la vida social, otorgaba

en el pasado reciente. Así, la reapropiación comunitaria del espacio de vida, en algunos casos como el del MST, las comunidades indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile, el caso de las fábricas recuperadas en Argentina, remite a experiencias de producción autogestiva y reproducción social en estos ámbitos. El territorio colectivo, comunitario, ampliamente valorado por los movimientos, se enfrenta en forma dicotómica con la exclusividad de la propiedad privada. La soberanía absoluta del espacio privado es parte de la matriz hegemónica del pensamiento moderno, de aquí su capacidad de dirimir propietarios, o sea, de determinar quienes se hallan legitimados para disponerlo, y quienes no. El cambio de lógica de los últimos años por parte de los colectivos que mencionamos remite a una nueva consigna de tipo relacional, plural, que la apropiación del territorio incorpora.

De la nueva apropiación por parte de los movimientos con potencial emancipatorio, se despuntan ámbitos de disputa, que remiten tanto a la lucha por la apropiación de sus condiciones materiales de producción, y aquí hacemos referencia al agua, la energía, la tierra; así como a la creación de condiciones para su reproducción simbólica, como la posibilidad de contar con escuelas populares, radios comunitarias, universidades multiculturales. Sólo considerando ambas dimensiones –material y simbólica- es que la invención o apropiación de territorios cobra sentido. Es así que en virtud de los atributos de esta reapropiación se ha constituido en espacio privilegiado en que debatir la *acumulación por desposesión* como contrapartida a la defensa del derecho amplio a la vida, es decir, a la reproducción de la existencia, a la afirmación de la identidad, a la actividad política libre, propio de las sociedades y comunidades locales. El territorio en este nuevo sentido es también el espacio que está viendo nacer un nuevo sujeto de lucha política vinculado a lo local y a lo público (Oliver, 2008: 9). En suma, el territorio ya no es considerado objeto de políticas públicas, sino espacio de vida de un sujeto

colectivo que resignifica aquello que le fue dado por derecho, planteando un cuestionamiento progresivo a la estructura tradicional de dominación.

Sobre el poder popular latente: sus usos y potencialidades

El proceso multifactorial de firme cuestionamiento a las políticas neoliberales en el marco de las crisis económicas que atravesaron la mayor parte de los países de la Región y la apuesta por profundizar el modelo, se tradujo en una oleada de levantamientos populares que en diversos y numerosos casos, llegaron a transformarse en procesos de presión para la cristalización de derrocamientos presidenciales.

Desde el inicio de siglo, se han vivido casi una decena de sucesos críticos que afectaron el modo de entender la dinámica democrática en la región. Lejos de constituirse un paisaje en el que el proceso de consolidación democrática avanza y se cristaliza, nuevos desafíos políticos y cuestionamientos sociales emergieron violentamente sobre la necesidad de realizar transformaciones refundacionales. Perú en 2000, Argentina en 2001, Venezuela en 2002, Bolivia en 2003 y 2005, Ecuador en 2000 y 2005, y, Honduras en 2009 son los casos que exponen esta tendencia. De las ocho situaciones críticas enumeradas, siete concluyeron con la caída de los presidentes de turno considerando a Fujimori en Perú, De la Rúa en Argentina, Sánchez de Lozada y Mesa en Bolivia, Mahuad y Gutiérrez en Ecuador, y Zelaya en Honduras. Ya sea porque la legislatura los destituyó o porque renunciaron, los cargos presidenciales sufrieron un llano decapite. En particular, Perú resulta llamativo por el caso de corrupción que envolvió al primer mandatario después de diez años de gobierno; Venezuela no deja de sorprender por el intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez que culminó en rotundo fracaso por presión

popular; y el reciente caso de Honduras despunta incertidumbre debido a la vigente resistencia popular y el acuerdo de apoyo oficial regional al presidente depuesto como herramientas de soporte. A estas situaciones se suman otras que en la misma tendencia pero con distintos resultados resultaron críticas a lo largo de la década. Nicaragua hacia finales de 2004, Honduras en 2005 y Guatemala hacia fines de 2010 manifestaron diferentes formas de desestabilización política cercanas a esta tendencia crítica cristalizada en movilizaciones sociales de envergadura. No obstante, los casos que se vuelven de especial interés para nuestra investigación resultan de la selección de aquellas *crisis que a causa de la presión de movilizaciones sociales, por su fuerza e impacto, generaron la definitiva renuncia o abandono del cargo del presidente democráticamente electo.*

En esta línea, existe un factor distintivo de los sucesos políticos críticos que contemplamos, que vale la pena explicitar. Tanto en Bolivia, Argentina y Ecuador en los años constatados, las crisis de gobierno no generaron una disolución del parlamento ni menos aún, la supresión de la democracia mínima, formal o electoral. En este sentido, se desnuda la siguiente certeza: la democracia electoral puede ser interrumpida y nuevamente reinstalada con reformulaciones por orden-presión popular. El ciudadano puede salir a la calle toda vez que su gobierno no esté demostrando coherencia con las promesas realizadas.

Lo interesante, alzando la lente hacia el conjunto de la región, es que a lo largo de este siglo los sectores populares de América Latina presentan dificultades para sostener los procesos políticos encausados por sus gobiernos. Más aún, un cuerpo considerable de ciudadanos latinoamericanos sometidos a encuesta en 2005 afirmaba que “los presidentes que parecen tener cierto grado de blindaje [frente al derrocamiento por movilización popular] son sólo aquellos que han producido bienes políticos (con esto refieren a las reformas políticas distanciadas de todo tipo

de resultado económico). Tal es el caso de Lula y Lagos en 2005. El caso de Chávez simboliza según este estudio, el mismo fenómeno, lo que resulta significativo para la legitimidad de la Presidencia. Incluso, como derivación, reconocemos que la Presidencia *per se* juega un rol primordial al producir legitimidad por encima de otras instituciones tradicionales, inherentes a la democracia (Latinobarómetro, 2005: 9). Sin perder de vista este dato, en materia de participación política encontramos un dato que ha sido constatado hacia 2005 “Bolivia muestra un alto nivel de participación política de sus ciudadanos a pesar de la baja cultura cívica”. Incluso, siguiendo la ola de participación política por año en este país, se señala que, en relación a toda América Latina, “la alta participación política señalada por los encuestados en cuanto a *asistir a manifestaciones como actividad política convencional* llama la atención en Bolivia, donde se señala que un 11% está dispuesto a realizar actividades políticas no convencionales e ilegales. Se trata de una población que está movilizada mas allá de la ley y de las convenciones siendo un porcentaje significativo del país” (Ibid, 2005).

En una síntesis provisoria entonces, nos atrevemos a afirmar que los datos recopilados hacia los primeros años del siglo, apuntan a que la democracia tiene su flaqueza en la representación política. La Presidencia fuerte y el voto parecieran ser los dos elementos reconocidos socialmente del juego democrático que alimentan y sostienen la legitimidad del sistema político. Entretanto, otros elementos de la política, las instituciones, se encontrarían postergados y por momentos intermitentes, firmemente cuestionados. De este modo, no resulta incoherente con la plena conciencia que “las sociedades no son caóticas”, el clima efervescente que habilita la consideración de los derrocamientos por presión popular como sucesos explicables en un contexto de exacerbación de contradicciones, como ha ocurrido en Argentina, Ecuador y Bolivia en la última década.

Ahora bien, una síntesis de cada caso indicaría la presencia de atributos comunes compartidos y, a su vez, el señalamiento de diferencias fructíferas en los procesos políticos destituyentes encarados. Para este fin, se vuelve necesario recuperar un marco analítico referencial que exponga las razones contextuales evidentes de la participación popular masiva en los procesos críticos que ponen en jaque la forma de ejercicio del poder. Esta tarea es llevada a cabo sin profundizar, por el momento, en el entramado de razones “subterráneas” -ya sean contextuales o históricas- de las organizaciones participantes. Creemos que este recuento preliminar a lo largo del primer capítulo permitirá tanto identificar la siempre aparente coherencia de los sucesos, como explorar incipientemente la lógica de los actores más importantes (definidos por su reiterada presencia en los acontecimientos conflictivos y por el “impacto consensual” que sus decisiones generaron) involucrados en los sucesos que culminan con derrocamientos presidenciales. “No se trata de romper con el sistema democrático, ni llamar a los militares al poder, sino exigir que las demandas ciudadanas sean respetadas” (Ibid, 2005: 4).

Ecuador: “*Mahuad... fuera!*”

En enero del año 2000 comenzaron las manifestaciones en Quito en demanda de la salida del entonces presidente Jamil Mahuad. En verdad, las movilizaciones en contra de las políticas económicas encaradas dos años antes ya habían ocasionado reiterados sucesos conflictivos y actos públicos de protesta. Sucede que el plan económico de 1999 había incorporado la promulgación de la “Ley de Racionalización y Reordenamiento de las Finanzas Públicas”. Ésta comprendía un plan encubierto de privatización de la electricidad, el petróleo y las telecomunicaciones. Asimismo, el

brutal aumento de los impuestos y de la gasolina (107%) sumado a la concreta amenaza de que más de 50 mil trabajadores del Estado quedarán cesantes, alimentó el malestar. Hasta el momento, el crecimiento del PIB había sido menor al de años anteriores (7%) y la inflación alcanzó un nivel del 56% (OSAL, 2000: 88). Si bien estas medidas impopulares catalizaban un escenario social crítico en el que el 69% de los hogares ecuatorianos se encontraba por debajo de la línea de pobreza (Ibid, 2008), otros de índole económica conducirían al agravamiento de la situación de la mano del involucramiento de los sectores medios en la dinámica contestataria.

Hacia el 9 de enero del 2000, la situación se agravó flagrantemente por el anuncio de presidente Mahuad de decretar la dolarización de la economía. A esto se sumó un intento de salvación de los bancos en quiebra a través del congelamiento de los depósitos bancarios de los ahorristas. Concretamente, el presidente “expidió una ley de salvataje bancario que destinó recursos del Estado para atender a los problemas de los bancos privados que habían quebrado pero ésta fue una ley condenatoria y fulminante para los ciudadanos de clase media. La protección de Mahuad a los bancos quebrados provocó que terminara decretando un feriado bancario y un congelamiento de depósitos así como el anuncio de una virtual quiebra del sistema de economía real. El exceso de impresión de billetes para afrontar las obligaciones del salvataje bancario, provocó que la inflación aumente considerablemente y la crisis de la economía real disparó la cotización del dólar a niveles nunca antes vistos. Luego de la mayor crisis económica de los últimos años, Mahuad asumió como salida la adopción del dólar estadounidense en sustitución de la moneda nacional –el sucre–” (Ibid, 2008). Entonces, la convergencia de diferentes sectores sociales primero en reclamo de un cambio de rumbo de la política económica, y luego demandando la renuncia del presidente, ocurre hacia el 2000. La

CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador⁵) anunció una protesta nacional indefinida a partir del sábado 15 de enero. “Plantean la salida del presidente Mahuad, el cese de los diputados del Congreso, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y la instauración de un “gobierno de salvación nacional”, integrado por las fuerzas armadas, sectores sociales y profesionales” (Ibid, 2008). Concretamente, se manifestaban en contra de los altos niveles de corrupción⁶ y la subida incontrolable de los precios de los artículos de primera necesidad.

Las organizaciones sociales que encabezaron el reclamo posterior al anuncio de las medidas económicas fueron además de la CONAIE, la Coordinadora de Movimientos Sociales y Pachakutik (movimiento político surgido con el fin de representar los intereses del movimiento indígena liderado por la CONAIE). Incluso en Quito, estas organizaciones a las que se agregan ecologistas, miembros de la Iglesia Anglicana, sectores de la Iglesia Católica, organizaciones de mujeres, colegios profesionales y otras organizaciones de jóvenes, como los estudiantes, conformaron el llamado “Parlamento de los Pueblos”⁷. De este modo, ante la protesta creciente,

⁵ La CONAIE es una organización política indígena con alto poder de movilización y convocatoria. Nació asumiendo la lucha por la tierra. En los '90 exigió la conformación de una Asamblea Constituyente que otorgara status oficial al proyecto político de plurinacionalidad. A lo largo de los últimos quince años ha encabezado reivindicaciones diversas entre las cuales se destacan sucesivas victorias como la concesión de autoridad sobre el control del comercio de artesanías y la mayor asignación presupuestal para la enseñanza bilingüe en el país (ver Ciriza, 2000). Ha jugado un rol importante en la legalización y otorgamiento de tierras a las diferentes nacionalidades que coexisten dentro del territorio ecuatoriano.

⁶ Según el “Informe del Período Comprendido entre Marzo de 2000 y Febrero de 2001” de la Comisión Ecuatoriana de Control Cívico de la Corrupción, 95% de los informes aprobados por el Contralor General presentaron signos de irregularidades graves en el manejo de los fondos públicos. A este dato se suman datos de Transparencia Internacional (“Índice de percepción de corrupción”) en el que Ecuador aparece dentro de los países más corruptos cerca de Bolivia. El Informe de Transparencia Internacional define corrupción como “abuso del poder público para beneficios privados, incluidos los sobornos a funcionarios públicos, pagos a los procuradores públicos y desfalcos de los fondos públicos. El término “nivel de corrupción” incluye los dos últimos aspectos: la frecuencia de la corrupción y el total de los sobornos pagados” (www.ciudadaniainformada.com/noticias-ecuador).

⁷ “Monseñor Alberto Luna, entonces arzobispo de Cuenca (la tercera ciudad más poblada del país) fue elegido presidente del Parlamento de los Pueblos por unanimidad. Se demanda el cese de los tres poderes del Estado y que quede sin efecto la dolarización de la economía. Entretanto, una encuesta de CEDATOS advertía que 53% de los encuestados estaba de acuerdo con la renuncia de Mahuad, y que otro 42% quería que el gobierno modifique el rumbo” (OSAL, 2000: 92).

generalizada y ciertamente organizada, el gobierno abrió el diálogo con los sectores implicados, lo cual le permitió naufragar unos días con la tentativa de una posible salida de la crisis mediante un acuerdo, sin embargo, esto le ocasionó una enemistad declarada con los sectores empresariales quienes le quitaron su apoyo. Frente a un escenario de crítica inestabilidad, el presidente declaró estado de emergencia en la capital, en Guayaquil y otras ciudades movilizadas. Como consecuencia inmediata, el Parlamento de los Pueblos llamó a la resistencia y a la toma del poder ejecutivo. La crónica indica que “entre 5 mil y 8 mil indígenas entraron en pequeños grupos a Quito en la noche y en la madrugada, burlando los cercos establecidos por los militares en las entradas norte y sur de la ciudad. Los días anteriores, patrullas militares obligaban a los indígenas a bajarse de los buses que se dirigían a la capital. Los indígenas se agruparon en el parque de El Arbolito y en el Ágora de la Casa de la Cultura, a pocas cuadras del Palacio Legislativo, donde, a partir de entonces, se trasladó el funcionamiento del Parlamento de los Pueblos” (OSAL, 2000: 85).

Los manifestantes, en su mayoría indígenas, tomaron el edificio acompañados de coroneles del ejército en manifiesto acuerdo. Allí mismo, acordaron la redacción de un documento que emitiera la declaración de destitución por orden popular del presidente en ejercicio y decidieron involucrar en este mismo acto el pedido de renuncia de los congresistas y los jueces de la Corte Suprema de Justicia. De este modo, acorde a los principios fundantes del movimiento, dictaminaron la conformación de una Junta de Salvación Nacional en la que en primera instancia estuvieran en representación del ejército: Lucio Gutiérrez; en representación de la CONAIE: Antonio Vargas; y en representación institucional de la justicia, un ex integrante de la Corte Suprema: Carlos Solórzano. Sin embargo, a las pocas horas, por decisión de los propios convocados, se cristalizó el triunvirato

conformado por los miembros inicialmente enumerados pero sin el Coronel Lucio Gutiérrez, sino con el General Mendoza.

Aún frente a esta prolongada deliberación, las Fuerzas Armadas manifestaron su pretensión de salvaguardar el orden constitucional, es así que poco tiempo después apoyaron la sucesión tal como lo establece la Constitución Nacional, debiendo tomar el cargo del Presidente, el entonces Vicepresidente Gustavo Noboa -reconocido político de derecha y docente universitario-. Noboa continuó la línea de gobierno de Mahuad conteniendo todo conflicto a partir de un diálogo sostenido con la CONAIE. Habilitando antes de abandonar su cargo la amnistía con la cual quedaron liberados los coroneles participantes de la insurrección que despojó del cargo a Jamil Mahuad, Noboa permaneció en el cargo de Primer Mandatario hasta 2005, contando entre sus pendientes sucesivas acusaciones por malversación de fondos en el proceso de renegociación de la deuda externa de Ecuador. Entretanto, Mahuad culminó exiliado en los Estados Unidos (país al que benefició anteriormente admitiendo el establecimiento de la Base militar de Manta) contando con cargos pendientes en su contra. Finalmente, vale recordar que ambos presidentes, en virtud de acuerdos políticos poco claros, recibieron el sobreseimiento de sus causas judiciales recientemente.

Cinco años después: “*Todos somos forajidos...*”

Sin imaginar los resultados que su declaración tendría, “forajidos” fue el nombre que Lucio Gutiérrez dio a los manifestantes que se ubicaron fuera de su casa para declararle su impugnación y expreso rechazo. Hacia fines de 2004 el entonces presidente Lucio Gutiérrez tomó la decisión de modificar los miembros de la Corte Suprema de Justicia generando la sospecha de que los sucesores serían cercanos a su confianza. Esto disparó un clima de descontento que iría

incrementándose. A su vez, la anulación del todo irregular de las investigaciones contra anteriores presidentes acusados de malversación de fondos provocó mayor indignación. El clima de tensión se completaba con la palpable crisis económica y el consecuente proceso de extensión de la pobreza.

Las protestas contra las medidas gubernamentales se centraron inicialmente en Quito, hacia los primeros meses de 2005, y tuvieron como protagonista a la clase media de la capital, agrupaciones de jóvenes y miembros de diversos colectivos indígenas (la CONAIE había apoyado la candidatura de Gutiérrez y en virtud de su escasa independencia política, había generado un cuestionamiento general. El cuestionamiento al movimiento indígena se retrajo cuando a los ocho meses de gobierno, con el acuerdo Gutiérrez-gobierno de Estados Unidos, la CONAIE manifestó el distanciamiento de la orientación política oficialista). No obstante el tiempo detonante, la intensidad de los acontecimientos generó una revalorización de las prácticas políticas en clave colectiva dentro de las ciudades. Se incentivó la creación de nuevos espacios de deliberación: ollas populares, encuentros musicales en las calles, reuniones en las plazas, debates en radios contestatarias. Una frase que evocaba la experiencia de diciembre de 2001 en Argentina sintetizaba el reclamo: "...qué se vayan todos!". Es así que el movimiento se construyó a partir de iniciativas espontáneas compartidas. Las universidades, la radio como centro de promoción de intercambio y debate de experiencias así como la total anuencia a retomar membretes de partidos políticos o agrupaciones con líderes definidos, fueron la clave. Los ciudadanos, el autodenominado "pueblo", recuperaron el sentido de la política y con ella la definición del sentido de la auto-representación.

Existe una linealidad histórica que merece ser subrayada, los sentidos de las movilizaciones del 2005 estaban también presentes en las manifestaciones contra Jamil Mahuad y Abdalá Bucaram –destituido en 1997-. Más allá de los grupos y

organizaciones sociales que llevaron adelante “el estandarte” de los reclamos, la voz de la crítica, hay en estos sucesos un sustrato común que cubre el trasfondo de los acontecimientos. Los sucesos vuelven a poner de manifiesto el cuestionamiento estructural a la legitimidad de gobiernos de orientación conservadora, de tipo neoliberal. En sociedades signadas por la desigualdad ancestral, las directrices y conflictos que acarrea el tipo de orden ortodoxo inevitablemente condujo más temprano que tarde al estallido social. Lucio Gutiérrez cayó a pesar de los intentos de último momento por recuperar la confianza ciudadana. Anunció la pretensión de cesar a los miembros de la Corte Suprema que él mismo había nombrado recientemente, pidió la renuncia del Subsecretario de Desarrollo Social (que formaba parte de una estrategia de cooptación de un partícipe de la CONAIE) y exigió al ex presidente Bucaram que abandone el país. No obstante, el suceso desencadenante de la renuncia fue el anuncio de la Cúpula militar de retirarle su apoyo.

Ahora bien, la mayoría de las interpretaciones que se realizaron sobre los dos casos de derrocamiento presidencial durante este siglo en Ecuador hacen referencia a la existencia de sucesivos golpes de Estado, o bien, a profundas crisis de gobernabilidad democrática en virtud del bajo grado de desarrollo institucional a lo largo de la última década. Lo que resulta llamativo es que más allá de la sobrevaloración de cada perspectiva, el omitido rol de las Fuerzas Armadas pone en evidencia una influencia en el sistema político del todo inusual. El margen de involucramiento en las decisiones populares y en términos generales, su capacidad de intervenir en defensa de intereses explícitos, los coloca en el centro de debate sobre los límites del juego democrático. Aún cuando la incidencia de la fuerza militar en el derrocamiento de Mahuad obedece a una razón asociada al nivel de vida de la Fuerza, puesto que la dolarización necesariamente afectaba en forma desfavorable

el ingreso de los militares de rango medio, esto no explica su participación ni el grado de articulación con el movimiento indígena.

Vale decir entonces que el papel arbitral de la fuerza militar no se manifiesta por propia decisión sino que parecen vislumbrarse explicaciones más certeras asociadas al retiro de apoyo gubernamental por parte de las elites nacionales y su consecuente manifestación en aliento a que los militares tomen el control del país a favor de un cambio constitucional. Si sumamos a este contexto el estancamiento económico, el cuestionamiento al gobierno por las altas tasas de corrupción difundidas por organizaciones civiles nacionales e internacionales, y el deterioro estructural de los mecanismos de integración social en un escenario que en la década ronda el 65% de hogares en situación de pobreza, entonces, el grado de explosión de la crisis puede explicarse.

Lo cierto es que el elemento catalizador y motivador del cambio, ha sido la participación de diferentes sujetos colectivos en forma convergente. La presión ejercida por la movilización popular con el apoyo de los militares no produjo en el país solamente un cambio institucional, un nuevo espacio político en el que las elites depositen su poder. Claramente, el consecuente escenario del contexto crítico ecuatoriano puso en el tapete la necesaria transformación estructural de las relaciones de poder. En virtud de esta razón es que el conflicto clásico entre *legalidad* y *legitimidad* puede resultar simplificador, aquello que despuntan los procesos políticos en Ecuador fuertemente influidos por no decir *orientados* por organizaciones populares, es la necesaria transformación de las relaciones sociales (Dávalos, 2005) cristalizadas en modos nuevos de praxis política. Aquello que se deja de lado entonces es la participación en formas de representación y participación popular consumidas, así como el fin del involucramiento en un debate sobre cómo deben mejorarse los procedimientos formales existentes en el juego democrático

cuando la mayoría de la población se encuentra sumida en procesos de exclusión social.

Octubre boliviano: “*Fuera Goni vendepatria*”

Otro de los sucesos de derrocamiento que despierta interés a los fines del análisis del *poder destituyente* de los movimientos sociales a lo largo de los últimos años, es el caso del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia.

A principios de 2003 el gobierno anunció medidas económicas restrictivas debido al déficit fiscal y de acuerdo a un tratado firmado con el Fondo Monetario Internacional. En esta oportunidad se decretó un impuesto al salario afectando con esta medida principalmente a los trabajadores públicos. El caso de los policías fue el más resonante porque su protesta llegó a la Plaza Murillo donde había fuerzas militares a las que se le dio la orden de “descomprimir” el conflicto. El enfrentamiento arrojó veinte muertos y en virtud de las críticas, el gobierno debió echar atrás la medida retardando su propia crisis final. Tiempo después, hacia octubre, ante rumores que descubrían la intención gubernamental de exportar gas boliviano por puertos chilenos a la costa oeste de los EEUU, México y Chile, comenzaron a desplegarse movilizaciones en la ciudad de La Paz teniendo como eje la ciudad de El Alto.

La crónica indica que “Cerca de 20 mil personas, entre trabajadores, cocaleros, campesinos y estudiantes, convocados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Estado Mayor del Pueblo (EMP) y la Central Obrera Boliviana (COB) se movilizan por el centro de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz en repudio a la exportación del gas y a la firma del ALCA. El conjunto de organizaciones que participan de la medida coincide en que el gas debe ser

industrializado y utilizado en el país” (OSAL, 2003: 149). Este suceso encuentra su precedente en la lucha desatada en el año 2000, en el conflicto del agua en la región de Cochabamba. La experiencia popular demostró la novedad de un movimiento territorial de base urbana, formado por jóvenes de escasos recursos y en su mayoría trabajadores precarios de la periferia de La Paz que afirmaron su identidad indígena (Ibid, 2003). El reclamo se volvió masivo y el pasar de los días generó un clima de enardecimiento que sumó a la clase media, principalmente universitarios, maestros rurales y urbanos, también trabajadores administrativos.

La Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto lideró el paro que se declaró posteriormente y en adelante prohibieron el abastecimiento de combustible a la capital. Esto complicó aún más el panorama optando el gobierno por reprimir llanamente a las organizaciones del Alto. Una vez más el ejército recibe la orden de reprimir extendiéndose por siete zonas de la ciudad. Los enfrentamientos provocaron 26 muertos y decenas de heridos. El 12 de octubre constituye la jornada más violenta en la historia de la ciudad de El Alto. La creciente represión no generó una merma en los episodios de protesta sino que por el contrario, agudizó la crisis. Hacia el 15 de octubre el presidente anunció en conjunto con los partidos políticos que conformaban la coalición gobernante, el lanzamiento de una consulta popular para saber la opinión de los bolivianos en relación a la exportación del gas, asimismo proponía la incorporación de la figura de la Asamblea Constituyente al texto constitucional así como la revisión de la Ley de Hidrocarburos. Como respuesta, los líderes de la oposición, Evo Morales y Felipe Quispe, realizaron un llamamiento a no aceptar la convocatoria gubernamental y solicitan una vez más, la renuncia del Primer Mandatario. Al día siguiente, mineros, cocaleros y las organizaciones que conforman la Federación de Juntas Vecinales de El Alto se movilizaron exigiendo la definitiva renuncia de Sánchez de Lozada. Como última capacidad de maniobra, el

gobierno llamó una vez más al ejército a reprimir la protesta, hecho que culminó con nuevas muertes de civiles⁸.

La proclama de la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas dictaba en ese momento un manifiesto que sostenía que “el pueblo boliviano, desde abril del 2000, ha establecido con claridad y dignidad que es posible cambiar las condiciones de vida, que es posible prescindir y derrotar a aquellos que hasta el día de hoy deciden por nosotros, a espaldas de nosotros y contra nosotros, esos llamados gobernantes que están ciegos, sordos y torpes ante las demandas de la población. La gente sencilla y trabajadora ha empezado a escribir, diseñar y construir una nueva democracia, la participativa, la de las organizaciones de multitudes con dirección colectiva y horizontal, donde las decisiones sean tomadas por todos, sin que los caudillos o partidos políticos nos den permiso para hacerlo. (...) Sánchez de Lozada ha entregado nuestros hidrocarburos y recursos naturales y propiedad a las empresas transnacionales. (...) A todas estas protestas y señales dadas por el pueblo, el gobierno ha contestado con represión y menosprecio, a esto se ha sumado el pedido generalizado de que los gobernantes se vayan, lo que en la práctica significa la pérdida de legitimidad del actual gobierno, sumado a esto las últimas actuaciones de los políticos en la nominación de cargos en el aparato estatal demuestra la falta total de ubicación de la realidad del país y la indignación de la gente en contra de la autodenominada *clase política*” (Manifiesto al Pueblo Boliviano, 2003: 1).

⁸ “La ciudad indígena-popular aymara de El Alto ha sufrido una de las masacres nunca vista en su joven historia durante las tres semanas que transcurrieron antes de la renuncia de Goni. Se ha hecho un uso indiscriminado de la fuerza militar para tratar de acallar e inmovilizar el levantamiento. (...) Desde los espacios del poder se imagina y se construye a la ciudad de El Alto como la Otra Ciudad, la ciudad de los indios. Hay relaciones de discriminación étnica que son muy fuertes, vistas incluso como naturales. (...) La masacre del 12 y 13 de octubre, de algún modo, es parte de estos mecanismos de violencia estatal anti-indígena aymara” (Mamani, 2003: 25).

Asediado por los sectores tradicionalmente disconformes como los campesinos, coccaleros, estudiantes de la UPEA (Universidad Pública de El Alto) entre otras universidades como la San Simón, mineros, indígenas, la COR, la COB, el Movimiento indígena Pachakuti y la FEJUVE, pero más tarde también por los sectores medios que se sumaron como consecuencia de los altos niveles de represión, aún perdiendo el apoyo de la coalición de gobierno: el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y el NFR (Nueva Fuerza Republicana), Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, envió al Congreso su renuncia firmada al cargo de Presidente, huyendo luego a los Estados Unidos, donde recibió sin demora asilo político.

Mesa en Bolivia: “Fusiles, metralla, el pueblo no se calla”

Hacia 2005, el ex-vicepresidente de Sánchez de Lozada y presidente en ejercicio, Carlos Mesa, amenazaba con renunciar debido a la intensidad de enfrentamientos por la disputa de apropiación de los recursos hidrocarburíferos de Bolivia. Sucede que hacia el 17 de mayo, con la firma del presidente de la Cámara de Senadores, se había promulgado la ley de hidrocarburos, vencido el plazo para que el Poder Ejecutivo realizara las observaciones pertinentes. La nueva normativa establecía el pago del 18% de regalías y el 32% de sus beneficios en concepto del *Impuesto Directo a los Hidrocarburos*, la migración obligatoria de los contratos firmados bajo la antigua ley, la recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo y la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En respuesta, los dirigentes de las principales organizaciones sociales del país rechazaron la ley y anunciaron la continuidad de las medidas de fuerza en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos (OSAL, 2005). El debate abierto sobre la posible

sanción de una nueva ley permitía reconocer los intereses de los sectores involucrados enfrentados con un fuerte reclamo popular que en un principio sólo demandaba la nacionalización de los recursos. Sin embargo, la composición social del conflicto ponía en evidencia la visibilización de un nuevo sector, y éste es la fracción que representa el interés de lograr la independencia departamental de los “estados” con recursos ligados a la explotación de hidrocarburos. En este sentido, fracciones de las élites comenzaron a expresarse por los medios contestatarios tantas veces cuestionados. Ahora bien, en oposición a esta fracción, organizaciones de El Alto como la COR, la FEJUVE y cocaleros de Cochabamba además de maestros y trabajadores mineros, encabezaron marchas para reivindicar el derecho boliviano al gas de su propio país. Si bien la participación de sectores sociales comprometidos es semejante a la de los sucesos conflictivos de 2003, en esta oportunidad la novedad radica en que la clase media fue también motor del cambio. Más aún, tanto la experiencia de 2003 y en menor medida los sucesos de 2005, indican la experimentación de unificación de diversas luchas en un único objetivo. Como característica de las jornadas del octubre boliviano vale destacar “la emergencia e incorporación al ciclo de la protesta de un movimiento territorial de base urbana, próximo a la ciudad capital, forjado por una población mayoritariamente joven, pobre y, en buena parte integrada por trabajadores precarios que supo constituirse amalgamada en su identidad y pertenencia indígenas (García Linera en Seoane y Taddei, 2004: 1).

Entonces las movilizaciones comenzaron a reiterarse y en marchas como la del 24 de mayo, en la cual cerca de 10 mil personas comenzaron a exigir, además de la nacionalización, el llamado oficial a una Asamblea Constituyente en Bolivia. Pero el escenario se complejizaba a medida que el tiempo pasaba porque nuevos sectores sociales se sumaban al reclamo, manifestando incluso nuevos reclamos

ligados a cambios estructurales. Es así como hacia el 1 de junio de 2005, las miles de personas que se movilizaron (maestros, integrantes de juntas vecinales, trabajadores fabriles, jubilados) en Cochabamba, demandaban además de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la renuncia de los presidentes de ambas cámaras parlamentarias (Hormando Vaca Díez y Mario Cossío), y el cierre del Congreso Nacional.

El 6 de junio de 2005 Carlos Mesa renunció a la Presidencia de Bolivia. Sus argumentos se centraron en la crisis social desatada, el bloqueo de caminos y las presiones de las organizaciones de Santa Cruz para otorgarle la autonomía. La renuncia fue aceptada pero las reivindicaciones populares no culminaron. El investigador boliviano Luis Tapia pone el acento en los acuerdos que Mesa había tejido con las oligarquías nacionales, “la promesa de compromiso de llamar a elecciones de prefectos y convocar a un referéndum sobre las autonomías departamentales antes que considerar la posibilidad de establecer una Asamblea Constituyente, era resultado de un acuerdo con la oligarquía. Mesa habría aceptado el programa político oligárquico y con ello habría suscripto sin saberlo, el fin de su gobierno” (Tapia, 2005: 12). Desde este punto de vista, las movilizaciones de mayo y junio de 2005 recuperaban las consignas de octubre de 2003 reactualizando la puja “movimiento popular-oligarquías regionales” que signa la historia de Bolivia. No obstante, un proceso invisible que se da en forma concomitante es que al rechazar las elites al gobierno, en forma encubierta, sus intereses se colocaban encima de las movilizaciones populares. Así, el interés de las oligarquías partidarias y tradicionales alcanzaba su concreción superponiéndose a la movilización de las fuerzas populares que buscaban ciertamente otros objetivos.

De aquí una consideración interesante que expresa incluso Pablo Mamani cuando hace referencia a “la puja por la dominación”. En Bolivia hay tres proyectos

en pugna, los tres forman parte de un derrotero histórico que no habilitó que alguno de ellos alcanzara plena concreción. Uno de ellos es el que conocemos como liberal, el cual es definido por el autor como “neocolonial”. El segundo, es el “reformista” que entiende el concepto de reforma en sentido amplio y profundo. Con él remite a aquel proyecto que considera que desde el Estado puede transformarse el orden de cosas existentes. No se trataría de una revolución, pero sí de un cambio sustancial que implica incluso la transformación de la autopercepción de los propios bolivianos. Y el tercer proyecto es el que remite al cambio sustancial del Estado y la Sociedad, alejado de toda forma moderna de organización burocrática (Mamani, 2011 en proceso de publicación). Pues, el derrocamiento de Mesa necesariamente se inscribe en una puja contradictoria de los tres proyectos de Bolivia. No obstante pareciera que las fuerzas populares lograron su victoria, pasarían meses de desestabilización y renovados sucesos de protesta hasta que un proyecto de tipo reformista en términos de Mamani, lograra cristalizarse y refundar el país.

Argentina en 2001: “*Que se vayan todos... que no quede ni uno sólo*”

En una sucesión de acontecimientos similar a lo que luego sucedió en Ecuador en el 2000, el caso de derrocamiento presidencial en Argentina evidenció un proceso de largo aliento, profundo, de agotamiento de las promesas de desarrollo en clave neoliberal.

En octubre de 2001, habían existido indicios del nivel de indignación y descontento de la ciudadanía respecto del sistema político en general y con los políticos en particular. Esto se puso en evidencia claramente en la lectura de los resultados de las elecciones parlamentarias en las que un 21% de la población se manifestó con voto nulo o en blanco. El descrédito de los partidos y la búsqueda de

nuevas formas de *hacerse escuchar* formaban parte de un clima de época que vertiginosamente puso en voz generalizada una y otra vez el concepto de “crisis y derrumbe” del sistema político y económico. El gobierno de la Alianza, opositor retórico a las políticas del anterior periodo conocido como *Menemato*, ganaba adeptos en expreso rechazo a partir del nombramiento como Ministro de Economía del Dr. Domingo Cavallo, ministro de Economía del gobierno anterior, autor del modelo económico de la Convertibilidad, asesor de la política de dolarización del régimen cambiario en Ecuador.

Y así como sucedió efectivamente en Ecuador en 2000, y sucedería luego en 2005, en Argentina la crisis económica fue el detonante crítico inmediato del fin de la administración *delarruista*. La gestión gubernamental respondió al creciente déficit fiscal protegiendo al sector financiero y a los bancos, garantizando la estabilidad del modelo antes que el bienestar de la población. Mientras el ciclo recesivo seguía su curso, el 53% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y un 23,3% vivía en condiciones de indigencia. A su vez, el desempleo alcanzaba récords del 18% de la población económicamente activa.

Cabe recordar que el gobierno de Carlos Menem había dejado un elevado déficit fiscal (7.350 millones de pesos) y una deuda externa incrementada que ejercía mayor presión sobre el déficit. En este contexto, se mantenía la paridad peso-dólar. Con Domingo Cavallo se había realizado en junio de 2001 el “Megacanje” acuerdo con el FMI en el que se prestaban al Estado 29.500 millones de dólares para hacer frente a los pagos de la deuda externa (Giribetz, 2009). A cambio, una serie de medidas antipopulares fueron aceptadas. La fuga de capitales entretanto era constante. Los datos de noviembre, previos a la crisis, arrojaban caídas del 11,6% en la industria, 18,1% en la construcción y 27,7% en la industria automotriz (Ibid). En este contexto, hacia diciembre de 2001 el gobierno publicó el

decreto 1570/2001 que reglamentó “el corralito”, una política restrictiva que limitaba el retiro de dinero a 250 dólares a la semana y se limitaban las actividades bancarias a las empresas. Se trataba de evitar la fuga de capitales y proteger al peso ante una posible devaluación, no obstante, se logró la quiebra de la economía argentina pues al ralentizar la liquidez se paralizó la actividad económica.

Mientras este era el estado de situación que repercutía sobre las clases populares, en retrospectiva puede apreciarse la existencia en el “bloque dominante” de una puja que habiéndose beneficiado de manera sustancial en la década de los '90 con el modelo económico asentado en la convertibilidad (sustentado por endeudamiento externo, deuda pública, privatizaciones de todas las empresas públicas –extranjerización de los recursos públicos- y financiarización), comenzaron a buscar salidas posibles al derrumbe que se avecinaba. La puja se daba entre dos fracciones, el sector financiero y las transnacionales asentadas en los servicios públicos privatizados por un lado, y los grupos económicos locales, particularmente exportadores, por el otro. Es en torno a las salidas de la crisis, ya sea vía dolarización o vía devaluación del tipo de cambio, que se potencian los conflictos y realineamientos al interior del tradicional *establishment* político (Seoane, Viú, Rodríguez y Santucho, 2001). Pero regresando al campo popular, vale decir que la respuesta contestataria era protagonista vigorosa de una actividad militante reiterada.

Un análisis de los acontecimientos señala que “el ciclo de protestas que se inicia a mediados de diciembre condensa, en menos de quince días, una intensa variedad de formas de lucha y movimientos. Abierto el miércoles 12 con múltiples conflictos y cortes de ruta –protagonizados por el movimiento piquetero– en todo el país, se escucharon los primeros “cacerolazos” y “bocinazos” en la Ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente, por única vez, las centrales sindicales convocaron a un paro

nacional contra la política económica que recoge un altísimo acatamiento –uno de los mayores de la década. Ese mismo día ocurren los primeros saqueos y reclamos de comida en el interior del país que se prolongan en una ola que, los días 18 y 19, se multiplica en todo el conurbano bonaerense y en buena parte de las principales ciudades” (Seoane, 2002: 2). Los protagonistas de las movilizaciones que comienzan en septiembre de 2001 son los maestros universitarios, estudiantes, comerciantes, pequeños empresarios, desocupados organizados, productores rurales y urbanos. Las organizaciones, reconocidas portavoces de los sucesos de diciembre, fueron la FTV (Federación de Tierra y Vivienda) de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), la CCC (Corriente Clasista y Combativa, agrupación política y sindical promovida por el Partido Comunista Revolucionario) y el colectivo amplio de organizaciones que durante la crisis se dio en llamar: Bloque piquetero nacional (allí se nuclea desde diciembre de 2001 organizaciones como Barrios de Pie, la Coordinadora Aníbal Verón, trabajadores y desocupados de la CTA y más tarde, el Movimiento Teresa Rodríguez). Se destaca la incorporación de sectores medios urbanos, que tanto demandaron con cacerolas en la plaza, espontáneamente la renuncia del presidente, como, en otras oportunidades y circunstancias post crisis, conformaron asambleas de participación ciudadana en los barrios. Y en este particular llama la atención la deficiencia en términos de articulación sostenida en el tiempo entre los sectores medios movilizados, “activados” políticamente en virtud de los agravios de los que fueron parte las últimas décadas, y los sectores populares, caracterizados principalmente por organizaciones de desocupados, quienes por su tradición reciente de lucha, contaban con mayor nivel de organicidad. Efectivamente puede sostenerse que existió una dificultad en alcanzar un marco de acción común consensuado. Una explicación plausible pone de relieve la ausencia de un movimiento obrero organizado como articulador del ciclo de lucha y constructor

de un frente (Seoane, 2002: 4). Muestra de este derrotero carente de una organización que diera cuerpo y argamasa unificadora al frente que virtualmente podía construirse, puede afirmarse que “si bien hubo intensas protestas particularmente de los trabajadores del sector público (maestros, administrativos) y, por ejemplo, las movilizaciones impulsadas por la CTA contra la sanción del presupuesto fiscal 2002, no existió ninguna convocatoria a huelga General” (Ibid).

Pues, la vertiginosidad de la crisis se manifiesta finalmente entre el 19 y 20 de diciembre de 2001. La crónica señala que “por la noche del 19 de diciembre De la Rúa anunciaba por cadena nacional un Estado de Sitio, medida aparentemente consensuada con los gobernadores justicialistas. Sobre el final del discurso y en un acto de desobediencia civil, los vecinos de Buenos Aires –y de numerosas ciudades del país–, comenzaban a hacer sonar sus cacerolas” en rechazo de la medida. A su vez, luego de marchas y cantos que se prolongaron hasta la madrugada, esa misma noche se anunció la dimisión del cuestionado ministro de Economía. Al día siguiente, en movilizaciones que nuevamente colmaban la Plaza de Mayo, la represión se hizo presente y se dieron a conocer los muertos por represión en los medios de comunicación. Al final del día renunció el presidente De la Rúa debiendo escapar en helicóptero de la Casa de Gobierno⁹.

Sobre cánticos, renunciadas en papel, escapes y casas de gobierno vacías

Las movilizaciones acontecidas en Ecuador, Bolivia y Argentina dan cuenta tanto de la activación de sociedades atentas, críticas e informadas, como de sujetos que a través de la organización política lograron manifestarse en respuesta a años y en algunos casos siglos de agravio. Si bien los sucesos que acontecen en el ámbito

⁹ Videos que recuerdan los sucesos de diciembre de 2001 en Argentina pueden encontrarse en: <http://www.tvpublica.com.ar/tvpublica/articulo?id=3053>

popular desafían el orden vigente, debemos señalar el rol que la rearticulación dentro de la cúpula de poder –elites- ocupa. Más allá del escenario rupturista que prefiguraron las organizaciones sociales, quienes en la mayoría de los casos orientaron la solución final a la crisis del sistema político en clave institucional, fueron los miembros del llamado *stablishment*. En cuatro de los cinco sucesos críticos que brevemente esbozamos, la reestructuración de la dominación ocurrió desconociendo las demandas populares que iniciaron los movimientos sociales. Es así que se vuelve factible un análisis que evidencie la existencia dos polos de poder, de dos crisis distintas que se solapan y niegan, que incluso se invisibilizan mutuamente. Por un lado, el poder popular, que se organiza y aglutina en demandas generalmente asociadas al mejoramiento de sus condiciones de vida. Por el otro, un debate dentro de la elite dominante que persigue intereses particulares, consagrados tradicionalmente, susceptibles de ser concretados por medios diferentes (un nuevo gobierno, por ejemplo).

Vale la pena observar cómo a lo largo de los últimos años, en el marco de fuerte cuestionamiento a las políticas neoliberales, los sectores dominantes que cristalizan su poder en los negocios realizados en los años '90 (que se volvieron internacionales en la mayoría de los casos) se colocan “sobre”, se solapan y parasitan las fuerzas populares, amalgamando discursos y aparentes objetivos de transformación, pero aventajándose de los resultados que éstas logran. El sector dominante requiere de un cambio institucional que garantice la pervivencia de los negocios encarados y en lo posible, su auto-reproducción. Los sectores populares cuestionan el sistema de representación, la nula participación y el resultado de un proyecto que no los involucra, sin embargo, luego de *una larga marcha* que pone en tela de juicio a todas las instituciones, termina encontrando en el recambio institucional, al menos a primera vista, una solución posible, aceptable.

Esta es la paradoja que parece caracterizar el conjunto de acontecimientos críticos de desestabilización y crisis política en los casos de estudio latinoamericanos de la última década. El sistema de dominación inserto en el Estado, la fuente de conflicto de intereses hasta 2005 en base a los sucesos relevados, no cambia estructuralmente. Sin embargo, cambian los actores, las figuras, los nombres que forman parte del juego y parecen conducirlo. Creemos que de este modo sucede la reestructuración del poder que signa el periodo de análisis hasta 2005, luego veremos cómo el año 2006 en diferentes coyunturas, y fundamentalmente en la voz de las organizaciones populares que siguen trabajando post derrocamientos, marcan una transformación que complejiza la lectura y por supuesto, el escenario.

Ingobernabilidad y crisis política **Apuntes sobre el discurso académico dominante**

Los sucesos reivindicativos fueron en su mayoría considerados procesos propios de un clima de *ingobernabilidad democrática* en la región que para su resolución requería desde el punto de vista oficial, la construcción de mejores y más acertadas opciones político-institucionales. La idea que está de fondo a esta perspectiva dominante es que la política y las instituciones de la democracia habrán de procesar tarde o temprano los cambios que vienen experimentando las sociedades latinoamericanas. Aumentar capacidades de gestión como guía de posibles cambios mejoraría así los problemas asociados a la representación política y la canalización de demandas.

Según el informe del *Proyecto análisis político y escenarios de corto y mediano plazo para fortalecer la gobernabilidad democrática en América Latina*, del PNUD (2008), la variedad de problemas que atraviesan los países de la región pueden ser sintetizados en dos líneas críticas que afectan la gobernabilidad. Por un

lado, *problemas político-institucionales* que incluyen crisis institucionales, límites del sistema de representación, crisis políticas carencias de liderazgo e inseguridad jurídica, y, por otro lado, *problemas de pobreza e inequidad*.

En relación al primer cuerpo de problemas la consideración es que la crisis que vive la región supone transformaciones que vinculan la vertiginosidad de los cambios sociales con los cambios de tipo institucional. Esto implicaría que su resolución incorpora necesariamente el deber de los gobiernos de “aumentar el poder democrático” relegitimando los procesos del régimen descartando “formas conspirativas de hacer política”. En ese sentido, la propuesta sobre este particular consiste en incrementar la capacidad de gestión de los conflictos mejorando la calidad de la representación y la participación ciudadanas, y a la vez, mejorando las competencias técnico-políticas de los decidores (ver Calderón, 2008: 16). Desde este punto de vista, “actuar institucionalmente ante las crisis alimenta el comportamiento democrático y facilita la elaboración y el éxito de las políticas públicas” (Ibid). En relación al segundo cuerpo de problemas inherentes al clima de ingobernabilidad regional de los últimos años, el informe del PNUD considera que la mayor diferenciación social ha afectado la calidad de las formas de reproducción social. Entonces, frente a la desigualdad y pobreza manifiestas, la idea de igualdad política supuesta en el concepto de ciudadanía se vuelve problemática. De este modo se evidencia aquello que desde los años ‘80, tiempos de transición a la democracia, se suponía desde esta misma perspectiva, “la democracia por sí misma no garantiza una convergencia hacia la igualdad social, más bien es el resultado de la acción individual y colectiva de una determinada sociedad” (Ibid, 2008).

Ahora bien, argumentando a favor de una lectura compleja que condimente y ponga en cuestión la sola lectura de las crisis a partir de la interpretación del mejoramiento institucional o sobre los factores que contribuyen a incrementar el

número de hogares pobres, es que vale considerar otras posibles explicaciones del concepto de *crisis*, del cual se sucede toda posible racionalización de los acontecimientos. Como sabemos, cada diagnóstico encuentra su resolución explicativa sustentándose en algunos determinados factores y no en otros. En virtud de este particular, un alternativo y no por ello novedoso concepto de *crisis*, puede contribuir a una lectura diferente de aquellos que acontecimientos violentos, disruptivos y caóticos exponen.

René Zavaleta considera que la crisis es un *momento creativo* por naturaleza. Un momento crítico, situación privilegiada para observar la desnudez de los acontecimientos y en ellos, los roles que los diferentes actores intervinientes juegan. “Es razonable concebir la crisis como un instante anómalo en la vida de una sociedad, y eso querría decir una hora en la que las cosas no se presentan como son en lo cotidiano y se presentan en cambio como son en verdad. (...) La crisis actúa no como una forma de violencia sobre el orden de la rutina, sino como una aparición patética de las puntas de la sociedad que, de otra manera, se mantendrían sumergidas y gelatinosas” (Zavaleta, 2008 [1986]: 19). Desde este punto de vista la crisis puede ser también un “método de conocimiento”. A partir de los síntomas de descomposición de las formas políticas se puede rastrear el momento de articulación de aquello que se está descomponiendo. De la crisis y descomposición “se va al momento constitutivo. De ahí se recorre todo el camino que lleva a la crisis como punto de partida de indagación (...) no hay un modelo teleológico subyacente en fases sucesivas de desarrollo a partir de las cuales se ordenan los hechos históricos” (Tapia en Aguiluz y De los Ríos, 2003).

De aquí que se desprenda que, lo que el PNUD ve y analiza como crisis que requiere resolución con el fin de modernizar las instituciones del orden democrático vigente para lograr mayores niveles de estabilidad y sostener un umbral aceptable

de gobernabilidad, resulte para nosotros no sólo insuficiente sino también equivocado como diagnóstico explicativo. Las crisis en América Latina constituyen mucho más que señales de una necesaria reforma institucional. La inestabilidad del juego democrático desnuda relaciones de poder ineficaces, procesos de hegemonía inacabados. La crisis desde nuestra perspectiva permite ver una configuración más honda de las sociedades latinoamericanas y sus contradicciones.

Poder destituyente y gobernabilidad democrática se han vuelto casi conceptos antagónicos. Movimiento del régimen democrático y transformación de las prácticas organizativas se han convertido en procesos diferenciales. La democracia organizativa de las organizaciones sociales parece no tener nada que ver con la democracia formal, sustantiva, mínima, manifiesta en la puesta en práctica del régimen político de gobierno. Cambio institucional y reclamo de mayor participación, entonces, se muestran como entidades opuestas, cuasi-abstractas. De aquí que la contribución central de estas reflexiones radique en recuperar el sentido, en la apuesta por resemantizar la noción de *poder destituyente* en vínculo con *la crisis*. ¿Cómo considerar que el poder constituyente de la democracia es estático, definible, y que requiera de herramientas que sólo le den estabilidad?

Desmintiendo entonces las perspectivas dominantes académicas, más allá del temor que frecuentemente desborda las lecturas sobre el orden de las formas sociales institucionalizadas y la relativa necesaria coherencia de los sucesos movimentistas inmersos en estructuras, repertorios, oportunidades, marcos de acción y formas de hacer; el poder latente popular, el poder destituyente, cuenta con propiedades que lo convierten en instrumento político privilegiado para comprender el estado de cosas existente. Incluso, más allá de una posible discusión sobre la potencialidad revolucionaria que aquí radica (Gómez Leyton, 2009), postular la maravillosa y a su vez temida capacidad de transformación que el poder

popular contiene, implica hacer referencia a la capacidad de movimiento inherente al orden democrático.

El significado de la crisis en América Latina

Los procesos destituyentes pueden ser entendidos como desencadenantes de múltiples sucesos críticos que uno a uno se alimentan sumando experiencia – acumulación política-, descubriendo una nueva distribución de capacidades. La crisis en América Latina representa un modo de desarrollo, una dinámica constitutiva, es el emergente del movimiento contradictorio de la sociedad escindida en clases sociales y a su vez, un medio para el autoconocimiento.

“La crisis es a la vez el desgarramiento y la universalidad. Las clases inertes o receptoras se escinden aquí de la unidad autoritaria, la sociedad se hunde hasta el tope mismo de sus relaciones de producción presentadas de una manera atrocemente desnuda a partir del hundimiento de su superestructura, y por consiguiente, la crisis alcanza a la universalidad de los sujetos del ámbito de la crisis, es decir, a todo el alcance político-práctico de la sociedad y no solamente a los grupos integrados a los indicadores por cierto volátiles que se usan comúnmente para medir la participación” (Zavaleta, 1974: 20). La potencialidad de transformación de un momento político crítico radica entonces en la vinculación que la clase social que inicia la movilización de reclamos e insatisfacciones pueda realizar con otros sectores sociales tejiendo un arco. Conocer lo que antes estaba vedado resulta a todas luces una oportunidad privilegiada de estos momentos disruptivos que exceden el “método de desgaste”.

Existe entonces un antes y un después en aquello que los sectores sociales activados políticamente pueden ver y sobre todo, sobre la conciencia de aquello que

pueden modificar. “Las clases aprenden las dimensiones de su poder y la eficiencia de su poder no *desde* los análisis previos, que son todos incompletos o presuntivos o totalmente inexistentes, como consecuencia de aquellos límites cognoscitivos de este tipo de sociedades en el momento de su quietud, sino a partir de su práctica” (Zavaleta, 1974: 21). Aquello que pueden y aquello que no pueden es lo que son. Entonces, en una inversión del método histórico marxista, Zavaleta nos involucra en el modo de desarrollo de lo que llama una “formación social atrasada” como lo era Bolivia a sus ojos en el derrotero de la revolución de 1952, recuperando el fenómeno del desencadenamiento de los sucesos que llevaron a la crisis como elemento de aprendizaje, como herramienta sociológica, como método de conocimiento que permite la comprensión de las implicancias más profundas de los contenidos estructurales de las crisis en América Latina.

“La crisis, por tanto, es el movimiento de estas sociedades y quizá de las sociedades en general. De aquí se derivan las cuestiones del momento del conocimiento social, es decir, de la súbita capacitación del sujeto, que es la clase para conocer lo que antes estaba vedado, de la presentación “llena” de la sociedad (...) la crisis como escuela, porque sólo la clase que se ha preparado puede en su momento conocer lo que ocurre. Como el poder es, en último término, la unidad entre la posibilidad objetiva y la conciencia subjetiva de esa perspectiva, la crisis se convierte en una escuela” (Zavaleta, 1974: 21). Si el obstáculo de una sociedad es su propio desconocimiento ya que “su propio conjunto de determinaciones la hace incapaz de volverse sobre sí misma”, su propia capacidad teórica, la autoconciencia sin duda vendrá de la mano de los momentos más álgidos del quiebre del orden establecido.

La conciencia sobre el poder popular latente derivado de la crisis, del todo ilimitado, extensible, perdurable, móvil, subversivo o constitutivo de otro orden

posible, pareciera ser la clave para una lectura que sin dejar de mirar el movimiento de la realidad social, dé de nuevo las cartas en la determinación de quiénes juegan y quiénes orientan los objetivos de juego. El poder parece estar distribuyéndose de manera alternativa, es sólo cuestión de colocarse en el mejor lugar desde el cual poder observarlo.

**Acercamiento a los hilos que conforman la trama.
La construcción teórica del objeto empírico**

Capítulo 2

La sociología no merecería una sola hora de esfuerzo si fuera un saber de especialista reservado a especialistas. No debería señalar que ninguna ciencia compromete intereses sociales de manera tan evidente como la sociología.

Pierre Bourdieu, 1984

Diez años después de la crisis que se concatenaron en la región expresando la resistencia a la hegemonía del modelo neoliberal, el clima político en América Latina ha cambiado notablemente y los movimientos sociales que colaboraron en su transformación política también se transformaron. El discurso sustentado en el reclamo de mayor pluralidad, autonomía y búsqueda de un “otro mundo posible”, no parece ser suficiente para dar cuenta del estado actual de quienes aún se encuentran en la búsqueda de un cambio social. En particular, frente al camino trazado por las organizaciones sociales de carácter popular, las dificultades, derrotas y victorias, parecieran surgir novedosos desafíos para la construcción colectiva de proyectos alternos. Aquello que postulamos es que el aprendizaje de los últimos diez años ha sido cuantioso, entonces, la evaluación sobre su desenvolvimiento puede arrojar nuevas luces derribando prejuicios y supuestos sustentados algunas veces más en voliciones político-ideológicas que en investigaciones respaldadas por datos de la realidad social.

En virtud de este particular es que a lo largo de este segundo capítulo nos hemos propuesto realizar un trabajo conceptual coherente que otorgue dirección a la investigación en torno de las hipótesis que nos planteamos. La apuesta en esta

oportunidad es presentar los elementos del esquema teórico-conceptual construido en la búsqueda de una de las primeras abstracciones teóricas que permita hilvanar la trama.

Según la perspectiva teórica de Pierre Bourdieu, existen dos realidades coexistentes: “el mundo existe dos veces”, una vez el mundo social existe en la realidad objetiva que conocemos, otra vez en nuestro análisis, en la fase analítica de carácter subjetiva; incluso, existe dos veces a través de estructuras sociales externas –campo- y a través de estructuras sociales internas –habitus-. En miras a la elaboración de un modelo que dé orden al análisis, entonces, buscamos construir un conjunto de relaciones con fines de explicación que permita dar cuenta teóricamente de la lógica de las prácticas que analizaremos. Hechos y correlaciones son las razones de estas páginas. Resulta importante aclarar que este trabajo obedece a la idea que sustenta que los objetos de conocimiento son construidos y no pasivamente registrados. Entonces, analizar el principio o los principios de esa construcción puede llegar a ser una clave importante de modo de dar cuenta del tipo de “sistema de disposiciones estructurantes y estructuradas que se constituye en la práctica de los sujetos involucrados” (Bourdieu, 2009: 85 [1980]) en acciones políticas concertadas.

Ahora bien, considerar el habitus que conforma la estructura de pensamiento y percepción de lo social, inherente a las prácticas de los sujetos de confrontación, implica reconocer el obstáculo cognoscitivo, o sea, las evasiones y fragmentaciones propias de una sociedad en relación al conocimiento que posee sobre sí misma. Hasta qué punto una sociedad está preparada para conocer y actuar sobre sus contradicciones se relaciona con el lugar que las acciones adquieren en virtud del habitus que las motiva estratégicamente en el campo. Vale decirlo una vez más, “las clases aprenden las dimensiones de su poder y la eficiencia de su poder no desde los

análisis previos (...) sino a partir de su práctica” (Zavaleta, 1974: 21). De la crisis se desprende por consiguiente el momento de súbita capacitación de los sujetos que se vuelven conscientes de su capacidad de transformación y por lo tanto, agregamos, de la transformación del propio habitus. La percepción de la realidad aparentemente formateada por el habitus como estructura interiorizada, es moldeada y transformada por momentos críticos que desde este punto de vista son también “momentos de iluminación”.

Sobre el estudio de Organizaciones Sociales en las periferias urbanas de América Latina

Vale decir en un primer intento de acercamiento metodológico de acuerdo con James Scott (1990), que resulta acertado poner en cuestión la idea de que los movimientos sociales latinoamericanos *pueden ser explicados por una teoría unitaria*. Esto es así no sólo por diferencias significativas en términos de objetivos y orientación ideológica como apunta el autor, sino principalmente por la composición de su base social, y más aún, por la variabilidad de esta composición en el transcurso del tiempo. “Los movimientos sociales se nutren con innumerables energías que incluyen, en su constitución, desde formas orgánicas de acción social por el control del sistema político y cultural hasta modos de transformación y participación cotidiana de auto-reproducción societaria” (Jelin y Calderón, 1987). Siguiendo este razonamiento, si acaso resulta importante dar cuenta de la composición social del movimiento en análisis, lo cierto es que la tarea se vuelve dificultosa debido a la amplitud -en tiempo y espacio- de un movimiento, su posible conformación relativamente espontánea y su variable perdurabilidad. En consecuencia, teniendo en cuenta esta dificultad, proponemos analizar particularmente organizaciones sociales destacables dentro del movimiento social

escogido de modo de analizar los procesos que se desarrollan en su interior, a modo de clave analítica que vuelve operacionalizable el objeto de estudio.

Siguiendo una definición simple que se engarza con el concepto fértil de “sociedad en movimiento” (Zibechi, 2007; Gutiérrez, 2008), proveniente de una geografía lejana recuperamos la idea que sostiene que “los movimientos sociales están constituidos por organizaciones formales, redes informales e individuos no afiliados comprometidos en una lucha más o menos coherente” (Belghazi y Madani, 2001: 9). Incluso compartimos la idea de que un movimiento social empieza a configurarse cuando la acción colectiva empieza a desbordar los lugares estables de la política y “se mueve a través de la sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y las formas de distribución de la riqueza social o de los propios principios de organización de la sociedad, del estado y del gobierno” (Tapia, 2008: 55) De aquí se desprende entonces, la certeza de la complejidad de su abordaje, y a su vez, la clave analítica que habilita su estudio.

La selección de una organización al interior de un movimiento para su estudio puede ser realizada por diversos métodos. En la presente investigación hemos optado por la elaboración de un trabajo hemerográfico que comprende el análisis de fuentes locales, nacionales e internacionales sobre las fechas en que se desarrollaron los procesos de movilización que ejercieron presión hasta culminar con la destitución de los presidentes de Bolivia, Ecuador y Argentina a lo largo del presente siglo XXI. En base a este recuento hemerográfico y considerando como variables: la reiterada presencia en las manifestaciones relevadas, el involucramiento en términos de elaboración y firma de manifiestos, y su impacto informativo, escogimos las organizaciones que en cada caso resultan *imprescindibles* si aquello que se busca es “saber qué sucedió” en dicho momento y lugar, que generó la caída de presidentes democráticamente electos a lo largo de los últimos

diez años. En consecuencia, para el caso de Bolivia recuperamos el caso de la Federación de Juntas Vecinales (FeJuVe) de El Alto; para el caso de Ecuador tomamos a sectores medios que grafican la composición de clase de los llamados “forajidos”, sin dejar de hacer mención al rol de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); y para el caso de Argentina hemos escogido al ya disuelto Bloque Piquetero Nacional recuperando en particular al Movimiento Teresa Rodríguez de Florencio Varela (MTR).

Como hemos intentado dejar en claro, la lente analítica se enfoca a organizaciones que postulamos compuestas por sujetos empobrecidos en Bolivia y Argentina, frecuentemente definidos como sujetos inmersos en procesos de exclusión social. Con esta formulación hipotética y considerando las particularidades del caso ecuatoriano, sostenemos que a inicios del 2000, en el reciente inaugurado ciclo de protesta, se involucran a la dinámica contestataria sectores que hasta al menos dos décadas atrás, habían estado fuera del terreno de la dinámica movimentista, de la arena de conflicto y disputa.

El protagonismo de los “sujetos marginales” hoy

Existe una consideración importante para comprender uno de los puntos de partida de nuestro análisis. Comparando las experiencias reivindicativas de principios del presente siglo XXI es posible dar cuenta de un sesgo “clasista” reiteradamente visible en los sucesos conflictivos. Existiría una condición de clase que permite leer en forma particular el accionar de los sujetos que participan y se involucran en organizaciones populares de las periferias urbanas latinoamericanas aún cuando la literatura sobre el tema considere “obsoleto” el concepto.

En un principio, -analizando la trayectoria del proyecto de la presente investigación- definíamos a estos sujetos de confrontación como “marginales”. Más allá de las características que *a priori* configuran el universo social que compone a los sectores populares, había en esta apuesta conceptual un intento de recuperación de la visión sociológica de los ‘60 y ‘70 que a nuestro criterio, pareciera arrojar luz sobre procesos que se renuevan sociológicamente pero que tienen como trasfondo condiciones estructurales presentes ayer y hoy. Aún así, colocando bajo la lente las razones esgrimidas por los especialistas que se dedicaron a analizar el uso explicativo y las transformaciones del concepto: *marginalidad* (muchos de estos autores, alumnos de los investigadores de la tradición sociológica de la modernización y de la dependencia), consideramos adecuada la decisión de *no utilizar* el término para dar cuenta de las características y condición de vida de aquellos quienes participan políticamente en organizaciones populares los últimos diez años en América Latina¹⁰.

El concepto marginalidad ha sido ampliamente discutido en las Ciencias Sociales de los ‘60 y ‘70 abriendo la intelección sobre las consecuencias de la situación de dependencia y desigualdad a la que América Latina ha llegado dentro del sistema capitalista. Marginalidad refería a una condición no sólo económica sino también cultural. En el marco de la teoría de la modernización y más tarde de la

¹⁰ Hacia el año 2003, con motivo del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología en Dallas, un conjunto de intelectuales prestigiosos en el estudio de las condiciones de pobreza en América Latina, fueron convocados por la revista Latin American Research Review. La propuesta fue debatir la actualidad y pertinencia de la perspectiva de la “marginalidad”, así como las transformaciones teóricas que en el estudio del tema se introdujeron los últimos años. En la publicación resultado de la discusión se abordan las transformaciones de la perspectiva. Cada uno de los participantes aborda la utilización del concepto “marginalidad” en comparación con construcciones temáticas y conceptuales contemporáneas vinculadas al estudio de la pobreza y la organización social. Si bien existen importantes continuidades, los autores coinciden en que la llamada “nueva pobreza” de hoy es diferente, constituyéndose como factor estructural, de carácter segmentado y paradójicamente la “nueva pobreza” es más excluyente que antes. Por otra parte, el cambio de un Estado en gran medida patrimonialista y antidemocrático hacia uno que, si bien es más democrático también es más delgado y reducido, ve transferir la intervención estatal y los sistemas de bienestar cada vez más frecuentemente a los gobiernos locales y al sector cuasi-privado de las organizaciones no gubernamentales. (de la Rocha, et. al, 2004:183-187)

dependencia, autores que vigorosamente desplazaron las miradas del cambio gradual, André Gúnder Frank, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto así como José Nun (1969) y Aníbal Quijano (1973) postularon la noción que abría un campo de análisis sobre la creciente separación entre la elite de trabajadores por un lado, y la presencia de masas marginales, por otro.

Ahora bien, desde la perspectiva funcionalista de la Sociología de los '60, el carácter del sistema de valores de los pobres había sido de la mano de la marginalidad, puesto en cuestión. Frente al proceso de migración del campo a las grandes ciudades latinoamericanas, algunos intelectuales comenzaron a advertir respecto de los valores tradicionales que con ello se atraían. De alguna manera, ser marginal era desde esta perspectiva, ser migrante, sujeto a valores no modernos y sobre todo, *potencialmente radical*. Muchas de las investigaciones de los '70 de la mano de los autores citados demostraron la invalidez de estos supuestos, e incluso afirmaron el reconocimiento de los asentamientos urbanos, periféricos y precarios no como una amenaza al orden, sino como una posible solución al problema territorial que los recién llegados afrontaban (Ward, 2004: 186). Las complejas conexiones entre los sectores formales e informales derribaron la noción de marginalidad y de "cultura de la pobreza" que argumentaba que los pobres estaban afuera de la cultura y la economía prevaleciente, de la misma manera en que transmitían la pobreza intergeneracionalmente (Safa, 2004: 188). Incluso, en el marco del proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, otros autores llegaron a afirmar (Oliveira, 1972; Roberts, 1978) que si la gente era pobre esto se debía a su peculiar tipo-capacidad de integración y no a la exclusión de estos sectores por parte de las actividades económicas formales. En este sentido, los análisis sobre el cambio económico centraron su atención en las múltiples vinculaciones entre el sector formal e informal.

Para José Nun, la marginalidad se ubicaba en el nivel de las relaciones de producción, mientras que para Aníbal Quijano la marginalidad era el resultado de “las nuevas tendencias estructurales de las relaciones de producción y de las relaciones de dominación social y política en América Latina. En la visión de Quijano, la función de «reserva» que cumplía en el régimen de producción capitalista clásico, el ejército industrial de reserva, no podía ser desempeñada ya por la mano de obra sobrante, pues mientras aquel estaba en «reserva» para ser incorporado al proceso productivo apenas fuera necesario, la mano de obra sobrante ya no tenía posibilidad de ser incorporada, pues la capacidad productiva del sistema tiende a residir en medios técnicos” (Germani, 1973). A partir de esta situación habría una superposición entre ejército industrial de reserva y la mano de obra sobrante en un mercado regido por la revolución tecnológica. Este conjunto de ideas fueron tratadas también por José Nun quien propuso la categoría «masa marginal» en un intento por rearticular las nociones del marco teórico marxista de superpoblación relativa y ejército industrial de reserva. Para él, ambas serían análogas, pues “mientras el concepto de ejército industrial de reserva corresponde a la teoría particular del modo de producción capitalista, los conceptos complementarios de población adecuada y superpoblación relativa pertenecen a la teoría general del materialismo histórico” (Nun, 2001 [1969]). En otras palabras, una y otra categoría explicarían algo semejante, pero en condiciones históricas distintas de acuerdo al grado de evolución del capitalismo.

Cuatro décadas después de los análisis que profundizaban en la marginalidad como fenómeno que alimentaba la tendencia que cuestionaba la capacidad del sistema capitalista de incorporar a la numerosa mano de obra desempleada la década del '90 expondría, sin mayores miramientos, condiciones “fértil” para considerar la categoría con pertinencia analítica. El resultado de las reformas

estructurales implementadas, cristalizado en un creciente empobrecimiento, escasas oportunidades de inserción en el mercado de trabajo, achicamiento de la estructura de oportunidades que de ello se deriva, así como las dimensiones de exclusión y violencia urbana, configuraron el escenario urbano que removi6 el fondo de aquellos viejos conceptos, con el fin de reverlos y ponerlos nuevamente en pr6ctica.

A6un en el marco de un clima pol6tico notablemente diferente, fen6menos novedosos de complejizaci6n social se sumaron al terreno problem6tico. El empobrecimiento de las clases medias, el marco pol6tico de la democratizaci6n como proceso constituido y el ya no evidente crecimiento de las grandes ciudades latinoamericanas dieron cuenta de una transformaci6n que contrariamente se6nalaba la dificultad de ser le6da con las mismas herramientas anal6ticas de los a6os '60. Las nuevas condiciones pol6ticas generaron formas de inserci6n del todo novedosas e incluso, se ensayaron formas de reivindicaci6n: "As6 como bajo el neoliberalismo de los '90, nuevas formas de organizaci6n social han emergido, e invariablemente estas est6n respondiendo a las condiciones de empleo y a la creciente escasez de trabajo" (Portes y Hoffman, 2003 *en* Ward, 2004). En t6rminos de Elizabeth Jelin (2004) hace d6cadas se hablaba de "cultura de la pobreza" dentro de un paradigma que contrapon6a una sociedad moderna (l6ase blanca, urbana, occidental, masculina) a "culturas tradicionales" (rurales, conservadoras). En el comienzo del nuevo siglo, la relaci6n entre pobreza, marginalidad y cultura se plantea de otro modo: las desigualdades sociales persistentes, duraderas, as6 como las desventajas acumuladas, no se distribuyen al azar sino que siguen l6neas de g6nero, de color, de identidad 6tnica. "Se ha hablado de la feminizaci6n de la pobreza", de la marginaci6n hist6rica de las demandas ind6genas, de la discriminaci6n racial (...) La saliencia de identificaciones de este tipo (que combinan

de manera muy compleja identificaciones ancestrales con las nuevas propuestas de la multiculturalidad) en un contexto de profunda desigualdad social, puede entonces llevar a la paradoja de privilegiar o celebrar políticas de reconocimiento cultural, y a preocuparse menos por las políticas de redistribución que se han dado en la región en la última década” (Jelin, 2004: 200).

Evidentemente, los beneficios de la sociedad en crecimiento –social, económico y cultural- propia de los '60, no resultan asimilables a la sociedad actual. No podemos referirnos ya a las oportunidades que la clase trabajadora obtiene en procesos de construcción de pujantes mercados internos. Sin duda, la crisis de los '80, el apogeo neoliberal de los '90 y los tiempos actuales acotaron las funciones tradicionales del Estado impidiendo un apoyo al robustecimiento de los mecanismos tradicionales de movilidad social, consecuencias manifiestas de la complejidad social actual. La heterogeneidad de nuestras sociedades y el deterioro manifiesto llevan a pensar en la pobreza y en la *nueva pobreza* -en tanto pobreza de recursos de la clase media-, como componente integrado en las estructuras de exclusión social. “En comparación con países como Brasil, Centro América, México y Perú, la clase trabajadora y la clase media de Argentina y Uruguay están confrontando un severo deterioro de su estándar de vida, una dramática reconfiguración de sus oportunidades de trabajo y, más importante, la memoria de los tiempos mejores” (Roberts, 2004: 195). Incluso el trabajo asalariado, antes estandarte de la integración, hoy da cuenta de su capacidad generadora de fragmentación y precariedad social.

Más aún, considerando aspectos de distribución espacial es posible dar cuenta de los cambios y condicionantes que no permiten dar cuenta de una situación análoga. La diferenciación de los territorios de la marginalidad en tanto cordones urbanos o suburbanos periféricos a las grandes ciudades ya no se

evidencia como el lugar geográfico de migración o establecimiento de los más pobres. La actualidad demuestra que la pobreza se entrelaza, cruza y mixtura con sociedades fragmentadas que ven en zonas urbanas de sectores acomodados, pobres como vecinos, y a su vez en zonas “de miseria”, barrios privados en extrema cercanía. Esto explica en parte cómo desde mediados de los '80 el concepto marginalidad fue reemplazado por terminología que tal vez ahora nos resulte más familiar: el andamiaje conceptual de la exclusión social, la desigualdad, la segregación espacial y la vulnerabilidad. Todos ellos conceptos vinculados a las discusiones sobre los derechos, la ciudadanía, la democracia participativa y la transparencia (Perlman, 2004). Entonces ¿Este cambio conceptual implicó el fin explicativo del concepto marginalidad? ¿Acaso se produjo un *aggiornamento* –que implica un giro terminológico pero también ideológico- tal como ocurre en ciertos momentos “reguladores” de la ciencia social?

Actualmente el concepto que define “lo marginal” no resulta extraño ni ajeno a la jerga cotidiana. Luego de un periodo de pronunciado silencio, vuelve a escucharse la referencia a sujetos marginales en el discurso popular, en las calles, en la prensa, en la música –en el rap, en el funk, en el reggaetón-. El concepto ya no remite a los más pobres y su problemática integración sino, diferencialmente, a los sectores que están fuera de la ley, fuera del ámbito del control del Estado. En un viraje que no deja de convertirse en espacio propicio para un renovado debate, el espacio de la ilegalidad, las prácticas delictivas, el tráfico de drogas, de armas o simplemente los bandidos, quienes están “fuera del sistema”, suelen ser considerados “marginales”.

Después de todo, extraños son los comportamientos de la teoría social, que ve morir antiguas formas de expresión, renacer alternas y en todo caso, transformar universos de significación de aquello que forma parte del orden establecido.

Finalmente la precisión conceptual no deja de dirimir arbitrariamente, acorde a cánones y códigos éticos del momento, lo aceptable y susceptible de ser analizado, y aquello que de hecho, resulta para las ciencias sociales dominantes, marginal.

Colocando una lente sociológica móvil sobre los sujetos colectivos

Regresando a las formulaciones que nos hemos planteado, pareciera haber una de particular trascendencia que opera como hipótesis transversal no explicitada. El significado del concepto movimiento social “ha estado tradicionalmente fundado en una concepción historicista, lineal y objetivista de la acción colectiva, que lo consideraba un agente clave del cambio social y la modernización de la sociedad a través de los conflictos que suscitaba” (Mellucci *en* Laraña, 1999). Más específicamente, desde esta perspectiva ampliamente consensuada, “los movimientos eran análogos a las revoluciones, en tanto que se los consideraba manifestaciones del movimiento interior de la historia, y la precondition para su explicación "objetiva" requería que ésta fuese independiente del punto de vista del observador. Esa imagen se funda en la analogía entre los movimientos sociales y las tendencias históricas”, y es equivalente al concepto de fuerzas históricas, en consecuencia (Ibid).

De aquí que nos preguntemos poniendo en espejo esta reflexión con otras del pasado que veían en las organizaciones populares o periféricas como espacios colectivos susceptibles de convertirse en actores revolucionarios: ¿Es esta definición un reflejo de lo que la literatura actual sigue “iluminando” de las organizaciones sociales contestatarias? ¿Acaso se esconde detrás de esta afirmación una volición de los investigadores de entender y explicar a los movimientos sociales como sujetos portadores del cambio histórico?

“Dependiendo de la preferencias ideológicas del investigador, la historia de un movimiento social puede presentarse como el relato heroico del ascenso y la caída de un sujeto colectivo –representado en una o varias organizaciones-; como una conspiración de pequeños grupos que buscan manipular a determinados sectores sociales; o como un conjunto de pequeños relatos o “voces bajas” de la historia que confluyeron en un movimiento. Probablemente más que en otras problemáticas estudiadas por las Ciencias Sociales, el análisis de las causas y consecuencias de la movilización social tiende a trascender debates académicos para mezclarse con inquietudes políticas” (Pirker, 2008: 44). Teniendo en cuenta esta brillante consideración, vale la pena cambiar el modo de formular las preguntas de modo que éstas puedan convertirse en vectores susceptibles de ser problematizados rigurosamente.

Las organizaciones sociales que han protagonizado sucesos contestatarios significativos en América Latina a lo largo del presente siglo XXI, ¿Dan cuenta de la conformación de una matriz social estancada, constituyen manifestaciones de una vulnerabilidad que persiste y que encuentra en la resistencia y lucha por demandas específicas, estrategias de subsistencia? ¿Reproducen una sociedad clasista segmentada, o sin dejar de trabajar en la constitución de un polo contestatario buscan recuperar derechos, tal vez antiguos mecanismos de movilidad social?

Sin negar el importante papel que estas formas colectivas han asumido los últimos años, aquello que sostenemos es que sus prácticas y más aún, los “imaginarios de resistencia” que promueven configuraron una nueva subjetividad conformada en la crisis, en los distintos momentos de lucha. “Si bien es cierto que las estructuras económicas y políticas nacionales, son fundamentales en las configuraciones del poder, la organización y legitimidad de la dominación se sostiene en la cultura, las prácticas cotidianas y los imaginarios sociales que las

regulan” (Hoertmer, 2007:61). Entonces, recuperando la especificidad del objeto de estudio, pareciera útil aclarar lo siguiente: consideramos a las organizaciones populares de Bolivia, Argentina y Ecuador, incluso a los movimientos sociales que las enmarcan, como actores clave que colaboraron y ejercieron presión para dar impulso a las crisis políticas que arribaron en cada caso a la dimisión de su primer mandatario constitucional. No postulamos a las organizaciones como el actor definitorio para la comprensión de la coyuntura. Tampoco sostenemos que las organizaciones *per sé* “tienen el poder destituyente”. La correlación de fuerzas, en cada caso ha sido peculiar y decantó en una transformación política que les otorgó un nuevo lugar en la historia reciente.

En consecuencia, nos preguntamos en torno a “cómo” han construido estas organizaciones populares “capacidad destituyente”, de qué modo han contribuido en las transformaciones políticas recientes de sus países, qué prácticas han operado en miras a un cambio emancipatorio¹¹, y lo más importante, cómo ha afectado la participación en sucesos conflictivos de magnitud y sus consecuencias, en la “vida cotidiana” de cada organización, en las estrategias de reproducción social de los sujetos movilizados que en ellas participan.

Capacidad destituyente y organización social: las prácticas como clave analítica

De modo de dar cuenta de esta construcción social, de las transformaciones que en cada colectivo han operado, incluso de las organizaciones materializadas en

¹¹ Entendemos por emancipación una transformación social tal que implique un “cambio de estado de las relaciones sociales existentes”. En concordancia con Raquel Gutiérrez, es posible considerar que un cambio semejante se daría sólo si se recupera la posibilidad de decidir –de manera no delegativa- sobre los asuntos públicos inhibiendo “el valor sobre las personas concretas generalizándose otro modo de relación social que descansa en el despliegue del valor de uso de las cosas, a partir de su reapropiación por las personas libremente asociadas para sus fines autónomos” (Gutiérrez, 2008: 23).

acciones, opciones y puesta en movimiento de recursos, consideramos necesario recuperar el análisis de las prácticas.

La capacidad destituyente es multifactorial aunque la capacidad de ejercer presión de ciertas organizaciones sociales sea un factor interviniente muy importante. Las organizaciones contribuyen, colaboran, agregan una tensión crucial, sin invalidar la lectura de otros factores participantes. Aquello que sabemos es que los sectores populares y los sectores dominantes se juegan con sus propios recursos habilitando que las presiones confluyan, entonces, se vuelve importante analíticamente dirimir posiciones, escudriñar quiénes luchan desde qué posición y qué prácticas operan en la disputa. Por eso pareciera pertinente recordar que “las situaciones se dirimen siempre en condición de posibilidad”.

Las preguntas que orientadas hacia este particular se desprenden del análisis en un acercamiento concreto, han sido: ¿Quiénes participan, cómo y a través de qué prácticas cotidianas? ¿Qué experiencias, valores, acciones y elecciones ponderan quienes participan movilizándose? -¿De qué recursos, entonces, está hecha la capacidad destituyente?- Más aún, otorgamos importancia a las significaciones otorgadas, por eso nos preguntamos: ¿Cuáles son las lecturas que los propios involucrados hacen sobre la correlación de fuerzas, los medios y los objetivos de la lucha al momento de elegir las acciones a emprender? ¿De qué modo “el futuro se anticipa el presente como expectativa”? De esta manera y a partir de las implicancias derivadas, el camino se orientó sin más a una posible lectura de las formas de participación y a la visión que cada sujeto tiene sobre “qué significa hacer política”. Desde este punto de vista, sólo el propio relato de los participantes puede responder a estos interrogantes que construyen una peculiar lectura de los fenómenos acontecidos. Así, dar contenido de definición a las prácticas se constituye en el medio a partir del cual es posible que la teoría se convierta en

instrumento para pensar. La lógica de las prácticas implica a partir de esta lente, pensar a través de la teoría. “Uno de los efectos fundamentales entre el sentido práctico y el sentido objetivado es la producción de un *mundo de sentido común* cuya evidencia inmediata se duplica por la *objetividad* que asegura el consenso sobre el sentido de las prácticas y del mundo, es decir la armonización de experiencias y el continuo refuerzo que cada una de ellas recibe de la expresión individual o colectiva” (Bourdieu, 2009: 94 [1980]).

Lo cierto es que en su práctica cotidiana, los sujetos que colaboran en acciones colectivas como las organizaciones populares, comparten un código común, un espacio de significación. La homogeneidad analítica de las “formas de ser” en el mundo –definido como *habitus* por Bourdieu-, observable en determinadas condiciones de existencia, permite que las prácticas y acciones puedan ser inteligibles y por lo tanto explicables. Por esto vale considerar que “un estilo de vida es el conjunto de gustos, creencias y prácticas sistemáticas características de una clase o una fracción de clase determinada. Se trata de las opiniones políticas, las creencias filosóficas, las convicciones morales, las preferencias estéticas, las prácticas sexuales, alimentarias, de vestido, culturales, etc.” (Alvarez-Larrauri, 2004: 190). En el caso de las organizaciones populares que consideramos, las acciones conjuntas, colectivas, sólo pueden realizarse con una sustancial concordancia entre los participantes. Las disposiciones que se reconocen en sus prácticas, sus declaraciones en relación a las mismas permiten dar cuenta de este “concierto” establecido. Más aún, el sentido colectivo opera reactivando el sentido objetivado en organizaciones, manteniéndolas en actividad. ¿Entonces el sentido organizador de las prácticas y representaciones es efectivamente compartido?

Suponemos como hemos afirmado, que hay una estructura de clase manifiesta en las organizaciones de los sectores populares que trabajan en las periferias de las grandes ciudades latinoamericanas. Aquí cobra valor la composición social. En virtud de este particular destacamos el concepto *habitus de clase* como funcional a los efectos comparativos: “la homogeneización objetiva de los *habitus* de grupo o de clase que resulta de la homogeneidad de las condiciones de existencia es lo que hace que las prácticas puedan estar objetivamente concordadas por fuera de todo cálculo estratégico” (Bourdieu, 2009: 95 [1980]). De este modo, más allá de su pertenencia originaria a espacios de desarrollo rural o urbano, indígenas o no indígenas, es que consideramos posible y atinada la comparación. Creemos que la pertenencia de clase excede la definición del origen para hacer hincapié en las condiciones materiales de existencia, en los condicionantes que actúan delimitando las opciones de vida posibles.

El *habitus* de clase es definido como “un sistema subjetivo pero no individual de estructuras interiorizadas, esquemas conocidos de percepción, de concepción y de acción” (Bourdieu, 2009: 98 [18980]), su utilización como concepto explicativo permite “fundar la concertación objetiva de las prácticas y la unicidad de la visión del mundo en la impersonalidad y la sustituibilidad perfecta de las prácticas y de las visiones singulares” (Ibid, 2009). Ahora bien, en tanto esquema que conserva pautas de percepción y acción sólo en la crisis es que puede considerarse su transformación. En momentos de derrumbe del orden vigente se hunden las mediaciones y las clases se presentan desnudas, como realmente son. Si bien Bourdieu no vislumbra esta transformación, consideramos que Zavaleta agrega el elemento transformador crucial que le otorga al *habitus* nueva dimensión. En la confrontación política está la semilla de la mutación del propio entramado de percepciones y acciones, la intersubjetividad se da en momentos de constitución de

novedosos procesos políticos. Pues el carácter propio de la expresión del *habitus* de clase en la crisis es el que permite comprenderlo como elemento de liberación.

Aún cuando existen alternativas conceptuales menos polémicas como la de Daniel Bertaux quien propone el término “categoría de situación” para definir la situación particular que resulta del común denominador de un conjunto de personas de características similares, creemos acertado adherir a la perspectiva “socializante” de Bourdieu en miras a recuperar el elemento analítico que circunscribe, recorta, de manera más precisa las propiedades del objeto. La subjetividad socializada que propone el *habitus* en tanto sistema durable y transformable de esquemas de percepción, apreciación y acción, incorpora la dimensión del conflicto inscribiendo las acciones de los sujetos en un *campo*¹². En cambio, para Bertaux categoría de situación como concepto explicativo –se afirma que una situación “es social en la medida en que origina presiones y lógicas de acción que tienen no pocos puntos comunes, en la medida que se percibe a través de esquemas colectivos, y en la medida en que una misma institución se ocupa eventualmente de ella” (Bertaux, 1997: 19)- no contempla la dimensión de los intereses orientados a luchas por toma y escalonamiento de posiciones.

“La afinidad estructural de los *habitus*, perteneciente a la misma clase es capaz de engendrar prácticas que son convergentes y objetivamente orquestadas fuera de toda intención colectiva y de toda conciencia colectiva” (Álvarez, 2004: 191). Esto ocurre aunque Bourdieu postule que “las clases sociales no existen”. De

¹² Vale especificar que el *habitus* consiste en un sistema durable y transformable de esquemas de percepción y acción que resulta de la institución de lo social en el cuerpo. El campo en cambio es una abstracción teórica, un sistema de relaciones objetivas trazadas en un plano analítico, producto de la institución de lo social. Ambos conceptos –campo y *habitus*-, centrales en la propuesta teórica de Bourdieu, designan conjuntos de relaciones. Mientras que un campo son relaciones objetivas, históricas, entre posiciones ancladas en ciertas formas de poder, el *habitus* toma la forma del conjunto de relaciones históricas depositadas en el seno de los cuerpos individuales, bajo la forma de esquemas mentales, e incluso corporales. “El *habitus* es el principio activo, irreductible a las percepciones pasivas, (...) esta identidad práctica sólo es accesible a la intuición en la inagotable e inasible serie de sus manifestaciones sucesivas, de modo que la única manera de aprehenderla (...) es en la unicidad de un relato totalizante” (Bourdieu, 2007 [1997]: 77).

aquí que aquello que pueda ser útil sea la consideración del *espacio social* como construcción teórica a construir. “Lo que existe (...) es un espacio de diferencias en el que las clases existen en cierto modo en estado virtual, en punteado” (Bourdieu, 2007 [1997]: 25), no como algo dado. De este modo se reconstruyen incluso las representaciones que los sujetos tienen sobre su espacio social. Evidentemente, espacio social no refiere a un espacio geográfico sino a los acercamientos y las distancias sociales que pueden observarse y analizarse.

“La clase social no puede ser definida por una sola variable o propiedad (ni siquiera la más determinante: “el volumen y la estructura del capital”), ni por “una suma de propiedades” (origen social + ingresos + nivel de instrucción), sino por la estructura de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes que confiere a cada una de ellas y a los efectos que ella ejerce sobre las prácticas su valor propio” (Bourdieu, 1991: 117-118). Es a partir de esta afirmación que en la misma línea García Canclini afirma que es necesario romper con el pensamiento lineal, que no conoce más que “las estructuras de orden simple de determinación directa” por lo que se debe tratar de reconstruir en la investigación “las redes de relaciones encabalgadas, que están presentes en cada uno de los factores”. De aquí se deriva que “para conocer las clases sociales no es suficiente establecer cómo participan en las relaciones de producción; también constituyen el modo de ser de una clase o una fracción de clase el barrio en que viven sus miembros, la escuela a la que envían a sus hijos, los lugares a los que van de vacaciones, lo que comen y la manera en que lo comen, si prefieren a Bruegel o a Renoir, el Clave bien temperado o el Danubio Azul. Estas prácticas culturales son más que rasgos complementarios o consecuencias secundarias de su ubicación en el proceso productivo; componen un conjunto de características auxiliares que, a modo de exigencias tácitas, pueden

funcionar como principios de selección o de exclusión reales sin ser jamás formalmente enunciadas” (García Canclini en Bourdieu, 1990).

No obstante, sólo es posible definir una clase social cuando ésta entra en confrontación con otras clases sociales. Así como la confrontación política es la que augura la transformación del esquema de lo social incorporado, las clases, la observación de otros sectores y sus manifestaciones se presentan en la crisis como elementos de mayor intensidad¹³. Finalmente, el rasgo central de una sociedad “no está dado por la dependencia y la marginalidad sino por la naturaleza de clase de su sistema estatal-económico” (Zavaleta, 1974, 51), se trata desde este punto de vista de una formación social que atraviesa el tiempo por un lado, como proceso. Y a su vez, es la conclusión de este proceso en una unidad, una desigualdad histórica acumulada.

El conflicto como eje de engranaje de la realidad social

Las acciones concertadas de organizaciones sociales en lucha obedecen a demandas y reclamos fundados frecuentemente explicitados. Cada colectivo en relación a su plan de lucha y en algunos casos espontáneamente, moviliza su acumulación de experiencias en forma particular. Las dinámicas de filiación, competencia, la consideración de los recursos de poder movilizados plantean dilemas y acciones particulares en el seno del colectivo. Esto permite introducir el concepto de estrategia. Desde ya, comprendemos la estrategia como acción

¹³ “La conciencia de la clase obrera no puede ser una verdadera conciencia política si los obreros no están acostumbrados a hacerse eco de *todos* los casos de arbitrariedad y de opresión, de *todos* los abusos y violencias, *cualesquiera que sean las clases afectadas*; (...) la conciencia de las masas obreras no puede ser una verdadera conciencia de clase si los obreros no aprenden –basándose en hechos y acontecimientos políticos concretos y, además, actuales sin falta – a observar a *cada una* de las otras clases sociales en *todas* las manifestaciones de su vida intelectual, moral y política; si no aprenden a hacer un análisis materialista y una apreciación materialista de *todos* los aspectos de la actividad y la vida de *todas* las clases, sectores y grupos de la población” (Lenin, 2000 [1902]: 50).

expresa, operacionalizada, distinta de una “acción racional con arreglos a fines”. Aquella acepción que recuperamos para el análisis de colectivos contestatarios latinoamericanos de la última década, reside en la consideración de la estrategia como apuesta por un “cambio de lugar social”¹⁴. Si el *habitus* es el principio ordenador de las prácticas, éste no puede más que derivarse de los condicionamientos propios de particulares condiciones de existencia. El sentido práctico entonces, es objetivado en estrategias.

El uso del término como sostiene de Certeau (2007: 64) se justifica en que “las prácticas dan una respuesta adecuada a las coyunturas. Pero Bourdieu repite al mismo tiempo que no se trata de estrategias propiamente dichas: no hay opción entre varias posibles, por tanto “no hay intención estratégica”; no hay introducción de correctivos debidos a una mejor información, por tanto no hay “el menor cálculo”; no hay previsión, sino sólo un “mundo presunto” como la repetición del pasado”. En suma, es porque los sujetos no saben lo que hacen, que lo que hacen tiene más sentido de lo que ellos pueden imaginar. “Docta ignorancia pues, habilidad que no se conoce”. De este modo no caemos en la fe de un concierto que se construye racionalmente, menos aún en la aceptación de un derrotero histórico inexorable. Creemos que la noción de estrategia permite construir y reconstruir las prácticas que, operadas en una determinada situación acorde a una determinada correlación de fuerzas, son pasibles de ser explicadas. Esto no otorga más que el protagonismo a los sujetos actuantes. El trabajo se convierte así en un acercamiento etnográfico a la realidad social, las prácticas, las recurrencias, las estrategias “sabias pero ignorantes”, habilitan a otorgar cierta coherencia que permite considerar la presencia de un campo teórico que requiere ser construido o re-construido para su

¹⁴ Para el geógrafo Walter Porto Goncalves (2001: 82) todo movimiento social se configura a partir de aquellos que rompen la inercia y se mueven, es decir, cambian de lugar, rechazan el lugar al que históricamente estaban asignados dentro de una determinada organización social, y buscan ampliar los espacios de expresión”.

comprensión. A través de las prácticas capaces de transformar el propio *habitus* que guía la conducta es que el vínculo estrecho con otros sectores de la sociedad abre espacio para la concertación de clase en miras a la liberación.

En cada campo hay sujetos dotados de un *habitus* particular que implica el reconocimiento de las reglas de juego, reglas que contienen y prefiguran un orden individual-social con capacidad de contención y reproducción. La estructura del campo consiste en un estado de la correlación de fuerzas entre los agentes o instituciones que intervienen en el conflicto, es la mediación entre el sujeto y la realidad social. Comprender que a través de las prácticas en tiempos de crisis es posible transformar el *habitus* significa considerar que el camino hacia la liberación se abre a partir de la acción colectiva ligada al espacio de confrontación. Por eso podemos hablar de “sujetos de confrontación”, de espacios de rebeldía en clave colectiva, de *habitus* de clase reconocido a partir de la disociación e intercambio con otras clases sociales. El *habitus* es el potencial de contención, y a su vez, el de la liberación.

Ahora bien, del esquema teórico de Bourdieu se desprende que la sociedad es “un espacio formado por distintos campos más o menos autónomos atravesados por lucha de clases, fracciones o grupos. Estos campos provienen de la división social del trabajo y de los procesos de diferenciación y complejización de las sociedades occidentales” (Álvarez, 2004: 192). En ese sentido, una sociedad diferenciada consistiría teóricamente en un conjunto de esferas relativamente autónomas no regidas por una única y delimitable fuerza (llámese capitalismo, modernidad o racionalidad occidental), sino que cada orden de la vida, cada campo, poseería sus propios principios de regulación y diferenciación. Más aún, desde este punto de vista, los conflictos producto de las estrategias de los actores serían

asimilables a dicho orden¹⁵. Si tomamos estas afirmaciones como válidas, aceptaríamos la existencia de un orden lógico en los modos de construcción de la realidad social latinoamericana. Asimismo, estaríamos aceptando que las exacerbaciones de sus conflictos en términos de crisis obedecerían al funcionamiento de uno de los campos. No obstante, nuestra consideración encuentra sus límites en este cuerpo de ideas. La política en América Latina no está delimitada a uno de los campos en que se “ordena” la vida social. La crisis y el conflicto como momentos desestructuradores por excelencia, estallan el ordenamiento coherente de los campos como entidades autónomas. Los clivajes étnicos se yuxtaponen con razones económicas, las desigualdades sociales explotan en desigualdades culturales y de acceso a formas participativas propias del campo político. En consecuencia, podríamos aventurarnos a definir los campos en América Latina como “campos porosos” que encuentran en la movilidad y en la invasión de unas fuerzas sobre otras, razones políticas de confrontación. Las sociedades latinoamericanas no admiten definiciones unívocas, pues no se trata de sociedades tan estructuradas y asentadas en instituciones como las europeas.

Reconstruir trayectorias para acercarse a la realidad social

Ahora bien, el “campo poroso” cuenta con una ventaja analítica en tanto concepto enmarcador temporalmente delimitado en el que acontecen trayectorias.

¹⁵ “Uno de los aspectos más atractivos del concepto de campo lo encontramos precisamente en su utilidad para mediar entre la estructura y la superestructura, así como entre lo social y lo individual. (...) En vez de deducir del carácter general de la lucha de clases el sentido particular de los enfrentamientos políticos o artísticos, indagará cómo luchan por la apropiación del capital que cada campo genera los grupos que intervienen en él. La sociedad, y por tanto, la confrontación entre las clases, es resultado de la manera en que se articulan y combinan las luchas por la legitimidad y el poder en cada uno de los campos. ¿Qué es lo que constituye a un campo? Dos elementos: La existencia de un capital común y la lucha por su apropiación (García Canclini en Bourdieu, 1990).

La posibilidad de responder interrogantes sobre la potencia de construir capacidad destituyente, puede analizarse recuperando en forma virtualmente lineal, las prácticas y sucesos vividos por los sujetos involucrados. Más aún, a partir del análisis de trayectorias, se analiza la pertenencia de clase de los sujetos, su movilidad social y de espacio-territorial; aspectos imprescindibles para un análisis situado que comprenda la potencia crítica del acto subversivo de destituir.

Sin embargo, la trayectoria es una construcción intelectual, de aquí que sea considerada una herramienta analítica. Su utilidad radica en habilitar la construcción y reconstrucción de la referencia empírica. Como veremos, la hoja ruta consiste en dibujar un tramo, recorrer el derrotero planteado y delimitar los límites temporo-espaciales del relato. La herramienta permite objetivar, operar con la variable temporal distinguiendo ciclos –propios de la realidad social- y etapas –que obedecen al principio rector del objeto de estudio-. De este modo, se vuelve observable la configuración de posiciones, los cambios de lugar social a través del tiempo. Es así que postulamos que hay un tiempo cronológico en el que los sucesos acontecen, pero también hay un tiempo variable, definido por la tradición del sujeto. “Tratar de comprender una vida como una serie única y suficiente en sí de acontecimientos sucesivos sin más vínculo que la asociación a un sujeto cuya constancia no es sin duda más que la de un nombre propio, es más o menos igual de absurdo que tratar de dar razón de un trayecto en el metro sin tener en cuenta la estructura de la red, es decir la matriz de las relaciones objetivas entre las diferentes estaciones” (Bourdieu, 1997: 82).

Esta consideración trae a colación una idea de Raúl Zibechi quien, inmerso en el entramado del análisis de los sectores populares, afirma que “el recorrido para subsistir permite aprehender el vínculo con la política de los distintos sectores” (Zibechi, 2007: 179). Esta idea con la cual simpatizamos sostiene además que la

agenda de los sectores populares urbanos “no está escrita ni prefijada, no se encuentra enmarcada en tácticas y estrategias sino que como suele suceder en la historia de los oprimidos: el andar hace camino”. Por eso sugiere en un trabajo siempre *a posteriori* “leer” los acontecimientos políticos. Sólo “después” puede reconstruirse la coherencia de un recorrido que siempre rebasa las intenciones iniciales de los sujetos de confrontación. De aquí la pertinencia analítica de un estudio sociológico que tome como herramienta a las trayectorias. En nuestro caso, la destitución presidencial, el hecho público significativo, autoriza a ir hacia atrás en el tiempo, a recuperar el tiempo pasado como constitutivo de una necesaria explicación sobre el presente.

La política plebeya como política popular

Los *ciclos* y las *etapas*, en tanto distinciones analíticas “del tiempo” como protagonista de los sucesos críticos, suelen presenciar como hitos magnificentes hechos proyectados por haces de voz pública. Esta proyección hiperbólica provoca que los sucesos críticos pasen a ser considerados *grandes sucesos* –recuperados por los medios, retomados por académicos, comentados por líderes de opinión-. “Los malestares sociales sólo tienen existencia visible cuando los medios hablan de ellos, es decir, cuando los periodistas los reconocen como tales” (Champagne en Bourdieu, 1999: 51). De este modo, escapan de la escala privada y transcurren sin mayores mediaciones a la escena pública. Abandonan su anclaje barrial o comunal y pasan a convertirse en preocupaciones del conjunto de la sociedad. A partir de allí, el suceso, el movimiento de la realidad social, cae en la provocación de convertirse en único e irrepetible, por lo tanto en fenómeno explicable que requiere de autoanálisis. Cabe señalar que el corolario inmediato y la traducción espontánea en

términos de ánimo popular posterior a los derrocamientos presidenciales fue, luego de una inicial algarabía, una intenso desazón, la pérdida de brújula institucional y en la mayoría de los casos, una flagrante incertidumbre que sólo sucesos políticos disruptivos excepcionales pueden generar. La presunción de que “todo está destruido, pero... todo está por construirse” se vuelve patente, se cristaliza en un sentir generalizado de virtual responsabilidad colectiva.

Ahora bien, a modo de consenso creciente, varios autores (Scott, 2004; Zibechi, 2007; Champagne en Bourdieu, 1999) han señalado que el discurso de los dominados es particularmente difícil de escuchar, “se habla de ellos más de lo que ellos mismos hablan, y cuando se dirigen a los dominantes, tienden a emplear un discurso prestado, el que estos emiten a su respecto” (Champagne en Bourdieu, 1999). Más aún, Bourdieu sostiene que los agentes sociales no tienen la ciencia infusa de lo que son y lo que hacen; precisamente, no tienen necesariamente acceso al origen de su descontento o su malestar y las declaraciones más espontáneas pueden, sin intención alguna de disimulo, expresar algo muy distinto de lo que en apariencia dicen” (Bourdieu, 1999: 538).

Los sucesos de destitución presidencial acontecidos con fuerte presión popular como desencadenante en los últimos años en América Latina, presenciaron este desplazamiento mediático y luego este efecto de obnubilación analítica. No obstante, la consideración que descrea de la capacidad de autoanálisis de los sujetos involucrados ha comenzado a cuestionarse en investigaciones de nuevo tipo con las que comulgamos, mismas que reformulan el intercambio de modo alternativo dando voz a los paradójicamente llamados “sin voz”; esto ha merecido un cambio en la forma de aproximarse a los colectivos pero también, exige un cambio en la mirada en la perspectiva de análisis sociológico.

La magnificencia de los grandes sucesos suele opacar, iluminando y al mismo tiempo ensombreciendo, prácticas políticas que por cotidianas, escapan del interés público. Es el proceso oculto, la manifestación en voz baja de organizaciones que sin dejar de combatir en la escena del quehacer político a pequeña escala, sobreviven con recursos limitados. A esta política suavemente delineada, no trazada ni resaltada, se le suele llamar política plebeya, desde nuestra perspectiva resulta más preciso el concepto de “política popular”. De aquí parten las inquietudes expuestas, en el terreno que sostiene el derrotero árido de la supervivencia cotidiana en las barriadas urbanas periféricas. Postulamos que los grandes levantamientos son resultado de estas dinámicas silenciosamente emancipatorias, sombreadas, donde se recrean, construyen, pugnan y repercuten micro-cosmos de poder.

En suma, existen múltiples voces en la construcción silenciosa de la Historia. Cada voz, cada manifestación, tiene una trayectoria. A lo largo del próximo capítulo indagaremos en las voces que a través del esfuerzo expresado en prácticas cotidianas subvirtieron el orden recreando junto con otros, una nueva percepción de la realidad social. Comparar historias, leer sus sentidos manifiestos, ver el significado compartido que encarnan, implica captar en el movimiento social sus dinámicas interiores. Este proceso de conocimiento hondo es posible como consecuencia de la crisis atravesada. Sólo interiorizándonos en las razones subterráneas de cada historia dentro de la movilización es posible comprender hasta qué punto las “voces bajas” pueden generar capacidad destituyente y a través de ella, la posible cristalización un proyecto alternativo que les otorgue un nuevo lugar en la Historia.

Se tomaron de la mano, colocaron antebrazo junto a antebrazo, se alinearon, presionaron hasta quedar intensamente juntas formando un círculo. Hacía frío, como suele suceder en El Alto. Dentro del círculo de las adultas se colocaban las más jóvenes y las niñas, también tomadas de la mano, sintiendo una el calor de la otra, y de la otra, y de la otra a su vez. Transpiraban, se respiraba temor, eso las unía más. El espacio en el que se encontraban era descampado porque es más fácil moverse en un espacio no cercado. Se movían en conjunto, mirando hacia el exterior del organismo conformado, como una célula metamorfoseándose lenta pero progresivamente, de a pasitos pequeños, todas a la vez, intentando orientarse en la dirección comúnmente pautada. Sucedió generalmente de la misma manera, en un principio hablaban todas a la vez, a medida que el tiempo pasaba el rumor iba encontrando la calma, hasta llegar al silencio, un silencio que en las noches se volvía tremebundo. El tiempo transcurría y no debían separarse, la pauta no encontraba resistencia en ninguna. Ellas sabían que tarde o temprano iban a ser avisadas. La noticia podía ser de descanso y regreso a casa o la peor de todas: “vienen en camino los militares”. Si nos tocaban a una, nos tocaban a todas.

Tú perteneces a un modo de producción y yo a otro
pero ni tú ni yo somos los mismos después de la batalla.

Zavaleta Mercado, 1979

Néstor García Canclini señala en la introducción al libro *Sociología y cultura* (Bourdieu, 1990) que en América Latina el modo de producción capitalista incluye diversos tipos de producción económica y simbólica. Y en este sentido, no existiría una estructura de clase unificada y mucho menos una clase hegemónica - equivalente local de la burguesía- en condiciones de imponer al sistema entero su propia matriz de significaciones. Argumenta que en la región “encontramos un campo simbólico fragmentado” de mayor heterogeneidad cultural en las sociedades multi-étnicas” (García Canclini en Bourdieu, 1990). Es así que los diversos capitales culturales que esta heterogeneidad incorpora (precolombinos, el colonial, la herencia negra) habrían dado el soporte cultural para movimientos políticos nacionales, regionales, étnicos o clasistas que enfrentan al poder hegemónico y buscan otro modo de organización social. Considerando como válida esta afirmación, la estructura sobre la cual se monta el horizonte de visibilidad de una organización social se vuelve más complejo cuanto más heterogénea es su composición, cuánto más abigarrado su capital simbólico. Esto es un rasgo elemental que nos permite distinguir a una organización con fuerte composición indígena, como es el caso de la FeJuVe del Alto, del caso ecuatoriano y del argentino que contemplamos.

Ahora bien, la experiencia acumulada por las organizaciones sociales se manifiesta en consideraciones reflexivas profundas que incorporan esta superposición de capitales simbólicos. Sus miembros cuentan con una noción aproximada de la trayectoria de victorias políticas que en la lucha han alcanzado

como de los pendientes por lo que aún trabajan. En consecuencia, la dimensión de las transformaciones del orden político permite dilucidar el doble juego entre: *los alcances políticos del quiebre* que las organizaciones populares impulsaron –la potencia efectiva de la confrontación social abierta-, y el “*horizonte interior*” de los sectores sociales que confrontan lo instituido (Gutiérrez Aguilar, 2008: 21). Existiría entonces una distinción fundamental entre los sucesos acontecidos, las demandas, los reclamos, los cambios políticos, las renunciaciones, marchas y contramarchas gubernamentales –el alcance práctico-; y el horizonte que atañe a la experiencia vital de quienes se movilizan alterando su cotidianeidad –habitus de clase, visión de mundo, expectativas-, satisfaciendo entretanto sus necesidades elementales, luchando políticamente y construyendo a la par un discurso confrontativo. Desde este punto de vista esta última apuesta es la que encaramos en el intento de recuperar el *tipo de subjetividad* que se construye de manera colectiva a partir de la movilización política.

A lo largo del presente capítulo problematizamos entonces el horizonte interior de las organizaciones sociales en un doble juego que incorpora las prácticas y las percepciones de quienes se movilizan en el ámbito de la política popular. Habiendo recorrido en el primer capítulo los sucesos macro del campo político, aprehensibles por el impacto de su irrupción en la escena pública, y en el segundo capítulo el constructo teórico-conceptual para el abordaje, en esta oportunidad indagamos en la sustancia de nuestra tesis, nos interiorizamos en la *construcción subjetiva* que la lucha política colectiva encarna. Como consecuencia de los hilos que de aquí se despliegan, avanzamos en una lectura analítica de la “trama”, leyendo a través de la construcción de la “capacidad destituyente” la vinculación entre prácticas y estrategias atendiendo a la recreación de un habitus de clase que da coherencia a las acciones. *Docta ignorantia* pues, *habilidad que no se conoce*”.

Parte del recorrido entonces resultan los reclamos emblemáticos que cada organización colocó en diferentes momentos como centro de disputa en 2001 en Buenos Aires, en 2003 en el Alto y en 2005 en Quito. La apuesta es que a través de esta dilucidación se ponga en evidencia la visión de mundo, la significación elemental de cada “trayecto de reclamos” y a través de ellas la potencia que habilita el pedido de destitución presidencial. Qué consideraciones se juegan en el deshacerse de la figura del Presidente se encuentra como pregunta que q desde el bajofondo llama a la reflexión. El tránsito en cada caso de las demandas concretas motivadoras de las primeras movilizaciones hasta ésta última desnuda un proceso de transformación de expectativas rico en complejidad, frecuentemente velado por las implicancias de un acontecimiento tan importante como es la renuncia del primer mandatario en países con democracias jóvenes. Adelantándonos a un análisis más profundo, a través de la lectura del *movimiento dentro del movimiento* desenfundaremos, en primer lugar, la precariedad de la presencia institucional en América Latina manifiesta en la crisis, cristalizada en el rechazo de formas de representación delegativa. Entendemos que des-hacerse de la figura del Presidente implica un rechazo a cierta encarnación de políticas dominantes. Incluso, como veremos en el caso ecuatoriano, la exacerbación de conflictos llega al punto en que se produce una sobrevaloración del rechazo a la estética que el tipo de autoridad Gutierrista asumió. Pues existe una visión de mundo, un conjunto de intereses manifiestos, un modo de organizar la vida institucional, un conjunto de exclusiones que la figura presidencial representa. Quien desprecia lo indígena, quien se apropia de la administración de los recursos naturales como bienes privados, quien no considera la pobreza y el desempleo como los mínimos necesarios de un orden consensual, mereció desde el punto de vista de cada movimiento social, su final.

En segundo lugar, evidenciaremos un proceso de politización silencioso, que después de casi dos décadas habilitó la articulación de sectores sociales distantes en términos de “estilos de vida” y “proyectos”, animados esta vez por la resiliencia de agravios vinculados a intereses del todo antipopulares. En tercer lugar, veremos que el “programa”, la agenda de reclamos que cada movimiento social colocó como ánimo de lucha le dio autonomía y le permitió involucrarse con una agenda de reclamos de mayor escala, a nivel nacional. Este paneo analítico permitirá entonces comprender la importancia del horizonte interior de las organizaciones sociales como marco para la creación de un proyecto alternativo más allá de la destitución. Finalmente, si se cumple el cometido del capítulo se pondrán al descubierto las percepciones asociadas a conflictos que remiten a una estructura de relaciones sociales anterior, asentada en la “memoria larga”, razones que trabajaremos en el próximo capítulo.

En suma, la *capacidad destituyente* no se agota en el acto de destitución, por el contrario, la potencia de la acumulación política alcanzada continúa fortaleciendo al movimiento social alimentando un proyecto propio que excede los alcances del Estado. El horizonte interior confiere al movimiento dentro conciencia de las capacidades adquiridas en la crisis. Es así que, crisis alimentando crisis, ofrecen el escenario de subversión fértil en el cual el acto destituyente resulta un emergente necesario.

Cuando la duda asedia: Salir o no salir a la calle

A. El Alto: “el lugar más capitalista del mundo”

El Alto es la ciudad periférica a La Paz. Surgió como territorio-dormitorio al que llegaban los migrantes de las provincias que buscaban trabajo en La Paz. En

términos de vínculo con el resto de Bolivia, es una de las ciudades que abarca el mayor número de indígenas en proporción. Hacia 2001 de un total de 8.274.325 de bolivianos, un 51% -según datos oficiales- y un 62% según otras fuentes eran indígenas mientras que casi el 60% de la población (58,6%) se encontraba viviendo en condiciones de pobreza¹⁶. Lo cierto es que El Alto fue transformándose en una ciudad con identidad propia, sus habitantes son bolivianos en la mayoría venidos del campo o bien obreros de las minas que fueron desmanteladas por el Estado en la década de los años '80. Esto configura una sociedad particular, con modos de organización y pautas de desarrollo vinculadas al campo por un lado y a las formas organizativas de los sindicatos mineros por otro. “Los alteños, migrantes asentados definitivamente y migrantes temporales, guardan estrecha relación con sus comunidades. Barrios enteros de la ciudad son espejos de las provincias del interior. La gran mayoría de los pobladores de Villa Ingenio, por ejemplo, son originarios de Achacachi y Warisata, en la provincia de Omasuyos” (Gómez, 2006: 16). “Muchas de las asambleas, es decir, los presidentes de los trece distritos de aquí de El Alto, muchos de ellos han sido o dirigentes campesinos o dirigentes mineros. Entonces ahí hay una riqueza en el debate pues, es una herencia que viene y que aquí se amalgama. Y lo ves en las medidas de protesta por ejemplo, donde tienes bloqueos que de esa herencia vienen” (Mardonio, 24.9.10).

A su vez, en El Alto priman las actividades informales, las calles principales se cierran en un sinnúmero de puestos que venden desde ropa usada, electrodomésticos y banderas de Bolivia, hasta libros de carácter revolucionario como “El pensamiento amáutico” de Fausto Reinaga. Es una ciudad gris, bulliciosa, con abundantes edificaciones construidas sin planificación y poca arboleda. “...la casa propia en el Alto es el modo de acumulación de capital. Siempre es un edificio

¹⁶ Datos del Instituto Nacional de Estadísticas. <http://www.ine.gov.bo/> Los datos extra-oficiales provienen de referencias de entrevistas con líderes barriales.

en eterna construcción: el primer piso generalmente es tienda, un local comercial de bebida o comida; el segundo y tercero se usan para alojamiento en renta; el cuarto y quinto piso se destinan a la vivienda de la familia. Y algunas parecen casitas americanas con vidrios espejados, modernos pues. Les llaman *cholets*, mezcla de cholos y chalets” (Mardonio, 24.9.10). Lo cierto es que la dinámica de vertiginoso crecimiento poblacional no pudo ser absorbida por el Estado. El repliegue estatal propio de la “larga noche neoliberal” sustrajo a los gobiernos locales de los recursos y atribuciones para contener mediante actividades productivas y vinculadas a la provisión de servicios sociales, a la población que fue llegando. El anhelo migratorio cristalizado en aspiraciones de lograr un mejor empleo, mejores condiciones de vida a las del sector rural, servicios de salud y educación gratuita, alcanzar una casa propia, entre otros, ha sido la mayoría de las veces frustrado debido a la discriminación que los recién llegados perciben al arribar a la vecina ciudad de La Paz y a las escasas oportunidades de una buena remuneración que sopesa el costo de haber transformado los propios cánones de vida debido al tránsito campo-ciudad.

El *clima social* que se percibe en el Alto es intenso, existe un simbolismo de resistencia afianzado, por momentos contradictorio. Hay plazas con importantes evocaciones al Che Guevara y a su lado diseños de Jesucristo rodeado de flores, en un mismo plano. Existe una identidad de lucha que yuxtapone valoraciones indígenas sobre otros símbolos. Aún así, los alteños buscan sostener la identidad combativa. Cotidianamente, en la Plaza de la Revolución pueden verse personas con afiches explicativos que problematizan y discuten fervorosamente las políticas en marcha del gobierno, esto no sólo genera un debate público, abierto, cotidianamente actualizado –quien pase por allí puede participar- sino que además abre la oportunidad de organizarse en caso de que aquello que se esté instalando

sea percibido como un tema político-público impopular. Los habitantes de El Alto boliviano manifiestan sentirse subvalorados en relación a La Paz, en tanto ésta última se constituyó como el referente de desarrollo urbano. Esto ha generado en los migrantes no sólo una noción de protagonismo sobre la peculiar construcción de “su” ciudad sino que además supieron elaborar su propia noción respecto de las responsabilidades que le caben al Estado. “Pese a lo que dicen, esta es “la capital del capitalismo salvaje” porque aquí no hay Estado. Si hay Estado es porque tiene que hacer obras, tiene que hacer proyectos y avenidas, pero el alteño se pelea por no dar, prefiere evitar el pago de impuestos. Entonces termina siendo una relación controlada de “cuánto Estado quieres”. Si analizas la historia de las demandas, siempre verás que el alteño espera que el Estado dé, no hay interrelación” (Mardonio, 24.9.10).

La ciudad está plagada de evidencias simbólicas que apuntalan la memoria sobre eventos de resistencia acontecidos. Por ejemplo, luego del incendio voluntario de la entonces Alcaldía Municipal en febrero de 2003, quemada por descontento popular, una gigantografía al frente rezaba la siguiente frase: “monumento a la intolerancia producto del pandillaje político” (Revilla Herrero, 2007: 16). Pocas semanas después de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, el reverso de la misma gigantografía decía: “... ya lo habíamos advertido, el hombre aymara es mejor que el sistema.” Hoy en día, la frase corregida reza: “el alto para Bolivia no es un problema, es una solución”. Lo cierto es que los episodios de resistencia indígena en El Alto podrían remontarse al siglo XVIII, al cerco de la Paz por parte de Tupac Katari contra los españoles, no obstante en el siglo XX las revueltas han sido numerosas al punto que desde la revolución de 1952 hasta la actualidad se hace referencia a la “cultura política insurreccional” de la región.

El movimiento de octubre 2003. Demandas concatenadas y contenidos

El conflicto desencadenante de los sucesos que animan la crisis de octubre de 2003 en Bolivia tiene dos vertientes. Un primer antecedente es la movilización contra el “impuestazo” al salario que el Presidente Sánchez de Lozada quiso aplicar en febrero de 2003. En este incidente la popular manifestación en la que se sublevaron policías y militares culminó a balazos, viéndose tomadas sedes del gobierno, dos partidos políticos y la Vicepresidencia de la República. El descontento llegó a la ira, la plaza Murillo fue cercada y como resultado hubo treinta muertos. El segundo de los muchos antecedentes que podrían enumerarse, fue el intento de aplicar los formularios *Maya* y *Paya* en El Alto –uno y dos en aymara- en septiembre de 2003. Este intento de regular desde el gobierno municipal el diseño urbano-edilicio generó manifestaciones de furia. Los formularios “eran impuestos por la alcaldía de la ciudad. El primero de los documentos era en apariencia una sustitución a los trámites de registro catastral y el segundo reemplazaba los pasos a seguir para la aprobación de planos de construcción en El Alto. El rechazo vecinal a los formularios se basaba en que, a partir de la información recolectada, la alcaldía alteña pretendía elevar el pago de impuestos en el rubro de la construcción y refaccionamiento de casas habitación.” (Gómez, 2006: 24) Este intento de intervención y regularización urbana desde arriba articuló las fuerzas sociales alteñas que se mantendrían cohesionadas hasta octubre.

Hasta el momento, la nacionalización del gas era un reclamo que aparecía velado por otros más inmediatos. Lo mismo podemos argumentar, sucedía con el rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas. Pero poco a poco, al correr la voz, el rumor de que la venta del gas boliviano a los Estados Unidos sería a través de territorio chileno generó la desidia de los bolivianos. Pablo Villegas, investigador

especialista en hidrocarburos del Centro de Documentación e Investigación de Cochabamba, afirma que Bolivia es el segundo país más rico en gas natural de Latinoamérica. Pese a ello, considera que el desabastecimiento del mercado interno de hidrocarburos se ha ido agravando y la provisión de energía por habitante es más baja en el país que en el resto de América Latina. “Bolivia importa el 45% del diesel que consume y este año comenzó a importar gas licuado de Argentina y gasolina de Chile, de la cual se autoabastecía desde 1954”. Las causas comúnmente señaladas son básicamente dos. Por una parte, la declinación de las reservas, debido a que no se invierte en la búsqueda de nuevos yacimientos y, por otra, a que se prioriza la exportación descuidando el mercado interno. “En 1997, con el neoliberalismo, las transnacionales obtuvieron las reservas hidrocarburíferas, y con el tiempo una sola empresa: Petrobras, que en 2001 (antes de la nacionalización) tenía el 13,5% de la producción, en 2008 (tras la nacionalización) llegó a controlar el 63%, mientras las empresas en las que participa el Estado controlan sólo el 20%” (Villegas, 27.9.10).

Lo cierto es que la “agenda de octubre” de 2003 tuvo como principales reclamos a) la nacionalización del gas; b) el llamado a la conformación de una Asamblea Constituyente; c) la redistribución de la tierra; d) la defensa de la hoja de coca como patrimonio cultural de los bolivianos; y d) una real lucha anticorrupción en las instituciones del Estado. La lucha que se desarrolló tuvo como epicentro La Ceja, la zona central del Alto pero cada junta vecinal fue a su vez enclave de distintos reclamos que iban desde la demanda de servicios básicos que sintetizan una demanda anhelada de mejores condiciones de vida, hasta el pedido de mayor participación en asuntos públicos. En relación a la venta del gas a través de territorio chileno, vale aclarar sus implicancias. Existe desde la guerra del Pacífico una pugna histórica con Chile. En 1879 el ejército chileno con apoyo de Gran Bretaña tomó el Puerto de Antofagasta logrando avanzar con escasa resistencia. El objetivo de la

invasión era netamente económico, participaron representantes de intereses empresariales que dominaban la explotación de salitre a quienes autoridades bolivianas habían querido aplicar impuestos por la extracción del recurso. La decisión de conquista de esa importante porción de territorio boliviano fue lenta y efectiva, el involucramiento de Perú en virtud de Tratado de Alianza Defensiva no logró cambiar la correlación de fuerzas que favorecía netamente a Chile. En la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió 120 mil kilómetros cuadrados y su salida al mar. Aún cuando Chile se comprometió en el acuerdo de paz de 1884 a otorgarle “amplio, libre y perpetuo” derecho de tránsito comercial hacia el Pacífico, esto no fue cumplimentado hasta nuestros días. En ese sentido, los bolivianos cargan con una opinión definida, fuerte, en relación a Chile. “A nosotras en el colegio nos hablaban de Chile con odio, yo recuerdo que en el acto por la memoria de la guerra nos hacían llorar, teníamos obligadamente que llorar. Eso no ha cambiado, hoy lo siento, nos criamos con esa bronca” (Diana, 19.9.10). En virtud de este sentir que es generalizado entre los bolivianos, la apuesta por exportar el gas boliviano a través de territorio chileno resultó a todas luces enardecedora.

“Siempre ha estado presente en la memoria histórica de los bolivianos que el extranjero te roba, te roba algo importante, ahora ‘tus’ recursos naturales. Lo más valioso nos lo quieren casi robar, o sea, comprar barato” (Mardonio, 24.9.10). La decisión de no vender gas a través de Chile fue conformándose a través de opiniones del boca a boca como estrategia de comunicación más espontánea y de mayor alcance en El Alto y La Paz, a este reclamo se incorporó la certeza de que mientras se analizaba cómo se iba a exportar el gas boliviano, en El Alto al menos un 60% de las casas no contaban con el recurso.

El tránsito de los reclamos bolivianos

Si tenemos la capacidad de detenernos en las prácticas sociales del derrotero movimentista de sucesos históricos recientes, si podemos reparar en cada decisión personal alimentando decisiones colectivas, si analizamos cada acción deliberada, cada reclamo en reconfiguración por su no satisfacción, podremos ver que los sucesos más pequeños, virtualmente sencillos y aparentemente carentes de mayor significación, se concatenan con otros que de manera aglomerada, generan un engranaje complejo que decanta en un reclamo político superlativo a los fines inicialmente supuestos. A esta construcción de actos y sucesos concatenados en una ingeniería de la movilización social situada, obedece la conformación de *capacidad destituyente*. Ahora bien, de modo de dar cuenta de la genealogía que las revueltas generan analizaremos las prácticas y demandas que en cada caso desató reivindicaciones de gran escala. La dinámica contestataria, de lucha librada en octubre de 2003 en Bolivia resulta de particular interés para dar cuenta de este modo de leer la realidad social.

Una de las primeras acciones que desencadenó la aglutinación de consideraciones políticas afines en los alteños, en septiembre de 2003, fue la ocupación de la Radio San Gabriel. Esta radio además de ser uno de los epicentros de la difusión de información en El Alto, se ha convertido en depositaria de contenidos éticos por su vinculación con la fe católica. Ahora bien, la ocupación de la radio se vio acompañada del virtual secuestro o bien, de la “retención explícita” de algunos Viceministros, que habían acudido al recinto para dar cuenta del estado de algunas demandas campesinas como la reducción de intereses para la adquisición de tractores. Ahora bien, estando los Viceministros al aire de la programación, fueron avisados que serían retenidos hasta tanto pudieran dar respuesta a una demanda en particular que era la liberación de un dirigente

campesino, Edwin Huampu, quien fue apresado por haber aplicado en su comunidad, Cota Cota, justicia comunitaria a dos ladrones de ganado (Gómez, 2006: 25). Esta medida fue el corolario de una marcha acompañado de un paro de 24 horas que se había desatado con el mismo fin (al que se unieron transportistas y alumnos de la Universidad Popular de El Alto) ingresando a La Paz de manera estrepitosa. Regresando a la toma de los dirigentes en la Radio San Gabriel, vale agregar que el líder sindical campesino y en aquel momento diputado nacional, Felipe Quispe, convocó a una huelga de hambre indefinida. A la protesta se sumaron denuncias de que el gobierno planeaba exportar gas a Estados Unidos a través de territorio chileno. Ante el despliegue de bloqueos en todo el altiplano, las autoridades oficiales reaccionaron enviando tropas militares a los puntos clave que garantizan la comunicación vial con La Paz. Las semanas siguientes no serían sólo el agravamiento de las medidas de bloqueo, paro y movilización sino también una complejización de demandas que culminaría con una resistencia de más de un mes, que culminaría con la renuncia del Presidente constitucional.

“Tienes una población que cuestiona el sistema y que a su vez descrea de Sánchez de Lozada. Como dice Marx: los de abajo ya no quieren ser gobernados y los de arriba ya no pueden gobernar. Los bloqueos son reprimidos pero no puedes hacer nada contra un bloqueo pacífico que toda la población apoya” (Mardonio, 24.9.10). Hacia el 9 de septiembre la Federación de Juntas Vecinales (FeJuVe) del Alto comenzó su trabajo perfilándose como organización eje de los reclamos alteños que se identificaban con la agenda de octubre. Como instancia política-administrativa aglutinadora de las juntas vecinales en que se organiza la ciudad de El Alto, la FeJuVe tomó el protagonismo de los modos en que los bloqueos y movilizaciones se desarrollarían. “La furia y la rabia a todas nos hizo participar, era lo que nos ha unido, era una causa. Pero le voy a decir que no todos los presidentes

participaron (en alusión a los presidentes de juntas vecinales de El Alto). En la clandestinidad se han ido. Para entonces estaba el Mauricio Cori [Ejecutivo de la FeJuVe], él no ha dado la cara, nada. Se ha hecho un Comité de Huelga en cada barrio, por junta, en algunas juntas los presidentes han hecho bien su trabajo, en otras se han escondido. Aquí en Los Andes se nombró un comité que llevó adelante tareas con toda la responsabilidad, el presidente se escondió” (Celu, 29.9.19).

En la mayoría de los casos, quienes participaban de los bloqueos y marchas eran manifestantes políticos que se volcaban a la calle por primera vez, no habían estado presentes en anteriores manifestaciones políticas contestatarias. Otros sin embargo, en particular mujeres, manifiestan haber sido capacitadas con anterioridad en organizaciones sociales formativas como es el caso de la organización Gregoria Apaza. “Nosotras hemos trabajado de otra forma. Antes del 2003 nos daban formación sobre el ALCA; era como un balde de agua fría porque nosotros estábamos metidos en nuestra zona, en la problemática de nuestra junta. Pero de pronto recibimos capacitación sobre eso (...) entonces dijimos como mujeres, ¿qué estamos haciendo? Mirá lo que está pasando con nuestro país” (Celu, 29.9.19). Es así que el proceso de capacitación e involucramiento en los sucesos políticos que acontecen en Bolivia ha sido una constante de los últimos años en la población alteña.

Es posible deducir que sin este componente informativo como precedente, no habría sido tan efectiva la resistencia en octubre. “Como locos salíamos con un parlante a informar, a contarle a los vecinos lo que estaba pasando, como locos. Zona tras zona, plaza tras plaza, mercados, no aglutinábamos mayor gente pero siempre había unos diez o quince ahicito... pero cuando llegó octubre ya, la señora parada ahí, el chofer, nos habían escuchado antes. Entonces nos confiaron que comandemos la marcha.” (Ibid) “La capacitación de algunas ONGs fue tan efectiva

que si tú te parabas y le preguntabas a un manifestante que estaba en un bloqueo ‘¿porqué estás bloqueando?’, te recitaba números. Te decía ‘yo compro mi garrafa de gas a 27 bolivianos, 10 kilos que me duran 2 semanas. Por ese mismo precio vendemos un millar de pies cúbicos a Chile, el equivalente a 100 garrafas’” (Mardonio, 24.9.10).

Los días de septiembre sucedieron entre bloqueos, marchas y enfrentamientos con fuerzas del gobierno. Pero a este punto vale la pena situar esquemáticamente las fechas en que se registraron los sucesos de mayor impacto que luego decantaron en la destitución, de modo de dar orden a los sucesos y en espejo, a las transformaciones que los manifestantes fueron operando sobre las demandas:

- **19 de septiembre:** Marcha multitudinaria, los alteños sumaron 50 mil hombres y mujeres que decidieron bajar a La Paz. El lema más escuchado fue: “el gas no se vende, carajo... si el Goni quiere plata que venda a su mujer”. En la movilización se evidenció la adhesión de miembros de la Central Obrera Boliviana (COB).
- **20 de septiembre:** Masacre de Warisata. El ejército en miras a “rescatar” a los turistas varados por la movilización en la zona de Sorata, “despejó” la zona viéndose atacado por alteños con piedras y palos. Cerca de 500 efectivos armados reprimieron los bloqueos disparando a fuego abierto. Murieron tres personas de Warisata, un albañil, un estudiante y una niña de 8 años. Esta misión de rescate de turistas fue celebrada en los medios de comunicación.
- Del **21 al 25 de septiembre** la movilización se intensificó como consecuencia de las muertes en Warisata. Comenzó a organizarse una coordinación de los

bloqueos en zonas estratégicas de El Alto de modo de cortar el abastecimiento de alimentos a La Paz. Se bloqueó todo paso de productos agrícolas.

- **29 de septiembre:** La COB convocó a huelga general y marcha hacia la La Paz. Se sumaron activamente los estudiantes de la Universidad Popular de El Alto (UPEA). El Movimientos Sin Tierra de Bolivia anunció toma de tierras. Las Seis Federaciones del Trópico –máxima organización cocalera de la zona del Chapare– comenzó el bloqueo de la ruta Cochabamba-Santa Cruz. Los mercados amanecieron cerrados. Los choferes replegaron sus vehículos y varios sindicatos se sumaron a las medidas de protesta. Comenzó el Plan Abeja que consistía en realizar bloqueos esporádicos al aeropuerto internacional. En La Paz, el desabastecimiento generó suba de precios.
- **30 de septiembre:** Salió una movilización de 300 personas desde Cochabamba encabezada por Oscar Olivera, líder de la Coordinadora en Defensa del Gas. Se unieron solidariamente a los aymaras de Warisata. Se manifestaban abierta y explícitamente contra el modelo neoliberal y por la defensa del gas. Entretanto el *Mallku*, Felipe Quispe, se manifestaba a favor de construir una nación dirigida políticamente por indígenas. Por primera vez comenzó a exigirse la renuncia del Presidente Sánchez de Lozada.
- **1ro de octubre de 2003:** Se da una ampliación de las demandas. Nuevas marchas provenientes de las provincias del interior llegan a La Paz. Además de rechazar la venta del gas y la firma del ALCA, se exige y reitera la exigencia de renuncia de Sánchez de Lozada. Se detienen las actividades productivas y comerciales en todo el país.

- **2 de octubre:** Centrales obreras departamentales se suman a la movilización. Los coccaleros de las Yungas decidieron bloquear también los caminos a La Paz.
- Entre el **3 y el 7 de octubre** hubo una decena de marchas. El pedido de renuncia se volvió la principal consigna, aglutinadora de las anteriores. El entonces dirigente coccalero, Evo Morales, comenzó a hablar de “una revolución pacífica”. Por primera vez se escucha el rumor de la necesidad de una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución Política del Estado. El 7, partió una movilización desde el centro del Alto hacia La Paz, con 20 mil personas. El cerco a la Paz era un hecho. Se generaliza la demanda: “Gas, constituyente, renuncia”.
- **9 de octubre:** La policía y el ejército unen sus fuerzas en El Alto enfrentando a los mineros llegados de Huanuni. Inició la campaña de “barrido de bloqueos” lanzada desde el Ejecutivo. Ocurre la muerte de un joven (Ramiro Vargas).
- **10 de octubre:** Los dirigentes de las juntas vecinales del Alto decidieron cortar todo diálogo con el gobierno hasta bien renuncie el Presidente.
- **11 octubre:** Se dictó un Decreto presidencial en que se declara al territorio nacional en estado de emergencia. Se anunció que el Estado garantizará el abastecimiento de combustible a la población a través del envío de convoyes del ejército a zonas claves de almacenamiento y distribución. Con este decreto se legitimaba legalmente la matanza de Senkata –centro de aprovisionamiento de gasolina-. La represión fue al anochecer con previo apagón de las instalaciones eléctricas. La furia por la represión lisa y llana en que los militares dispararon directamente a la gente, se manifestó el día siguiente en que se reinstalaron los

bloqueos. Se da a su vez una fuerte represión en plaza Balivián. Suman 10 muertos desde el inicio del conflicto.

- **12 de octubre:** Se inicia la operación “limpieza y barrido” por parte de las fuerzas militares. La intención era surtir de gasolina, gas y alimentos a La Paz. El ejército desplegó ametralladores en puntos clave de la ciudad y tiradores con rifle en las esquinas estratégicas de El Alto. Reprimieron intensamente las juntas de Río Seco y Villa Ingenio.
- **13 de octubre:** El desabastecimiento de La Paz alcanzó su límite, ya no era posible contar con verduras, carne ni pan. Dirigentes gubernamentales, incluso el Alcalde del Alto, José Luis Paredes, pidió la renuncia del Presidente. El Vicepresidente presentó su renuncia a la coalición gobernante.
- **14 de octubre:** 100 mil personas confluyeron en La Ceja para iniciar la bajada a La Paz exigiendo la prohibición de venta de gas boliviano y la renuncia de Sánchez de Lozada. Fue la marcha más multitudinaria conocida. Confluyeron otras movilizaciones venidas de la zona sur, con trabajadores aymaras. Hubo represión, heridos y muertos. Continuaron las trincheras en El Alto donde 28 nuevos muertos se sumaron en un día. Ya sumaban 75 desde la represión de Warisata. De Yungas se sumaron 1300 campesinos a la movilización. Se fijaron bloqueos en forma de trincheras ahora en La Paz. La FejuVe anunció que “no perdonará”, en alusión a una lucha que sólo puede culminar con la renuncia del Presidente. Se registró acción paramilitar en La Paz. Entretanto se intensificaron los allanamientos nocturnos ilegales en casas de manifestantes alteños.

- **15 de octubre:** Más de 10 mil personas acompañaron la procesión de los ataúdes de 15 nuevos caídos en El Alto. Cocaleros, maestros, estudiantes, vecinos, ex mineros, campesinos y jubilados realizaron un Cabildo Abierto en La Paz. 8 mil personas se reunieron para debatir. Resolvieron no dar un paso atrás. Había ya 30 piquetes de huelga en toda la ciudad. Esa noche el gobierno anunció que Sánchez de Lozada no declinaría de su rol como jefe del ejecutivo y asumió convocar a referéndum consultivo para acordar el modo de exportación de gas, revisar la Ley de hidrocarburos previa concertación con las compañías petroleras, y crear la figura de Asamblea Constituyente para incorporarla a la Constitución.

- **16 de octubre:** Las huelgas de hambre de los manifestantes se multiplicaron. Una vez más los alteños planearon bajar a La Paz para exigir la renuncia presidencial. La movilización a La Paz alcanzó los 300 mil miembros. Se fortificaron los bloqueos a la espera de la renuncia y de mayores medidas de represión. El gobierno apuntaba entretanto al desgaste popular.

- **17 de octubre de 2003:** Luego de enterrar a sus 68 muertos, se reiniciaron las movilizaciones hacia La Paz desde El Alto. La consigna se sostenía: “se iba él o nos mataban a todos” (manifestante, 23.9.10). La huelga de hambre ya sumaba 800 personas en todo el país. La cohesión de la elite gubernamental se resquebrajaba. El vocero presidencial anunció su renuncia. El partido Nueva Fuerza Republicana que formaba parte de la coalición de gobierno, anunció su retiro de apoyo. Luego de innumerables rumores, se anunció públicamente la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni). Los parlamentarios nombraron a Carlos Mesa –Vicepresidente de Goni- como nuevo Presidente constitucional. Hubo celebración en plazas y avenidas.

Calles como trincheras: la dinámica interior de la protesta alteña

“Cuando comenzó la guerra de octubre la furia nació en todas las mujeres y la rebeldía, por haber visto caer a nuestros hermanos. Nosotras no teníamos ninguna forma, solamente la boca, los palos y la piedra” (Celia en Choque, 2006). Paralizar El Alto implica interrumpir el transporte que contempla el ingreso de recursos a La Paz. Esto no sólo se manifiesta fácticamente en un corte de relaciones centro urbano-periferia abastecedora, sino que además invita a reflexionar sobre la capacidad de los indígenas pobres alteños que simbólicamente se permiten detener la provisión de bienes y recursos necesarios para la supervivencia de los paceños. Para muchos, La Paz es la ciudad “desde la cual gobiernan los blancos”. En este sentido, la relación de espejo entre El Alto y las provincias de las cuales los alteños provienen, compensa y explica la reproducción social que en la ciudad acontece.

“Durante las marchas las marchas las más viejitas se quedaban a cuidar a los niños y las casas y nosotras bajábamos a pie a la ciudad marchando en son de protesta, con coca y cigarro ya no sentíamos dolor, era la furia lo que nos llevaba a estar organizados” (Celia en Choque, 2006). El vínculo con los familiares y amigos en las comunidades originarias habilitó la provisión de recursos para la subsistencia de los propios alteños movilizados en tiempos de escasez. Vale recordar que el desabastecimiento del altiplano fue devastador, los alteños sobrevivían en tiempos de resistencia compartiendo sus chuños (papa congelada y luego deshidrata para su conservación), porotos y animales con los vecinos y compañeros de marcha. Algunos manifestantes relatan cómo en las filas para comprar las pocas galletas que quedaban en las tiendas a precios exorbitantes, pasaban casi todo el día. La mayoría cuenta que salió adelante porque una vez al día llevaban adelante, especialmente las mujeres, ollas populares en las esquinas. “Yo a veces salgo al campo a hacer mi

chacrita de habas, chuño, papa, choclo y estaba preparada, tenía que cocinar, esos días me he sabido levantar muy temprano porque como mujeres teníamos que estar preparadas, pues teníamos que estar muy preparadas escaseaban en esos días los alimentos” (Ruth en Choque, 2006). Los alteños en lucha vivían la mayor parte del tiempo en la calle y a falta de ingresos, la posibilidad de compartir solidariamente lo poco que tenían se convirtió en la regla indispensable que no sólo permitía alimentarse sino que además garantizaba una inigualable la cohesión.

Y es que las fogatas calentaban a los vecinos y a su vez funcionaban como telégrafos populares ya que la información, las últimas noticias, eran compartidas en esos momentos de íntimo encuentro. En las esquinas se colocaron llantas de autos y piedras que impidieran el paso. “Ante la parálisis del país, el gobierno llevó adelante tres estrategias: controlar el desarrollo de las marchas, crear rutas de tráfico alternas y resguardar todas las instalaciones del Estado en La Paz” (Gómez, 2006: 38). Pero las medidas sólo reavivaban la furia de los alteños. Incluso las muertes, no sólo no detenían a los manifestantes que nuevamente salían al día siguiente a la calle, sino que les otorgaban razones de mayor peso para luchar y en consecuencia, radicalizar sus reclamos.

Una mujer alteña comprometida con los sucesos del 2003 rememora: “si nos van a matar que nos maten en las calles, pero no a escondidas. Qué valga la pena” (Cema, 24.9.10). Y es que la significación de la muerte de un compañero de lucha indígena tiene una dimensión particular entre los aymaras considerados entre sí: hermanos. Tal como si la muerte no sólo no pudiera ser justificada sino que además debiera ser vengada por sus iguales. “El sábado 11 estábamos yendo a pie a la ciudad de La Paz cuando delante nuestro vi a un compañero que no estaba en la lucha, salió a comprar pan, y le dieron dos disparos en la nuca. Cayó ahicito. Mi compañera Meche y Lucía querían recogerle pero yo les agarraba porque las balas

corrían por todo lado, era todo un drama. Después nos fuimos a cumplir lo planeado hasta Villa Fátima (...) después de llegar de vuelta el joven ya había muerto por falta de socorro y mi compañera había estado rodeada de vecinos que querían parar la guerra. Estaban a punto de golpearla pero la defendimos (...) Me ha dolido tanto, tanto, hasta una mujer nos ha reñido, 'tráguense pues ahora al muerto' nos decía, era una turba enardecida, encima comenzó a llover granizada y todo siempre nos hemos mojado, pero no sentíamos ni frío ni la lluvia" (Celia en Choque, 2006). Cada uno de los que fallecieron a manos del ejército hacia fines de 2003, aún hoy, es recordado con frecuencia e intensidad como mártir de lucha. Senkata fue una de las juntas vecinales de El Alto con más muertos, resultado de las jornadas de septiembre y octubre de 2003. En Senkata está el depósito de gasolina que surte La Paz, el más importante, propiedad estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Las movilizaciones habían demostrado que éste era el principal bien que generaba el alto de las actividades de La Paz. Por eso el recrudecimiento de la represión en la zona. Pero la memoria de los muertos no es para los alteños un freno ni una lección, es el viento que sacude y aviva el fuego de las próximas luchas. Cada comunidad, cada pueblo, cuenta de hecho con un espacio físico que plasma en la memoria la historia de los que cayeron.

Ahora bien, en las marchas multitudinarias que llegaban a La Paz, también se mostraba la solidaridad de aquellos que veían pasar los contingentes provenientes del Alto. Los barrios paceños de la periferia aplaudían a los marchistas. Se trata de obreros, comerciantes informales y artesanos que se ubicaron en barrios nuevos, cercanos a las laderas. Incluso en el caso de la zona sur, que es la zona pudiente, la mayoría de las trabajadoras del hogar son mujeres indígenas provenientes del Alto las cuales se sumaron a las movilizaciones activamente viéndose en situaciones de

dificultad con sus propios patrones. Cohesión y articulación social de diversos sectores explica en parte la intensa percepción de solidaridad en tiempos de lucha.

A lo largo del tiempo de resistencia, se hicieron públicos cientos de manifiestos, decenas de comunicados, y así como organizaciones sociales se recreaban, nuevas se creaban con el fin de hacer oír su reclamo de al menos limitar al gobierno impopular. Un antecedente importante que había canalizado fuerzas y que se reconocía como parte de una misma lucha en una fase anterior fue la Guerra del Agua que se desarrolló en abril de 2000 en Cochabamba en la que miles de cocaleros, campesinos, trabajadores y estudiantes detuvieron la privatización del recurso. En aquella oportunidad, Cochabamba despertó. Durante la llamada Guerra del Gas, el apoyo de la ahora llamada Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas de Cochabamba fue significativo, su participación activa implicó la convocatoria a los bolivianos de la zona centro del país. Y si en las estrategias ponemos la lente hay un dato particular que llama la atención. La comunicación entre juntas vecinales se canalizó por excelencia a través del uso del teléfono celular. Esto no es un dato menor considerando la realidad socioeconómica de los alteños en 2003. Quienes no tenían, lo conseguían y quienes contaban con uno en desuso, rápidamente aprendían a dominarlo de modo de contar con él como herramienta de protección y control de sus cercanos. El celular se convirtió en el eje transmisor de las noticias alternativas a las que la televisión mostraba como versión oficial de los hechos. Incluso, fue un canal de transmisión de confianza. De la mano, se establecieron señales de alarma que sólo los alteños comprendían, códigos de comunicación y algunos utilizaban nombres-seudónimos de guerra. Por toda la ciudad había turnos de vigilia y patrullaje.

Y no todo obedecía a prácticas espontáneas, existen evidencias que quienes no participaban en las movilizaciones, en algunos distritos, eran sancionados. En

algunos casos, principalmente en el distrito 1, se les marcaba la casa con una cruz roja, en otros casos, se les rompía los vidrios a sus casas. Algunos participantes de los sucesos de octubre cuentan que debían rendir cuenta a su presidente de junta vecinal por haber participado en una marcha, si no lo hacía, debía pagar una pequeña cuota que lo comprometiera a participar activamente en la siguiente movilización. Incluso, al llegar al lugar de encuentro, en cada junta, se pasaba lista: “con el megáfono se gritaba: ‘calle 13, casa 5: ¿está presente?’ Y alguien de la familia debía responder” (Mardonio, 24-9.10).

La lucha fue ardua, “salimos con los megáfonos ‘sigamos adelante, no nos podemos rendir’, haciendo gritar, estábamos ahí metidos. No dormíamos, todas estas calles eran de adoquín, como para la guerra nos habían sacado. Vivíamos en la calle, entonces cocinábamos en las calles, nos organizábamos, en el día era marcha, hacíamos cruces de marchas entonces no entrábamos a la casa ni siquiera a lavarnos y cambiarnos. Cuando terminó octubre estábamos tiznados, con callos, ampollas, recién ahí empezó a doler todo. Mientras estábamos en lucha no había tal dolor ni hambre, con la coca pasábamos nomás” (Celu, 29.9.19).

Lo cierto es que como afirma un joven alteño, lo que desató la persistencia de la movilización de la gente del Alto, la emotividad combativa más profunda, es la pobreza y la postergación, “si en 5 años seguimos con el mismo discurso de que esto va a cambiar –en el supuesto proceso de cambio- la gente va a cuestionar a cualquier político” (Mardonio, 24.9.10). Un dato importante que no puede soslayarse es que la mayor parte de los participantes de las movilizaciones, incluso de los fallecidos, eran jóvenes menores de 25 años. Quienes estaban en las calles eran familias enteras, no obstante al frente de la resistencia, en los bloqueos, eran jóvenes quienes sacaban pecho frente a los brutales actos de represión. Eso tiene que ver sin duda con procesos de exclusión que impactan en la población no adulta,

no obstante, evidencia también la intensidad por la que valía la pena luchar, las desesperantes ganas de un cambio social.

Después de octubre, mucho ha cambiado en Bolivia, lo cierto es que el orden político se ha reconfigurado. No sólo se aprecian nuevas fisonomías en quienes gobiernan, hay una cuestión de identidad que si bien no soluciona *per sé* los problemas que motivaron la organización, al menos abrieron la oportunidad para reencausar un proceso de revalorización política, del cual se sienten protagonistas. Se saben con capacidad de destituir gobiernos, saben bien que no obedecer al pueblo es traicionarlo.

Mujeres en resistencia

Acción y percepción se conjugan. Existe en la transformación de los espacios que tradicionalmente ocuparon las mujeres, en particular las mujeres indígenas de Bolivia, una percepción renovada de su capacidad de lucha. “Mi participación concretamente fue porque soy mujer, si hablamos de dirigencia ha habido mayor participación de la mujer, y ha sido más participación mostrando convicción, reivindicando nuestros derechos, nuestra participación. Ha sido una convicción pura se podría decir (...). Las mujeres que estaban adelante, que se iban a chocar contra los policías, contra esos instrumentos que representan al gobierno, contra esos instrumentos coactivos que se venían. Muchas veces la policía abusaba, sus cárceles, sus toletes, golpes, patadas, en ese sentido hemos tenido mucha gente herida, mucha gente con balines, golpeadas, pegadas, y esa gente en la mayoría de los casos son mujeres” (Lourdes en Choque, 2006)

A lo largo de octubre de 2003, dirigentes de algunas juntas vecinales recién conformadas amenazaban a las mujeres con la supuesta certeza de que los militares

enviados por el gobierno para apaciguar la rebelión encausada, iban a venir al atardecer e iban a abusar de ellas sexualmente si las encontraban en sus casas. El aviso obligaba a las mujeres, jóvenes y niñas a salir y si no iban a la movilización, debían ir a “refugiarse” a espacios abiertos, a unirse piel con piel con otras como mecanismo de soporte, de resguardo, de una seguridad tan antigua como esencialmente conocida que en términos comunitarios sólo otros iguales pueden ofrecer. El rol de las mujeres en una “periferia de La Paz” que por mucho ha dejado de serlo para convertirse en centro de debate y confrontación pero también de negociación y pacto, ha implicado una entrega que no sólo contempla el compromiso de su vida en la consolidación de la familia –como muchos hombres alegan-, sino que tradicionalmente ha demostrado la capacidad de desempeñar todos los roles necesarios para encaminar la propia subsistencia y la de sus cercanos. Esta entrega pocas veces ha sido reconocida en su integridad, la mayor parte de las veces estas mujeres han sido ignoradas y anuladas como sujetos de cambio social, de trabajo, pero también y principalmente, como sujetos de derecho, de dignidad, de disfrute y placer.

La situación en la que se encuentran las mujeres del Alto boliviano ha comenzado a transformarse de manera vertiginosa. Su extendida participación en espacios colectivos cívicos o políticos ha implicado una resonada demanda a lo largo de los últimos años por “cupos de género” (como tendencia norteamericana fraguada en el discurso popular) que recién en el último tiempo corto se ha cristalizado en verdaderas ocupaciones de espacios de trascendencia para la organización comunitaria. “Antes, dentro del municipio no había género, no se hablaba de género, en el municipio no querían saber nada y en esa pelea estábamos. Nosotras como mujeres hemos sido las primeras mujeres que hemos roto la alcaldía quemada, con carteles, marchando. No nos dejaban entrar, los

gendarmes nos atacaban (...) éramos puras mujeres, más antes de octubre, para defender lo que es género, porque a nosotras nos afligía” (Diana, 6.7.10).

“Liderados por Felipe Quispe, en abril y septiembre de 2000 se produjeron bloqueos del altiplano norte de La Paz que renovaron los temores del cerco indígena de la ciudad de La Paz, y a partir de ese momento se produjeron importantes movilizaciones con notable fuerza” (Flores, 2007: 4). En este marco, las mujeres participaron de numerosas acciones de lucha, una de ellas fue la construcción de bloqueos en las vías de comunicación del Alto tratando de impedir que los alimentos llegaran a los supermercados de la zona sur de La Paz. La respuesta de los hombres, aliados y no aliados, aquí y allá, fue de ataque a las entonces trabajadoras del hogar que se sumaron a las marchas: “Estas son pues, las empleadas que están con los K’aras, ellas son, ellas son pues, a ellas hay que agarrar... así me miraban a mí (...) hay que ir a atacar a la zona sur, decían tal vez los que estaban haciendo el bloqueo, tal vez para asustarnos” (Ibid).

Desde los sucesos críticos de octubre de 2003 y el derrocamiento del entonces Presidente, la realidad de la región alta daría un vuelco. Mujeres alteñas comentan que desde entonces han sido invitadas a participar en actividades cívicas y que en ciertos casos, frente a la amenaza masculina, su reacción ha sido la de no confrontar, pero continuar avanzando por otros medios en otros espacios, dando a conocer sus derechos, socializando su conciencia de posibilidad de participación en puestos ocupados por hombres. Antes, “ellos se adueñaban de los cargos en las sub-alcaldías, no nos consideraban, decían que nuestra función más importante estaba la de ser soporte en la casa” (Diana, 6.7.10). Pero la explosión de transformación que significó el llamado *octubre negro* disparó hacia innumerables direcciones posibilitando en uno de sus vectores la visibilización de las mujeres, las cuales en varias oportunidades habían participado de la lucha popular en las calles

encabezando marchas de modo de que la fuerza militar no las atacara con la contundente violencia con la que lo hacían con los hombres. “Ahí actuamos todas las mujeres. Y las mujeres éramos la vanguardia, digamos, porque las mujeres en la marcha vamos adelante, nos ponen como escudo los hombres. Ellos atrás. A mi modo de ver, las mujeres en realidad, si no existieran, parece que los hombres son cobardes, que no pudieran ellos solitos enfrentar. ‘Primero las mujeres’, gritaban. ‘Pues vamos, no importa, si hay que morir hay que morir’” (Ibid).

La fiesta de los pobres

La lucha desencadenada en Bolivia pone de relieve aspectos específicos de la construcción de subjetividad en la dinámica colectiva contestataria: el reconocimiento de la dignidad boliviana, indígena y alteña, la conciencia de la capacidad de cambio, la ausencia de límites en el campo de combate contra quien se impone, la identificación solidaria con el igual y el discernimiento del “diferente” –blanco, criollo, extranjero-, el entendimiento de la política como cosa de todos y no de unos pocos resultado de un devenir histórico excluyente. El concepto movimiento societal da cuenta de las relaciones sociales diferenciales que se desarrollan y recrean al interior de la sociedad en forma paralela a las relaciones sociales dominantes. En este sentido, evidencia el movimiento de una sociedad dentro de otra. Esta idea que problematiza la pervivencia de varias sociedades coexistiendo de manera simultánea, articulada, se encuentra de manera viva en sociedades con comunidades étnicas con formas de organización autónoma. La característica más destacada de la sociedad boliviana es la *formación social abigarrada* (Zavaleta, 1986), que consiste en un conjunto de realidades políticas que se funden a partir del trabajo de sujetos que vienen de diferentes matrices

culturales e históricas. Zavaleta hace referencia a las masas como “forma multitud”, donde no hay distinción de clases sociales en la lucha. En ese sentido, la forma multitud en los sucesos de 2003 contiene un proceso intersubjetivo construido históricamente. Hay un reconocimiento social común sustento de toda apreciación política. Por eso deslumbra una vez más la victoria en procesos largos que generan un invaluable sufrimiento de quienes se involucran, riesgos para los que participan y amenazas constantes. En instancias de lucha, en la calle, en la trinchera, frente al hambre, la represión y el frío, la solidaridad de los de abajo pareciera ser la contracara de la siempre posible traición y falta de cohesión de los de arriba.

B. Quito: “Forajidos: así mismo somos”

“Vivimos el secuestro de la esperanza”

Quiteño centenario

Quito se encuentra en el corazón de la sierra ecuatoriana. Es la ciudad capital “mal que le pese a Guayaquil”. La ciudad es grisáceo-verdosa y cuenta con construcciones añejas de carácter colonial que se ven superpuestas por nuevas, informales, de uso comercial la mayoría de las veces. Contiene enclaves de riqueza finamente demarcados, de clara composición uniclasista, tal y como indicaría un manual descriptivo de la territorialidad urbana latinoamericana. Desde el 2000 Quito se ha vuelto una “ciudad insegura”, los robos, asaltos, la violencia en las calles se destacan como características sobresalientes de su articulación social¹⁷. Hacia 2001, Ecuador contaba con una población de 13.183.978 millones de habitantes de

¹⁷ Durante el mes de julio de 2011 se produjo un debate mediático que captó la atención pública en el cual se dirimía si Ecuador es la ciudad más insegura de América Latina. Los indicadores con que hasta el momento se cuentan no están suficientemente actualizados en términos de posibilidades de comparación, no obstante, referencias al debate pueden encontrarse en: www.youtube.com/watch?v=FGyYziYJwY y http://elcomercio.com/seguridad/Quito-ciudad-insegura-Ecuador_0_508149393.html

los cuales el 45% se encontraba bajo la línea de pobreza y el 8,3% se encontraba desempleado¹⁸ –según datos oficiales que no distinguen entre desempleo, subempleo y trabajo informal-.

La geografía de Quito muestra una urbe alargada donde llegar del punto más austral a la zona norte conlleva una distancia de más de tres veces el mismo tramo que llevaría trasladarse de oriente a occidente. Esto configura periferias urbanas irregulares y de escasa antigüedad en la zona sur. Ahora bien, el centro de conflicto social y político a lo largo de los últimos años no ha tenido en el caso ecuatoriano a las poblaciones de las periferias como protagonistas de la lucha anti-neoliberal. Por el contrario el grueso de la ciudadanía que se ha movilizó en resistencia a las políticas de turno han sido personas de clase media que sólo en aspectos específicos apoyan las demandas indígenas.

“Las clases medias quiteñas son tal vez las más aristocráticas y ‘meritocráticas’ de todo el Ecuador, con la sola excepción de la ciudad de Cuenca. No porque la aristocracia domine la composición social de las clases medias, sino porque le ha transmitido sus valores, ademanes y sentido de civismo (...). Todo indica que estas clases medias tienen un gran repudio y temor al autoritarismo real o incluso, al verbal y potencial. En el caso de Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, las clases medias repudiaron el autoritarismo de Alfredo Adum y Bolívar González¹⁹. Lo más insoportable es que este autoritarismo está combinado con *huachafería*” [vulgaridad e incapacidad intelectual] (Ospina, 2005: 79). Lo cierto es que colectivos de las zonas más pobres han acompañado algunas de movilizaciones de los últimos años, no obstante quienes han sido los privilegiados participantes que se iniciaban en la dinámica movimentista del 2005 fueron “clasemedieros” urbanos.

¹⁸ Datos extraídos de: INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, www.inec.gov.ec

¹⁹ Bolívar González era el Subsecretario de Bienestar Social de Gutiérrez. Fue acusado de formar parte de la “mafia del gobierno”. Alfredo Adum fue amigo personal desde la infancia y Ministro de Energía y Minas de Abdalá Bucaram. Fue famoso por sus excentricidades en términos de estilo de vida y declaraciones públicas.

La intolerancia a los modos de hacer política signados por la vulgaridad y un incipiente autoritarismo, colmaron del todo sus razones. La demagogia de Gutiérrez alcanzó niveles inaceptables a la luz de sus ojos. El reclamo primero desde este punto de vista se vuelve comprensible: “legalidad e institucionalidad”. Esta fue una demanda que desde el punto de vista popular puede parecer abstracto, de hecho, no tiene referencias anteriores en Bolivia y Argentina, sin embargo, su reiterada referencia para el caso ecuatoriano obedece al agotamiento respecto del “modo” que la política formal asumió con el Coronel Gutiérrez.

“Las clases medias en el Ecuador (o una facción relevante de ellas) son la base social potencial en la búsqueda de un “Estado liberal” (...). En el Ecuador nunca se instaló un “Estado liberal”, pero sobrevivió como una aspiración inconclusa y como una declaración vacía. En esto las clases medias se distancian del Ejército, que se mantiene como bastión de lo poco que quedó del corporativismo, pero se distancian también de las clases dominantes” (Ibid, 2005). No deja de ser llamativo que en efecto sean pocos los espacios de la sociedad civil organizada fuera de las ONGs. Las políticas neoliberales primero y posteriormente las escisiones políticas derivados de los gobiernos posteriores a Gutiérrez debilitaron notablemente los sectores de trabajadores tradicionalmente organizados.

La Iglesia por su parte, ha tenido un rol muy fuerte en la historia reciente que incluso en el movimiento indígena dejó su impronta aglutinadora signando los modos de vinculación colectiva. Las ONGs colaboran en una tendencia pujante que ensambla todo posible desorden. Si a estos factores agregamos el rol clientelar de los gobiernos municipales de mayor intensidad en las comunidades pobres, entenderemos porqué solamente el Movimiento indígena se vuelve depositario de las posibles transformaciones que en la estructura social ecuatoriana pudieran acontecer.

A partir de 1990, las organizaciones indígenas ecuatorianas recuperaron su centralidad política. El famoso levantamiento indígena del “Inti-Raymi” viró los ojos de la sociedad a los grupos indígenas y al mismo tiempo, ellos mismos comenzaron a trabajar para su resignificación política. Luis Macas, reconocido líder indígena, ex Presidente de la CONAIE afirmaba: “Ya no se nos mira como precaristas o *huasipungeros*, no somos un gremio de campesinos, como se nos ha considerado desde la sociología tradicional inclusive aquella de izquierda, y que por lo tanto nuestra lucha debería ser una lucha reivindicativa, en torno al parcelamiento de tierras y la reforma agraria. Ahora la sociedad ecuatoriana mira al movimiento indígena de otra manera y el mismo movimiento indígena tiene ahora plena conciencia de su identidad, lo que ha servido de base para realizar su propuesta nacional y al largo plazo” (Macas, 2000:1). Desde aquel momento comenzaron a utilizar la denominación “nacionalidades indígenas”. El concepto involucraba no sólo una cuestión de autoidentificación sino también un reclamo social y agrario. “La estructura de los grupos indígenas y afro-ecuatorianos es muy variada. Hay una gran diferencia entre los pueblos indígenas grandes y los chicos, en cuanto a su importancia demográfica así como por sus tensiones internas como externas (...) Muchas organizaciones locales se hallan realmente involucradas en la disputa del poder local, lo que implica el acceso a tenencias políticas y Concejos Municipales donde no hay reformulaciones que recurran a la idea de nacionalidad” (Ibarra, 2009: 147). De aquí entonces la problematización del campo indígena ecuatoriano que remite a las tensiones organizacionales entre los niveles locales, regionales y nacionales.

Las razones del conflicto

Fueron ocho las noches en que el conflicto político ecuatoriano del 2005 se desarrolló intensivamente. La primera manifestación tuvo como eje a los estudiantes de colegios secundarios, luego se irían sumando familias, trabajadores de clases media, grupos de profesionales y sectores populares. El incumplimiento de las promesas electorales, su intento de desinformar y dividir a la oposición, fue evidenciando la falta de capacidad de gobierno de un país que atravesaba una crisis de legitimidad política pero a su vez, evidenciaba la ausencia de un discurso que pudiera incluso ideológicamente unir a sus seguidores²⁰. Como afirmamos en el primer capítulo, Lucio Gutiérrez llegó al poder con el apoyo de Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Pero a seis meses de gobierno, las diferencias comenzaron a visibilizarse. Gutiérrez demostraba contar con una agenda propia, diferente a la de los indígenas. De hecho, no participó en las mesas de diálogo de Sociedad Patriótica y Pachakutik para desarrollar el plan de gobierno. Ya en el cargo, colocó a miembros de su familia, de primero y segundo orden, en cargos políticos significativos imponiendo la idea de la *confianza en la política y sus políticos* como estrategia para un gobierno efectivo. A su vez, propuso la militarización del gobierno nombrando a colegas militares en ámbitos estratégicos de gestión. El coronel Arboleda fue nombrado ministro de Energías y Minas, el Teniente Patricio Ortiz Ministro de Bienestar Social, el Coronel Patricio Acosta fue designado encargado de la Gestión Pública, entre otros (Merino, 2005: 32). A diferencia del Movimiento Indígena que a su vez fue responsabilizado de ocupar el Ministerio de Agricultura, el de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

²⁰ El mismo Gutiérrez había afirmado que admiraba tanto al Che Guevara como a Pinochet.

La coalición que apoyó al gobierno de Gutiérrez fue amplia y debido a su necesidad de lograr mayoría en el Parlamento, implicó una alianza con los partidos mayoritarios más allá de su color político (Partido Social Cristiano –derecha-, Izquierda Democrática, Socialdemocracia y Pachakutik –izquierda-). Su elección y el breve tiempo de gobierno estuvo signado por sucesivos acercamientos a las zonas populares a través de la asignación de fondos públicos en localidades pequeñas de manera desordenada y discrecional. Eso generaría posteriormente una adhesión social “eclectica”. Si bien una fracción social importante tenía una disposición a la lealtad hacia Gutiérrez, otro grupo importante cercano al 40% de la población, proveniente de sectores populares, si bien no lo apoyaban, no estaban dispuestas a salir a la calle para destituirlo (Ospina, 2005: 8).

Un escándalo antecede los reclamos que giraban en torno a la destitución de Gutiérrez. En mayo de 2004, Gutiérrez había tenido que adelantar su regreso de la Cumbre de Estados realizada en Mexico, debido a una denuncia en el Congreso que amenazaba con destituirlo por “abandono del cargo”. Analizando el espacio que la oposición fue ganando, el Ejecutivo optó por realizar cambios en los Ministerios de modo de ganar adherentes. Quitó entonces al Ministro de Economía, Pozo, y nombró a Antonio Vargas, reconocido líder indígena como Ministro de Bienestar Social. Hacia octubre continuaba el proceso de sumar causas vinculadas al desvío de fondos públicos para el sostenimiento de su campaña electoral para interpelar a Gutiérrez, sin embargo, cuando el juicio contaba ya con mayoría legislativa, diversos representantes de la oposición (Rocío Jaramillo, Luis Almeida, Felipe Tsenkush, Augusto Guerrero, entre otros) adujeron diversas razones para ausentarse de la reunión dejando a la oposición en franca minoría. Los rumores de compra de silencio se hicieron oír. Ahora bien, la restitución del juicio continuaba como amenaza, entonces, el Presidente con una mayoría en su favor nombró nuevas

autoridades en el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y por simple resolución, reemplazó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, Gutiérrez lograba el control de todos los poderes del Estado. En esa línea, hacia diciembre se dio a conocer el plan de gobierno de reforma de las instituciones políticas y disolución absoluta del Congreso. Al mismo tiempo, garantizó el apoyo de las fuerzas armadas del país con el llamado “paquetazo positivo” que incluía un aumento de los salarios de militares, policías y funcionarios públicos.

Ahora bien, los sucesos que desencadenan el rechazo hacia el gobierno, la ilegal sustitución de la Corte Suprema de Justicia, ocurren en diciembre de 2004. De aquí en adelante, mes a mes, las movilizaciones se irían incrementando mejorando las condiciones de organización y trabajo conjunto. “En Quito los gobiernos locales convocaron a asambleas locales similares a aquella que lideró parte importante de la revuelta anti-bucaramista de 1997, en la que destacó la Alianza Democrática con el Movimiento Pachakutik” (Ibid, 2005). Las referencias hacia la desconfianza en las instituciones deslumbra, pues en los sucesos movimentistas los participantes buscaban dejar en claro su rechazo a toda acción que pudiera ser asociada como soporte a los partidos políticos tradicionales.

Una vez más, es posible considerar que un breve recuento del día a día inmediatamente anterior a la renuncia permite ver en perspectiva el modo en que la protesta fue ganando fuerza y cómo vertiginosamente, una a una de las demandas se van transformando en renovados reclamos que culminan con el pedido de renuncia de la figura presidencial:

- **2 de abril de 2005:** el ex Presidente destituido por presión popular en 1997, Abdalá Bucaram, regresó de su exilio en Panamá poniendo en evidencia su alianza con Gutiérrez. Regresó en medio de un show mediático. Este suceso por

un lado resquebrajó la mayoría parlamentaria que débilmente el entonces Presidente había podido conformar, por otro, despertó la indignación de gran parte de la clase media quiteña distanciándose de los sectores acomodados guayaquileños.

- **3 de abril:** Retornó al país después de Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa, ex Presidente acusado de irregularidades en la renegociación de la deuda externa y de no haber informado sobre el destino de los excedentes del Fondo de Estabilización Petrolera. Las demandas de renuncia presidencial se hicieron escuchar con fuerza.

- **5 de abril:** La Asamblea de Quito convocó a un paro nacional para protestar contra la Corte Suprema de Justicia de facto. La Sierra fue la principal zona movilizada del país. El pedido de justicia y de un verdadero Estado de derecho fueron las principales consignas.

- **10 de abril:** Las movilizaciones se reiteraron cada día. Participan mujeres y familias con niños. Se pedía la renuncia y vigencia de las instituciones.

- **13 de abril:** Se desarrolló un paro convocado por las asambleas de Pichincha y de Quito para exigir la cesación de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales Electoral y Constitucional. Por la noche, el presidente Gutiérrez aseguró: "Creo que ha ganado este inmenso país real, profundo, trabajador y ha perdido ese minúsculo país político, que, de espaldas al pueblo y engañándolo en su beneficio personal, intentó paralizar Quito y Pichincha". Ese mismo día, la ciudadanía se autoconvocó para pedir la salida de Lucio Gutiérrez de la Presidencia de la

República. Miles de personas se manifestaron en la denominada 'Marcha de las Cacerolas Vacías'. Un grupo de manifestantes –luego llamados *forajidos*- se dirigió a la casa de Lucio Gutiérrez, donde residían su esposa y sus hijas, para protestar pacíficamente.

- **15 y 16 de abril:** El Presidente declaró estado de sitio para impedir el desorden. Se realizó el anuncio por parte del presidente escoltado por el alto mando militar de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aviación). Se evidenció el no acatamiento al orden por parte de los manifestantes. Esta medida fue acompañada por un intento tardío de dar solución a las demandas ciudadanas: el Presidente destituyó a los miembros de la Corte Suprema -sin ser ésta una atribución presidencial-. Medida tardía pues la movilización continuaba reclamando su destitución. Hacia el final del día, Lucio Gutiérrez se dirigió al país a través de los medios de comunicación llamando a los partidos de oposición y a todas las organizaciones sociales, políticas y ciudadanas a un diálogo respetuoso y abierto y buscar una salida a la crisis. Levantó el estado de emergencia y pidió al Congreso ratificar la disolución de la actual Corte.

- **17 y 18 de abril:** La movilización perdió su carácter “festivo”. Las movilizaciones se volvieron masivas. Dos concentraciones agruparon por quinto día consecutivo a 10 mil personas en el norte y sur de la capital. Se intensificaron las medidas represivas por parte del gobierno.

- **19 de abril:** Importante movilización nocturna salió de la zona más acomodada de la ciudad sumando a su paso a diferentes sectores populares. Se sabía de la posible presencia de contra-marchistas pagados por el gobierno (popularmente

llamados “buses de monos”). Esa noche la represión brutal se cobró la primera víctima.

- **20 de abril de 2005:** Ocurrió un enfrentamiento entre estudiantes y “forajidos” con grupos de choque contratados por el gobierno. La consigna: “qué se vayan todos” se instaló masivamente. Según la crónica, cerca de 5500 policías y 2500 militares custodiaban las instituciones de gobierno. Fuerte represión. La resistencia contra los convoyes enviados como fuerzas de choque por el gobierno es tenaz. La cúpula militar de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea le retiraron su apoyo para evitar mayor confrontación. Se corría el rumor de un posible golpe militar –evidenciados en artículos de prensa-. Ocurrió la renuncia del Jefe de la Policía, mientras la resistencia se volvía masiva pidiendo la destitución del Presidente. Lucio Gutiérrez fue destituido por los Diputados. En la tarde, un helicóptero de la Fuerza Terrestre llegó a Carondelet y Gutiérrez abandonó el Palacio

Los quiteños en pie de lucha

El Presidente Gutiérrez descalificaba las movilizaciones una y otra vez aludiendo a “los forajidos”. Aquello que no imaginaba es que al mismo tiempo que intentaba deslegitimarlos, les otorgaba un carácter unificador, una identidad. Las movilizaciones en Quito desbordaron los cánones usuales de la protesta. Hubo “cacerolazos”, “reventones” (pinchaduras de globos), “tablazos” (repique de tablas de cortar verduras), “rollazos” (cruces de papel higiénico en las calles con frases alusivas al gobierno), “mochilazos” (en memoria del movimiento de estudiantes secundarios y universitarios) y “pites” (silbatos y “chiflidos”) por la democracia. A

partir del 13 de octubre las movilizaciones fueron mayoritariamente nocturnas y auto-convocadas por medio del correo electrónico o mensajes por celular.

Como contraparte, el Ministro de Bienestar Social no se ahorra calificativos para los manifestantes, les llamó en diversas declaraciones públicas: “sinvergüenzas”, “infelices”, “miserables”, “desgraciados”, “añados”, “pelucones”, “capariches” (Testimonios, 2010; Guerra Bravo, 2005: 28). Las movilizaciones iban hacia el Parque La Carolina y luego al Palacio presidencial de Carondelet.

“A la marcha nos animamos a salir todos, ancianos, religiosos, taxistas, empleadas domésticas, policías retirados, jóvenes, comerciantes, universitarios y hasta niños” (Diego, 25.11.10). Las marchas eran pacíficas, en primera instancia con asistencia de familias completas. Sólo la brutal represión explica la transformación de estas movilizaciones y la agudización del reclamo por la renuncia presidencial. No sólo las “contramarchas o “marchas pachangueras” –movilizaciones de gente paga por el gobierno- fueron un desacierto que generaron el enardecimiento de los manifestantes, también fue la actitud hacia los jóvenes. Hacia el 19 de abril, el Ministro de Educación expresó que “puesto que las marchas eran nocturnas, no había razón para suspender las clases durante el día” (Guerra Bravo, 2005: 36). La afirmación expresó el franco desconocimiento de la magnitud que iba tomando la protesta. Pues, las clases se suspendieron por orden oficial al día siguiente en horario escolar generando que los estudiantes salieran de sus aulas con la protesta del *mochilazo*, extendiendo las movilizaciones aún más.

La parálisis de carros, autobuses, trabajadores y estudiantes detuvo el movimiento de la ciudad, pero más importante: demostró que es imposible reprimir a una ciudad entera. Más aún, el modo de contrarrestar las movilizaciones que sucedían en las calles con el envío de fuerzas de supuestas manifestaciones de apoyo al gobierno, hizo que aflorara el sentimiento regionalista típico de los

ecuatorianos. La gente venida de la costa, no “era de” Quito. “Para muchos se trataba de cholos ignorantes, de mercenarios incultos y de manifestantes acarreados sin libre voluntad como suelen ser los más pobres de la costa” (Ospina, 2005: 13). Quedó demostrado en investigaciones realizadas por los medios de comunicación que hubo grupos de choque: “decenas de hombres –agricultores, pescadores, albañiles y desempleados principalmente- contratados en varias provincias de la Costa por miembros de Sociedad Patriótica, ‘custodiaban el Ministerio de Bienestar Social ante la proximidad del grupo de forajidos’” (Merino, 2005: 12). Entre esos hombres estaba un joven pescador artesanal de Manabí quien afirma haber cobrado 10 dólares por ir a apoyar al Presidente Gutiérrez. Ya en el Ministerio, la orden que recibieron era defender a palazos al que intentara acercarse. La promesa de obras, tierra y dinero que les hacían los gutierristas estaban condicionadas a su apoyo al coronel en una concentración pacífica contra la ‘oligarquía corrupta que se oponía a que el presidente trabajara por los pobres’” (Ibid).

La movilización quiteña que luego tendría eco en una pequeña parte de Guayaquil, explícitamente rechazaba toda forma de liderazgo o conducción política. El descreimiento de la política tal y como venía siendo desplegada, invitó a la creación de formas organizativas alejadas del orden conocido. Lo cierto es que en este mismo proceso de rechazo a liderazgos y banderas partidarias se involucraba el rechazo a las organizaciones sociales. A todas luces, la participación de miembros de la CONAIE en la coalición de gobierno deslegitimó fuertemente el proyecto ‘institucional’ indígena. Ahora bien, la experiencia de la coalición de gobierno arroja otra lección que es la contracara de la lucha contra la “partidocracia”: el involucramiento en el gobierno de nuevas figuras, jóvenes profesionales ajenos a la tradición partidaria conocida, no alcanzó para lograr cristalizar un gobierno creíble,

eficaz. Varios de los miembros del gobierno de Gutiérrez se jactaban de ser “apolíticos” y con eso no se garantizó una ambición de poder menor ni un rechazo popular simétricamente menor. “La constitución de 1998 maniató al Congreso frente al Ejecutivo y lo hizo con toda premeditación y alevosía. Excluyó explícitamente la revocatoria del mandato del Presidente de la República y bloqueó sistemáticamente los procedimientos parlamentarios para defenestrarlo. (...) En Ecuador existe un sistema de revocatoria del mandato presidencial que la gente firma en la calle y que refrendan los militares con su actitud hasta ahora complaciente. Los gobernantes no pueden hacer lo que les dé la regalada gana. Eso es democrático” (Ospina, 29.9.10).

La radio como medio para la identificación colectiva

Es particularmente decisivo el rol que la frecuencia de *Radio La Luna* tuvo en la conformación de opinión en las mentalidades quiteñas antes y durante el mes de abril de 2005. Cada día, la transmisión de noticias era mixturada con salidas “al aire” de ciudadanos quiteños que manifestaban su descontento. “La gente le tenía mucha fe a la recuperación de su propia palabra. Había muchísimas mujeres, ellas tuvieron un papel super destacado, empujaron a sus maridos, a sus hijos, padres. Muchas de ellas venían a la radio después de trabajar todo el día y de tirar piedras, traían el bicarbonato aquí en la nariz que es lo que sirve para soportar de mejor modo los gases lacrimógenos. Había también mucha gente joven y personas mayores, sin un sector social definido. No era una fracción super popular-popular, eso tal vez no había.” (Velasco, 25.11.10) Las voces se volvían más decisivas a medida que el tiempo transcurría. El programa más escuchado y de mayor captación de audiencia era el del famoso conductor Paco Velasco, quien lideró la manifestación de la

indignación no sin pocos riesgos. “Los propios ciudadanos se autoconvocaron. Una palabra mágica fue ‘me convoco a mí mismo’. Yo no fui portavoz de nada. La radio sirvió para abrir los micrófonos, abrir los teléfonos y que la gente exprese” (Velasco, 25.11.10).

El clima de temor y tensión se transformaría al finalizar las movilizaciones, “después de la caída de Lucio sentía aquí en el cuello alivio y también una alerta. Hubo un momento en esta radio que es pequeña, que tiene frecuencia local, en que Gutiérrez hace entrar a asalariados, gente armada, que venían a tratar de destruir el movimiento. Me preguntaba ‘dios mío y si hay una guerra civil?’ (Velasco, 25.11.10). Algunos quiteños ponían los parlantes orientados a la calle de modo de hacer escuchar a todo el mundo los informes de los manifestantes espontáneos. De ese modo, se conectaban los barrios y se identificaban los reclamos comunes. “Había en un comienzo aquello de la dignidad, sentían que Gutiérrez más que haber extraído la capacidad adquisitiva, lo que había vulnerado una noción de dignidad con el estilo de gobierno. Después dirían ‘Lucio fuera’. (Paco Velasco, 25.11.10). La amalgama que la transmisión por radio genera cuando es “en vivo”, a micrófono abierto, espontáneamente, en virtud de su alcance reconocible en todos los sectores sociales, no ha podido ser superada por otros medios de difusión masiva. Eso manifiesta el caso de Ecuador, pero también Bolivia, y Argentina en 2001. La aglutinación, la capacidad de escucha y sobre todo, el nivel de aceptación como modo de expresión de diversos puntos de vista, es uno de los aprendizajes que estas prácticas contienen en procesos políticos decisivos.

No más promesas de la Democracia

El ciclo de protestas en Ecuador llega a su nivel máximo cuando se define como objeto de rechazo a las instituciones políticas en su totalidad. En Ecuador, el derrocamiento de un presidente generó el subsiguiente y así el siguiente. Cada vez, una a una, la resolución del conflicto implicó la instalación de un conflicto latente no resuelto en los hechos de protesta. La radicalidad del “*qué se vayan todos!*” pone de manifiesto esta proclama de finalizar con las promesas que no generan desde su perspectiva más que la concatenación de figuras que en un mismo engranaje comparten los modos de hacer política desde el Estado.

Una síntesis de los problemas planteados en la crítica hacia la política institucional del momento señala a los actores con poder informal, fáctico, como componentes de un sistema político en descomposición: “El problema central es que el sistema político está constituido fundamentalmente por dos tipos de actores anti-constitucionales: las mafias y las corporaciones, que en muchos casos, se disfrazan de partidos políticos. De hecho, buena parte de los partidos políticos no son sino empresas familiares. La familia extensa convertida en aparato de poder político se constituye técnicamente en mafia. La ética de la mafia a su vez es totalmente contraria a la ética de la ciudadanía” (Bustamante, 2005: 13). Un estudio del periodo previo a la destitución de Gutiérrez sostenía con contundencia: “Ciertos análisis superficiales de la actual situación pueden llevarnos a pensar que el problema surge de la malevolencia y la corrupción de ciertos actores. Sin embargo, una visión más panorámica de la vida política ecuatoriana en las últimas décadas nos lleva de inmediato a sospechar de semejante enfoque. El problema de la ilegalidad no es nuevo. De hecho, el derrocamiento de los Presidentes Bucaram y Mahuad fue una evidencia ya de por sí bastante contundente del carácter fraudulento de

cualquier pretensión respecto a la efectiva vigencia del imperio de la ley y del acatamiento de la Constitución. La experiencia de la cotidianeidad confirma que, para el común de los ciudadanos, el Estado de derecho es una noción ajena y desvinculada de la experiencia real de la vida” (Ibid, 2005). Por eso resulta esclarecedor comprender el camino que las demandas construyen: “las reivindicaciones y demandas de mayor participación que habían dado lugar a movimientos y conflictos sociales, y sobre las cuales se había ordenado el conflicto democrático se desgastan y comienzan a declinar para ir siendo sustituidas por las protestas contra los gobiernos” (Sánchez Parga, 2005: 55).

Y a este factor debemos sumar otro de diferente significación también presente en los otros casos de estudio. Es evidente en el caso ecuatoriano cómo el proceso de descomposición social propio de la era neoliberal, implicó una serie de exclusiones concatenadas. Los excluidos se veían suprimidos en sus modos de manifestación política además de verse ajenos a la redistribución de la riqueza. Como afirma lúcidamente Sánchez Parga una vez más: “la violencia social inherente explica la violencia de la protesta política así como el carácter defensivo de la lucha” (Ibid). En ese sentido, la consecuencia del proceso de politización de la sociedad civil es una efectiva deslegitimación de la sociedad política. La protesta impugna a los partidos políticos y la clase política en su totalidad. Así, la protesta no es democráticamente gobernable ni políticamente representable, pues ni los partidos ni las organizaciones sociales que estaban dentro del aparato político (como la CONAIE en Ecuador) pudo aglutinar el reclamo de los sectores que se manifestaban.

El movimiento ecuatoriano, pero también el boliviano y el argentino, demuestran que las movilizaciones acontecidas en el periodo que estudiamos alteran la propia sociología del conflicto. Existe una politicidad que sólo proviene de las diversas formas de exclusión reflejo de una sociedad desentendida de una

articulación política formal legítima. Esto explica cómo la protesta aglutina sin mediación a diversos sectores, muchos de los cuales no habían participado en movilizaciones políticas previamente, y a diferentes fracciones de clase que convergen en un rechazo político unificado.

El tránsito de reclamos ecuatorianos

El carácter contestatario de la movilización popular quiteña dio cuenta de una percepción construida a través del tiempo. En la memoria colectiva persiste el recuerdo las movilizaciones populares que lograron la destitución de Bucaram en 1997 y en 2000 la de Jamil Mahuad. Bucaram fue cesado por el Congreso por incapacidad mental y al poco tiempo fue sustituido en su cargo por Fabián Alarcón. Manifestaciones y sucesivas huelgas encabezadas fundamentalmente por el Movimiento indígena rechazaban el modo de hacer política, el clientelismo y la corrupción impune de la clase política. Estas movilizaciones no sólo gestaron la renuncia del primer mandatario sino también la cristalización de una Asamblea Constituyente. Asimismo, persiste en la memoria de los ecuatorianos la confabulación militar que en enero de 2000 destituyó con apoyo popular a Yamil Mahuad. Según la investigadora García Gallegos, “el golpe de Estado para derrocar a Mahuad, que se estaba preparando en grupos de Fuerza terrestre con vinculaciones con el movimiento indígena, fracasó al diversificarse a última hora los planes sediciosos debido al extremo personalismo reinante entre los confabulados. El Coronel Lucio Gutiérrez inició el Golpe de Estado que terminó poco después en un improvisado y fugaz triunvirato indígena-militar” (G. Gallegos, 2009: 180). Claramente, la amalgama de sectores que acompañaron a Lucio, dificultaron la capacidad de distinguir la diversidad de enfoques dentro del gobierno. El rechazo

hacia todo el arco político fue inevitable, el movimiento Sociedad Patriótica terminó conjuntando a sectores de la izquierda tradicional, a parte del movimiento indígena ya grupos empresariales –que se sumaron en la segunda vuelta electoral-, con valores nacional-populares con tintes chavistas y frases alusivas al deseo de convertirse en “el mejor amigo de los Estados Unidos”²¹.

La fuerte tradición destituyente, la continuidad desde 1979 –transición a la democracia- de actos que reproducen una clase política con poder discrecional y fuertemente vinculada a actos públicos de corrupción no juzgados –ni siquiera revisados por el Presidente Correa-, reflejan una estructura social que no consiguió más que aprender a rechazar de raíz la imposición de un modelo de democracia disciplinada. En estos términos se inscribe un tránsito de demandas que se va potenciando al calor de una memoria que reluce y se desnuda en tiempos de crisis. Los ecuatorianos no se quejan por agravios materiales que perjudican su derrotero cotidiano. Por un periodo que excede una década se visualiza una relación de decadente representación política. La Asamblea Constituyente contenía en 1997 y 1998 la demanda de mejorar los modos de representación y por lo tanto de participación, los llamados Parlamentos del Pueblo como experiencias deliberativas regionales autoconvocados fueron manifestación de esa necesidad. No obstante, sería hasta el triunfo electoral de Rafael Correa en que una nueva Asamblea Constituyente –no sin contrariedades manifiestas- lograría después de negociaciones super extendidas, alcanzar una Constitución más cercana a la voluntad popular.

²¹ “En visita a la Casa Blanca, Gutiérrez dijo al presidente George W. Bush: "Queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los EEUU en la lucha permanente por alcanzar la paz en el mundo, por fortalecer la democracia, por reducir la pobreza, por combatir el narcotráfico y por terminar con otra lacra humana, como es el terrorismo". Sus aliados, Pachakutik y la Conaie, y la oposición calificaron el gesto como una entrega incondicional de la soberanía nacional” (Hoy Online, 11 de febrero de 2003).

La captura política de la CONAIE

La pregunta sobre el rol de la CONAIE en el proceso de crisis y cuestionamiento político al gobierno de turno movilizó el origen del presente estudio de caso. No obstante, las consideraciones por parte de sus participantes dan cuenta de una postura poco clara, en la cual la CONAIE habría estado presente en las movilizaciones de abril sólo de manera fragmentada. Aún así, la consideración de la CONAIE sigue siendo fundamental, pues no puede entenderse el ciclo histórico de revueltas sociales que comienza a finales de los '80 en Ecuador sin reconocer a la CONAIE como la principal depositaria de las demandas indígenas y desde 2005, también de las demandas populares. Reconocer su rol, conocer su derrotero y trayectoria en términos de acciones contestatarias y tomas de postura permite comprender la construcción de capacidad destituyente de una organización que aún en el presente tiene peso específico. Su historia y significación para otros pueblos indígenas de América Latina en el presente evidencian un respeto insoslayable que la toman como referencia de lucha desde los años '90. Para dar cuenta de esta significación vale recuperar su trayectoria movimentista, esto implica dar cuenta del camino atravesado hasta convertirse en una Organización que construyó capacidad destituyente. Recuperamos entonces los sucesos críticos contestatarios de los '90 en base a trayectorias individuales previamente analizadas, las cuales permiten entender el modo en que la Confederación llega a formar la coalición de gobierno en 2005.

La CONAIE se conformó en 1986 resultado de un acuerdo entre la CONFENAIE (Confederación de Nacionalidades indígenas de la Amazonia Ecuatoriana) y la ECUARUNARI (Ecuador Runacunapac Riccharimui – “Despertar de los indios ecuatorianos”), que nuclea a los pueblos quechuas de la sierra. Con la pretensión de

abarcar y representar a todas las organizaciones del país, la propia CONAIE creó la COICE (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana). Pocos años después la Confederación se destaca por la conducción de tres grandes sucesos movimentistas que fortalecieron su papel en el campo político ecuatoriano y le otorgaron el reconocimiento que en el presente tiene en Latinoamérica.

La movilización nacional realizada en 1990 constituyó el primer levantamiento indígena nacional en Ecuador. “El desarrollo de las organizaciones indias; el surgimiento de una nueva élite intelectual indígena que tuvo acceso a la educación formal, la concurrencia de varios procesos de reivindicación que venían gestándose dentro del propio movimiento, la coyuntura de un gobierno democrático y un empobrecimiento generado por los sucesivos planes de ajuste neoliberales aplicados en el país desembocaron en el levantamiento de 1990” (Porrás Velasco, 2005: 227). Los indígenas reclamaban entrega y legalización de tierras, solución a problemas de restringido acceso al agua, entrega de recursos, libre importación y exportación para sus artesanías y legalización de prácticas de medicina indígena. Lo cierto es que se paralizó el flujo de las grandes ciudades por los sucesivos cortes de ruta, el desabastecimiento y la sucesión de marchas que denunciaban la militarización e invisibilización política de las comunidades indígenas. El acatamiento al paro fue total, la preparación de la movilización había sido extendida en el tiempo. Vale recordar que la toma de decisiones en la CONAIE implica una consulta exhaustiva que va desde las bases, pasando por las organizaciones intermedias, hasta la dirigencia –no importa el tiempo que este proceso tome-. Este proceso se reitera para discusión de cada aspecto particular. Toda toma de postura involucra tiempos largos y en un mismo movimiento garantiza la representatividad de su dirección.

Esta gran movilización indígena y campesina del año '90 es reconocida como aquella que incorpora a los indígenas ecuatorianos al debate en política nacional, el que les otorga reconocimiento. La CONAIE llama la atención, aclama, visibiliza un sector que inmerso en una sociedad con vestigios coloniales, no tenía voz unificada. En este marco, la respuesta gubernamental no se hizo esperar. Una argumentación que merece tomarse en consideración sostiene que “en 1990, Rodrigo Borja, Presidente durante el levantamiento indio, aplicó en los primeros días una política tolerante respecto a la acción política indígena. Sin embargo, emprendió una estrategia a largo plazo de desmovilización a través del ejército, que fue posteriormente profundizada y mantenida por el gobierno de Sixto Durán Ballén. Esta estrategia consistía en la militarización de las zonas indígenas más conflictivas, a través de la ejecución por parte de los militares de proyectos de desarrollo. Pero esta misma cercanía de los militares con los indígenas creó una nueva relación, que pocas veces tiene manifestaciones violentas, e inclusive en 2000 se materializó en colaboración para el Golpe de Estado” (Porrás Velasco, 2005: 102).

Hacia 1992, nuevamente los indígenas ecuatorianos llamarían la atención nacional e internacional. Cerca de la conmemoración del 12 de octubre de 1492, aún frente al intento de amortiguar la idea de “descubrimiento de América” renombrando la jornada como “el encuentro de dos mundos”, los indígenas desarrollaron una movilización por el territorio nacional con el fin de evidenciar la continuidad de las prácticas coloniales en el país. El 12 de octubre, una marcha multitudinaria arribó a Quito, donde Luis Macas, entonces presidente de la CONAIE, rechazó el festejo conmemorativo oficial. Hubo saqueos en los mercados, cortes de ruta y debates públicos. En esta oportunidad, la CONAIE exigió el reconocimiento de la plurinacionalidad de Ecuador además de reclamar solución a los conflictos de tierras, la instalación de centros de acopio y alimentación para las comunidades, la

auto-designación de autoridades parroquiales en comunidades indígenas y la ejecución de proyectos para el acceso al agua, entre otros. No pasaría mucho tiempo para que las consecuencias de las movilizaciones dieran a la Confederación la fuerza necesaria para decidir participar en procesos electivos a nivel nacional. En 1993, la Asamblea Nacional de la CONAIE decidió elegir candidatos propios para que participaran en las siguientes elecciones. Con este fin crearon un partido político al que llamaron *Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País*. A partir de ahí, la presencia política-institucional de la CONAIE acompañaría la trayectoria política del país hasta la actualidad.

Ahora bien, en 1997 Ecuador sufría una de las crisis políticas más graves desde su proceso de democratización. Como se ha analizado, Abdalá Bucaram, elegido Presidente en 1996, fue cesado por el Parlamento luego de seis meses de gobierno²². La CONAIE fue en aquel entonces una de las organizaciones que lideró su pedido de renuncia con la toma de la Catedral (en memoria de la marcha del '90), acompañada de un reclamo general de la sociedad contra la corrupción generalizada manifiesta, el clientelismo y la impunidad de la clase política. Por primera vez, el movimiento indígena se presentó compartiendo un reclamo con otros sectores sociales conformando la Coordinadora de Movimientos Sociales. La aglutinación otorgó fuerza y cohesión. Esto se evidenció en los Parlamentos Populares Provinciales que fue un ensayo de Asamblea Constituyente popular a nivel provincial²³. Pues, los acontecimientos de febrero de 1997 llevaron a la elaboración

²² La incapacidad mental aducida como razón parlamentaria para su destitución se sustentó en actos impertinentes del Presidente en eventos públicos oficiales. Realizó declaraciones comprometedoras y ofensivas a políticos de su partido y de la oposición, cantaba en programas de televisión. El mismo Bucaram se autodefinió como “el loco que ama”.

²³ “La Asamblea Nacional Constituyente del Pueblo iniciada el 13 de octubre en Quito reunió a 460 asambleístas, quienes se reunieron una semana para elaborar una primera propuesta; con ella regresaron hasta sus comunidades de origen para discutir los planteamientos y obtener sugerencias; luego se volvieron a reunir entre el 21 y el 23 de noviembre para obtener el proyecto final que fue entregado a la Asamblea Nacional oficial el 9 de enero de 1998” (Porras Velasco, 2005: 289).

de pautas para una reforma constitucional en Ecuador además de generar la destitución de Bucaram.

Por su parte, la actitud del gobierno no fue pasiva sino que con anterioridad había emprendido una estrategia de cooptación que garantizara el control y en todo caso, la división al interior de la CONAIE. Bucaram había ofrecido la creación de un Ministerio Étnico Cultural a cambio del voto indígena en el '96. En el '97, hacia fin de año, en la realización del Quinto Congreso de la CONAIE, según varios miembros actuales, la votación fue sabotada y las Organizaciones de la Amazonia impusieron en la directiva a Antonio Vargas, quien más tarde conformaría la Junta de gobierno que sucede a Mahuad y luego, parte integrante del gobierno de Lucio Gutiérrez. El rol de Antonio Vargas resulta del todo polémico. Su involucramiento con el gobierno de Gutiérrez aplaca la política autónoma indígena. No sólo consiente una relación gubernamental basada en la entrega de recursos sino que dificulta la capacidad de interrelación con otros sectores sociales hasta 2005. Como Ministro de Bienestar Social colaboró en la política clientelar gubernamental y fue acusado de traidor por muchos de sus compañeros.

El paso del tiempo haría inteligible la concatenación de sucesos en términos de estrategias gubernamentales, reacciones de la CONAIE y disputa de recursos – materiales y simbólicos⁻²⁴. Una década después persisten los ejes de tensión de aquella historia reciente. “Las organizaciones del movimiento indio son muy

²⁴ Un factor poco mencionado por los miembros de la CONAIE entrevistados es la influencia de Organizaciones No Gubernamentales que en diferente medida han colaborado en las acciones de las comunidades. “Es pertinente distinguir las ONGs de desarrollo que han apoyado financieramente a las organizaciones indias y han facilitado recursos materiales utilizados posteriormente para las movilizaciones, de aquéllas cuya colaboración ha sido, además de financiera, política, como por ejemplo las ecológicas y de derechos humanos. Las ONGs de desarrollo han permitido a los líderes indios acercarse a procedimientos técnicos de manejo de proyectos, y les han dotado de experiencia en el manejo eficaz de los recursos. Las ONGs de derechos humanos y ecológicas han aportado principalmente nuevos elementos para el discurso indígena: la conservación ambiental y el marco de los derechos” (Porrás Velasco, 2005: 169). Las movilizaciones de los noventa tuvieron un apoyo diferencial de ONGs, lo cual implicó el distanciamiento con algunas, claramente las menos adeptas a la participación contestataria hacia el Estado.

heterogéneas; existen diferencias regionales, culturales, económicas e incluso religiosas. Esto ha hecho que su estructura organizacional sea descentralizada y necesariamente hay varios polos de poder por provincias, región u organización” (Porrás Velasco, 2005: 102). En contacto con sus dirigentes es posible percibir dos ejes de tensión que escinden actualmente a la organización indígena. Por un lado, la breve participación en el gobierno de Gutiérrez, a quien la propia CONAIE fragmentariamente colaboraría en destituir, desencadenó una polarización ideológica entre aquellos que sostienen que es buena la participación en la política gubernamental y su cercanía con sectores de la izquierda, y quienes consideran que la CONAIE debería permanecer a un lado, conservando una postura autónoma no formal e institucionalmente politizada. El segundo eje de tensión está dado por las organizaciones de la Amazonía y las de la Sierra, que implícitamente se disputan la orientación del Movimiento. “Desde las organizaciones de la Sierra se acusa a las amazónicas de tener una política meramente instrumental, que les hace apoyar a cualquier partido, sentando las bases para una relación clientelar de los políticos con los pueblos indios y haciéndoles proclives a la corrupción” (Porrás Velasco, 2005: 102).

En suma, la trayectoria política de la CONAIE da cuenta de un proceso de “acumulación política” (Escárzaga, 2004) que va *increscendo* en los '90. Esta construcción de suma de ideas de otros sectores sociales, que avanzó por vía no institucional hasta la efectiva incorporación del Pachakutik al gobierno, tuvo consecuencias poderosas para la Organización. Sin embargo, las tensiones al interior del Movimiento se transparentaron con el involucramiento directo de los dirigentes indígenas en la plana mayor gubernamental. Inmersas en relaciones de poder las tensiones se intensificaron, se ampliaron y generaron mayor polarización. La construcción de capacidad destituyente acumulada desde 1990 hasta el 2000

acompañada de otros sectores –inclusive sindicatos e intelectuales- de la sociedad ecuatoriana, se vio mermada por una débil acción autónoma dentro del gobierno de Gutiérrez.

Las consecuencias serían palpables en poco tiempo. En una mirada que atraviesa la actualidad ecuatoriana la CONAIE se encuentra fragmentada, con dudas respecto de su devenir, conciente de su menor credibilidad, menor capacidad cohesiva e incipiente desconfianza de las organizaciones intermedias que la sustentan. Sólo la postura asumida de manera autónoma frente al gobierno de Rafael Correa, pareciera estar ubicándola en un posicionamiento más estable inmersa en un proceso de rearticulación y reconstrucción fundacional.

B. Buenos Aires: “Qué venga lo que nunca ha sido”

Siempre hay engaño para los pobres, nosotros ahora estamos igual y vamos a morir así.

Anciano piquetero

Florencio Varela se encuentra a 30km de la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los partidos más grandes del Conurbano bonaerense. Su geografía es irregular y su periferia urbana sigue las líneas ferroviarias. Los sectores más pobres se nuclean cerca de la línea de trenes que viene de Constitución, vía de comunicación directa con la Capital. Las construcciones barriales que cercan la sede del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) son modestas pero completas, los colores rojizos, verdes y grises colman el paisaje.

La sede del Movimiento es pequeña pero cumple con las necesidades de acopio de los recursos que el barrio, algunas pequeñas empresas y el gobierno les entregan para su gente. El MTR nació en 1996 como Movimiento de Trabajadores Desocupados en Florencio Varela y le debe su nombre a la trabajadora del hogar

asesinada por el Estado en la Provincia de Neuquén, en medio de una movilización. “Se toma el nombre porque la característica del movimiento es que al principio la mayoría eran mujeres, eran muy pocos los compañeros hombres. Entonces como Teresa Rodríguez era una mujer obrera, tomamos el nombre de ella” (Gleyza, 16.10.10). En el presente, 200 militantes forman parte de la organización, en Buenos Aires alcanzan los 400. Acerca de la situación de las mujeres que estaban en un inicio, es posible constatar que algunas siguen participando, otras se han ido a otras organizaciones, en algunos casos, algunas de las mujeres que se iniciaron en la actividad política del MTR consiguieron trabajo formal dejando atrás la práctica contestataria.

El distintivo simbólico del Movimiento es el pañuelo celeste al cuello. En 1997 realizaron el primer corte de ruta, en la carretera número 36 a la altura del llamado “barrio Pepsi” del conurbano bonaerense. “Allí logran conseguir 80 planes de empleo y cajas de alimento. La lucha continúa, y en el mismo año vuelven a cortar la ruta 36 consiguiendo 800 planes de empleo y la renovación de los 80 anteriores. Un mes después vuelven a cortar la misma ruta y son reprimidos y encarcelados” (Garrido, 2005). Las principales actividades del Movimiento son organizar actividades productivas, elaborar proyectos que generen trabajo y defender los planes sociales del Estado obtenidos. “A fines del ’96 se hace la primer marcha de desocupados acá en Varela que eran 50 vecinos. Eso era una asamblea que se había logrado en un barrio y después de esa marcha empezamos a visitar y recorrer otros barrios donde se suman más compañeros y en el ’97 se larga el primer corte de ruta en el conurbano imitando un poco lo que había pasado en el Sur del país” (Gleyza, 16.10.10).

El componente teórico ideológico de los dirigentes del Movimiento es sujeto de trabajo y permite vislumbrar no sólo el acceso a derechos sino además una lucha

por “el cambio social”. Esta certeza significó para el MTR de Varela la cristalización de su propia identidad, pues el gran Movimiento de Desocupados que lo nucleaba sufrió una escisión en 1998. “El movimiento siempre fue una lucha por pedir planes y alimentos. En ese momento, en 1998 a partir de que luchamos, al 2000, conseguimos el plan, nos dieron 300 planes barriales con un sueldo de 200 pesos, y ahí nos organizamos y conseguimos alimentos. Y siempre seguimos, si hoy hay más desocupados que trabajadores” (Gezy, 10.10.10).

Hacia el 2001, el MTR compuso el Bloque Piquetero Nacional, fuerza aglutinadora de diversas organizaciones populares que compuso la gran movilización que colaboró en la decisión de renuncia del entonces Presidente Fernando De la Rúa. El Bloque convocó a grupos diferentes entre los que se encontraban campesinos, estudiantes, jubilados, trabajadores y trabajadores desocupados. Conformaron un frente de lucha que exigió reivindicaciones inmediatas.

En 2001, de un total de 36.260.130 millones de habitantes, el 25% -según cifras oficiales- se encontraba desempleado, y el 51.4% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza²⁵. “El pueblo no daba más, ya no había más forma de vivir. Nos organizamos y en Plaza de Mayo tiramos contra el poder. Estuve el 19 y 20 y fuimos con todos los compañeros. Mi familia no, ellos no quieren que venga pero yo no le dejo. Acá aprendí por ejemplo a respetar a la gente, conocer, hablar (...) Y ahí nos comunicamos con los compañeros y fuimos juntos. En la Plaza nos quedamos y vino la represión y el que ligó, ligó y el que no ligó, no. Hubo 7 heridos y lo sacamos de la Plaza y lo trajimos para acá. El 20 volví porque me gustó. Ahí vimos un muerto, un tipo que conocía de vista y corrimos y lo trajimos... es que nosotros vamos sin armas y ellos tiran” (Gezy, 10.10.10).

²⁵ Datos del INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, www.indec.gov.ar

El tránsito de los reclamos porteños

Dos ciclos de protestas se desarrollan en Argentina en un periodo breve de tiempo. El primero del año 2001, entre septiembre y octubre, protagonizado por los trabajadores desocupados y los empleados del sector público. El segundo, de diciembre a febrero, está signado por saqueos, reclamos de alimentos, cacerolazos y movilizaciones de diferentes sectores urbanos que se cohesionan. La crisis política que se desarrolló con mayor intensidad en 15 días, involucró a cinco presidentes. No obstante, el caso argentino demuestra que llegar a la consideración de los sucesos “objetivos” previo al análisis del horizonte interior de los movimientos sociales, debemos retrotraernos hacia algunos meses anteriores al 19 y 20 de diciembre de 2001. Una vez más, el tránsito de los reclamos evidencia sucesos catalizadores de la protesta, concatenación de la construcción de capacidad destituyente.

- **4 de marzo de 2001:** El conservador Ricardo López Murphy fue nombrado titular del Ministerio de Economía asegurando cumplir las metas pactadas con el FMI, reafirmando la convertibilidad.
- **16 de marzo:** Se anunció un nuevo Plan económico con un importante recorte en el gasto público principalmente orientado a educación. Crecía la oposición política, se anunciaron paros y se realizaron manifestaciones en varios puntos del país.
- **20 de marzo:** Domingo Cavallo fue nombrado Ministro de Economía, tras la renuncia de López Murphy. Nueve días después, el Congreso le otorgó "superpoderes".

- **30 de julio:** Se aprobó la Ley de Déficit Cero, aprobando con su sanción un recorte de 13% a los salarios públicos, jubilaciones y pensiones.
- **29 de agosto:** Se sancionó la Ley de Intangibilidad de los Depósitos. Fue llamada “corralito” y estableció la imposibilidad de retirar los ahorros que los ciudadanos tenían en el banco²⁶.
- **14 de octubre:** Se desarrollaron elecciones legislativas en las cuales el mayor número de votos fueron anulados y en blanco. Se denominó “voto bronca”. El Partido Justicialista quedó como mayoría en el Congreso.
- **1 de noviembre:** Se lanzó un nuevo paquete de medidas entre las cuales estaba la estatización de las deudas privadas.
- **20 de noviembre:** El ex presidente Menem fue absuelto por la Justicia por la causa que lo acusaba de desviar destino para el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.
- **1 de diciembre:** Se dieron a conocer las medidas económicas que cristalizan el “corralito”, confiscación de bienes privados por parte de los bancos. Además, se bancarizaron y dolarizaron las actividades económicas en el país. Según datos del

²⁶ Según una investigación realizada por el Periódico La Nación, el diputado justicialista Franco Caviglia denunció que “entre el 20 y el 30 de noviembre de 2001 se fugaron del país divisas a través de 358 camiones de camiones de caudales”. Los testigos serían miembros de la Policía Aeronáutica que realizan los controles en el aeropuerto internacional de Ezeiza, quienes corroboraron la salida de dinero con destinos presumibles como Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. “Según constataron los testigos que presenté a la causa, también se habría fugado dinero con posterioridad a la entrada en vigencia del corralito, lo cual configura un ilícito mucho mayor” (La Nación On Line, 17 de enero de 2002).

Periódico *Página 12* del día, los decretos de emergencia que Cavallo hizo firmar al entonces presidente Fernando de la Rúa propiciaron una transferencia de ingresos de miles de millones de dólares a las empresas de capital más concentrado, en distintos sectores de la economía. De los primeros 50 deudores sólo seis tenían problemas de solvencia. Los restantes 44 son empresas con alta capacidad de pago que tenían sus créditos al día.

- **5 de diciembre:** Se publicó el rumor que sostenía que en ámbitos políticos y del gobierno había un informe de la Secretaría de Investigaciones del Estado que afirmaba que un sector del Partido Justicialista buscaba derrocar al Gobierno. Son mencionados el entonces gobernador Carlos Ruckauf y el sindicalista Moyano, así como el ex gobernador Eduardo Duhalde.
- **13 de diciembre:** Comenzaron los saqueos en supermercados en la ciudad de Rosario. Se anunció una huelga general contra las restricciones bancarias.
- **19 de diciembre de 2001:** Centenares de personas se lanzaron al saqueo de almacenes -tiendas- y supermercados. Los enfrentamientos causaron cuatro muertos. De la Rúa decretó *estado de sitio* en las primeras horas de la noche. De este modo, quedaban suspendidas las garantías constitucionales durante un mes. Al finalizar el mensaje de anuncio del estado de sitio, una protesta se conformó en Plaza de Mayo. A la medianoche se dio a conocer la renuncia del Ministro de Economía Domingo Cavallo. Los manifestantes comenzaron con cacerolazos pidiendo que se vayan los políticos y los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

- **20 de diciembre:** Siguieron los cacerolazos con miles de personas concentradas en la Plaza de Mayo. Sin mediar violencia por parte de los manifestantes, comenzó la represión de la Policía Federal. Hubo cinco muertos. Los senadores vetaron los “superpoderes” concedidos al Ejecutivo y en la tarde se anunció la renuncia del presidente De la Rúa, quien escapó en helicóptero de la Casa Rosada. Ramón Puerta, entonces presidente del Senado, asumió transicionalmente la presidencia. La suma de muertos por la represión policial alcanzó los 32 en todo el país.
- **23 de diciembre:** La Asamblea Legislativa, con escasa mayoría, nombró Presidente provisional a Adolfo Rodríguez Saá.
- **29 de diciembre:** Manifestante lograron entrar al Congreso Nacional en plena movilización. Encendieron fuego y rompieron vidrios. Hubo represión. Los ministros presentaron su renuncia y el presidente Rodríguez Saá convocó a los gobernadores a una reunión en Chapadmalal donde él mismo presentaría su renuncia.
- **30 de diciembre de 2001:** Eduardo Oscar Caamaño fue nombrado Presidente provisional conduciendo a una interna para convocar a nuevo Presidente.
- **1 de enero de 2002:** La Asamblea Legislativa nombró a Eduardo Duhalde Presidente. Fue elegido hasta el 10 de diciembre del 2003 con la misión de llamar a elecciones.

En este contexto, las acciones de los trabajadores desocupados vieron incrementar sus movilizaciones. Los movimientos *piqueteros* se destacan como el actor social visible en la disputa por recursos en el campo político.

Sobre los miedos.

Del disciplinamiento a la organización social

El caso argentino desnuda procesos que por su intensidad y cercanía en el tiempo brillan por su persistencia en la memoria colectiva. Son evocados una y otra vez en los testimonios, de diferentes formas y bajo diferentes circunstancias. Se trata de sucesos críticos que por su diferente significación quedaron marcados como sello de lo que una crisis política, pero también económica en Argentina, puede significar. Relatos informales, dichos populares, contienen en esencia esta cristalización de miedos que derivaron en políticas de disciplinamiento social, presentes en un esquema de percepciones, hasta la fecha.

¿Soluciones a las crisis argentinas, un mal menor? En el año 1982, en el marco de la declinante dictadura militar, el político Domingo Cavallo hizo su primera aparición pública. Su medida más reconocida en aquel contexto transicional en que fue Presidente del Banco Central fue la estatización de la deuda privada. En 1991, la hiperinflación desatada lo volvió nuevo protagonista. En aquella oportunidad gestó en connivencia con el Presidente Menem el Plan económico de Convertibilidad a partir del cual poseer 1 dólar era nominalmente igual a poseer 1 peso argentino. Esta medida económica de fijación del tipo de cambio y desindexación de precios, dolarizaba formalmente la economía impidiendo una suba de precios, inhabilitando al gobierno a realizar cualquier política en materia monetaria –pérdida de soberanía asumida-. La convertibilidad como medida restrictiva auspiciaba la solución a la temerosa hiperinflación -suceso que aglutinaba otras prácticas como los saqueos y

las huelgas reiteradas promovidas por sectores sindicales-, que había socavado las bases de la estabilidad económico-material de los argentinos hacia fines de los '80²⁷.

Como Ministro de Economía, Domingo Cavallo consolidó asociaciones entre bancos acreedores, empresas transnacionales y grupos locales que generarían ganancias extraordinarias, pues la dolarización aseguraba ganancias en dólares contra cualquier depreciación de activos. En el marco del menemato impulsó además la privatización de todos los servicios públicos²⁸. La ruptura de la coalición con transnacionales y bancos acreedores le permitiría más tarde volver a ejercer un cargo público, en el gobierno de De la Rúa. En aquella oportunidad, Cavallo buscó garantizar las ganancias de los bancos impulsando desde el Estado la retención de los ahorros de los ciudadanos. Ahora bien, el país no generó la cantidad suficiente de dólares para sostener el modelo de acumulación basado en la valorización financiera y la fuga de capitales que sostenía la convertibilidad. Sería entonces la salida de esta política y la posible devaluación una de las principales razones que lo inducirían a renunciar a su cargo público como Ministro de Economía²⁹.

²⁷ Incluso, "la experiencia de la hiperinflación le sirvió al gobierno de Menem para articular un 'consenso de fuga hacia adelante' que, básicamente implicó la articulación de un sistema de alianzas con aquellos sectores que habían actuado como desestabilizadores del gobierno durante la presidencia de Alfonsín (...). Así, las principales medidas pudieron ser aplicadas sin una oposición consistente que estuvo concentrada en los sectores directamente afectados (...). Por otra parte, la normativa reguladora de las huelgas en los servicios públicos y la legislación laboral aprobada en 1991, hizo muy difícil la estrategia de resistencia" (Gordillo, 2010: 65)

²⁸ La embestida neoliberal "constó con la privatización de 93 empresas estatales, la desregulación de los mercados financieros, la re-regulación del mercado de trabajo con leyes de flexibilización liberal y el traspaso de la responsabilidad financiera de servicios de educación y salud a la esfera provincial" (Dinerstein et. al, 2010: 18)

²⁹ Para mejores referencias, ver la investigación de Horacio Verbitsky. En relación a la estatización de la deuda privada afirma: "El artículo 1º del decreto 1387 modificó el Código Civil, de modo de favorecer la compensación de deudas entre las empresas y el Estado, un viejo reclamo del Correo Argentino, de Aeropuertos 2000 y de otras empresas privatizadas. El artículo 27 permitió a toda sociedad anónima capitalizar sus deudas con el fisco, entregando acciones en pago de impuestos. Los artículos 30 y 39 dispusieron que esas sociedades anónimas y todas aquellas que no adeuden impuestos podrán pagar sus deudas a todos los bancos con títulos públicos a valor técnico. A su vez, los bancos podrán convertir esos títulos en préstamos o bonos garantizados con recursos públicos, incluyendo todo tipo de tributos por su valor nominal. Es decir, se les permite comprar títulos a precios de mercado, que hoy ronda en el 35 por ciento de su valor, y descargarlos al cien por ciento al Estado. La licuación asciende así a dos tercios de las

Ahora bien, más allá de nombres y en a búsqueda de procesos que permitan abrir un paraguas explicativo, la dictadura primero, la hiperinflación después, serían sucesos que por su impacto continúan presentes en las percepciones populares a la hora de considerar caminos, acciones y opciones políticas. Sería más tarde, en 2001, cuando el miedo a la represión y a la hiperinflación como procesos disciplinadores de la historia argentina reciente, sedimentarían otro pánico: el desempleo.

Las políticas de ajuste implantadas desde 1991 lograron alcanzar crecimiento económico y estabilización, razón por la cual fueron legitimadas. No obstante, luego de la recuperación post inflación de 1989, el desempleo comenzó a superar los niveles históricos, alcanzando en mayo de 1995 un 18,6% de la población económicamente activa (Gordillo, 2010).

Las transformaciones experimentadas en el mundo del trabajo en la década no revertirían sino que complicarían más la situación. Flexibilización, tercerización, desregulación y la aparición de contratos temporales contribuirían a agravar el fenómeno. “Si bien se observa en la década una tendencia general a la disminución del empleo, se advierte que a las familias de los estratos más bajos les fue más difícil mantener ocupados a sus miembros, al punto de aparecer como las que absorben la totalidad de la caída del empleo durante el periodo 1993-1995. Así, las tasas de desempleo muestran un crecimiento para todos los sectores entre 1994 y 1995; sin embargo, su incidencia difiere significativamente en los sectores bajos (del 13,6 a 27,3%) (...) esto traerá consecuencias en las condiciones de vida y en un aumento

deudas bancarias (...). Grandes estudios contables recibieron urgentes pedidos de algunos clientes de maquillar su contabilidad con fuertes pinceladas de colorete rojo, que les permitiera acogerse al nuevo régimen (...) En la lista de quienes podían pagar pero recibieron el favor oficial figuran todos los nombres imaginables: Pérez Companc, Repsol, Telecom, Telefónica, Socma, Arcor, Coto, Aguas Argentinas, Siderar y Tecpetrol (de Techint), Pescarmona, Sideco, Acindar, CTI, las empresas editoras de los amistosos matutinos Clarín y La Nación, CTI, American Express, Iveco, Roche, AEC, Metrogas, Irsa, varias concesionarias de rutas y transportadoras de gas (...). Sus principales acreedores eran los bancos de la Nación de la provincia de Buenos Aires, y los privados Río, Galicia, Francés, del Lavoro, HSBC, Citi, Boston, ING, todos de capitales estadounidenses y europeos, salvo el Galicia” (*Página 12*, 9 de noviembre de 2001).

considerable de la pobreza, así como de las desigualdades en el acceso a bienes básicos como salud y educación” (Gordillo, 2010: 49).

Un comentario testimonial pareciera acercarse a la percepción post 2001: “Si vivís en Argentina te acostumbrás, sabés que el Apocalipsis puede ser mañana”.

Piqueteros

La desocupación se convirtió en Argentina en un fenómeno estable desde mediados de los '90 hasta 2004³⁰. El impacto de la falta de empleo generó como respuesta popular la movilización que en diferentes sectores del país adquirió identidad propia. Lo que comenzó como respuesta localizada y espontánea por parte de los trabajadores públicos y de empresas privatizadas se convirtió en poco tiempo en una forma de movilización con fuerte impacto y continuidad en el tiempo. *Puebladas, fogonazos y piquetes* fueron los medios utilizados para visibilizar la necesidad de inserción en el mercado del empleo bajo diversas formas.

“El desempleo y la precariedad acrecentaron la desigualdad. La pobreza y el desempleo combinados, en un contexto de debilidad institucional y ajuste económico, constituyeron un “círculo vicioso”, en tanto que en situaciones de marginalidad social se hace crecientemente difícil reinsertarse en el mercado de trabajo” (Dinerstein et, al, 2010: 21). Es así que uno de los modos que el gobierno encontró de incluir a los trabajadores desocupados, fue la creación de subsidios – avalados por los Organismos de Crédito Internacional- que tuvieran como contraprestación algún tipo de trabajo.

³⁰ En 2003, a pesar de un crecimiento del Producto Bruto Interno en 8 puntos, el desempleo abierto persistía. 1,3 millones de personas, sin contabilizar los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas se encontraban sin empleo formal. El trabajo informal se incrementó vertiginosamente como contrapartida. “A finales de 2004, había 5 millones de trabajadores sin derechos laborales ni seguridad social. Sumado a esto se había expandido el trabajo infantil, llegando a 1,5 millón de niños y niñas afectadas” (Dinerstein et, al, 2010: 42).

Los Planes *Trabajar* se comenzaron a distribuir de manera extendida en 1995 con auspicio del Banco Mundial. “La cantidad mensual promedio de prestaciones para desempleados pasaron de 28 mil en 1994 a casi 49 mil en 1995” (Ibid, 2010). Los planes Trabajar 1 y 2 tenían como finalidad involucrar a los trabajadores desocupados en proyectos de infraestructura comunitaria y a su vez, la exigencia de desarrollar una actividad de capacitación. A cambio, el Estado le otorgaba 200 pesos argentinos, cifra que fue evolucionando. La apuesta inicial era estrictamente focalizada, atendiendo a los sectores del país con mayor nivel de desocupación y, o, de conflictividad social. Durante el 2001 se lanzó el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, y al mismo tiempo se criminalizó la pobreza intensificándose la represión. “La estrategia del gobierno de Duhalde fue lanzar nuevos planes sociales que pudieran conformar a las organizaciones piqueteras y reprimir a aquellos que se resistieran a abandonar la lucha en la calle. Por ello, para las organizaciones que no aceptan o no se conforman con los planes sociales dispuestos por el gobierno aumenta la amenaza represiva” (Dinerstein et, al, 2010: 36).

“La situación de cada uno de nosotros es que no teníamos laburo y a partir de despidos masivos vimos que ahí podíamos organizarnos. Entonces empezamos a ir al barrio y a organizarnos de alguna forma sin tener mucha idea de que era el tema en torno a los desocupados invitando para sumarse a pelear para conseguir un laburo. Ahí empezamos discusiones con diferentes grupos, algunos no estaban de acuerdo con reclamar subsidios o con el tema de la entrega de alimentos, después ese grupo se rompió y quedamos nosotros haciendo la asamblea en los barrios por el tema de los subsidios y la mercadería para poder instalar comedores y copas de leche” (Gleyza, 16.10.10)

Por su parte, el manejo y control de los planes fue inicialmente llevado adelante por el Ministerio de Trabajo, luego sería desarrollado por el Ministerio de

Desarrollo Social quien multiplicó los planes y agregó mejores medidas de distribución involucrando ONGs, cooperativas, asociaciones para obtener derecho a una vivienda, asociaciones de vecinos, entre otras. En el 2000 el gobierno de De la Rúa transfirió la asignación de planes sociales de los municipios a las organizaciones de desocupados con el fin de desarticular las redes clientelares del menemismo y el duhaldismo –alas que se oponen dentro del justicialismo-. Esta medida sustituyó las antiguas prácticas clientelares por otros modos de negociación y acción política en los sectores empobrecidos potenciando las acciones reivindicativas ahora en disputa por recursos o subsidios. Los mecanismos de control, la dinámica de contraprestaciones, la fluidez en la entrega del dinero para los beneficiarios, colaboraron en tejer redes colectivas que más tarde cimentarían una estructura de movilización social.

Las prácticas como procesos de acumulación política

Como récord absoluto se calculaba que más de 7 millones de personas habían caído bajo la línea de pobreza entre octubre de 2001 y octubre de 2002. En octubre de 2001 la tasa de desempleo general alcanzó el 18,3% y entre los menores de 25 años era del 31,8%, un 39% de los jóvenes habían estado desempleados por más de seis meses y más de un millón de personas de entre 15 y 24 años no estudiaba ni trabajaba³¹. Este es el mapa social en que la crisis política y económica de 2001 estalla en Buenos Aires. “El 19 nosotros veíamos los quilombos, habíamos hecho movilizaciones por el aumento de las tarifas de Edesur y Edenor [empresas de electricidad privatizadas de la Ciudad de Buenos Aires]. Antes del 20 nosotros nos

³¹ Cifras del Informe “Diagnóstico de desempleo juvenil” de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Ministerio de Trabajo de la Nación, Buenos Aires, 2004. Disponible en: www.trabajo.gov.ar/left/biblioteca/files/estadisticas/diagnostico_%20desempleo.pdf

quejábamos por el aumento de las cosas, los alimentos y los servicios. Después había otro reclamo que era el de los ahorristas, que si devaluaban o no devaluaban, pero a nosotros en realidad nos afectaba la suba de los precios. En ese momento, desde que nos organizamos, siempre hemos pedido trabajo, el tema que se reclaman los subsidios porque en los noventa no había laburo y echaban gente, pero siempre fue el reclamo por puestos de trabajo. Incluso ahora que estamos participando en cooperativa lo que pedimos es pasar a planta permanente, para tener un laburo en blanco” (Gleyza, 16.10.10).

El Bloque Piquetero Nacional surge a partir de las asambleas piqueteras que se desarrollaron en el conurbano bonaerense, en La Matanza, previo al 19 y 20 de diciembre de 2001. El debate en torno de la acción piquetera contestataria se había masificado y los planes de acción tenían amplias repercusiones. Los sucesos que desencadenaron la crisis sistémica, no obstante, verían conjuntar los reclamos del sector piqueteros con los de la clase media cohesionando un reclamo compartido.

“Nosotros salimos desde Varela con un grupo de compañeros que habremos sido 200, 300 compañeros, y cuando íbamos en el tren empezamos a escuchar por la radio las noticias de que estaban reprimiendo (...) cuando llegamos a Constitución hacemos una asamblea y le decimos a los compañeros cuál era la situación y que los que querían volver que volvieran porque ya sabíamos que si íbamos iba a haber problemas entonces la mayoría se vuelve a Varela. Queda un grupo de 30, 40 compañeros que son los que después vamos a Plaza de Mayo. Allá llegamos con una columna por Diagonal Norte y (...) nos empiezan a tirar gases y se arma todo el revuelo y las corridas. Y después la gente retrocedía, avanzaba, retrocedía, avanzaba por la represión. En una de las corridas vemos en un bar que en la televisión nos enteramos que había habido un muerto, entonces ahí el quilombo se agudizó más. Y después (...) informan que De la Rúa se había ido” (Gleyza, 16.10.10) Desde sus

inicios las organizaciones piqueteras en general estuvieron orientadas a detener las consecuencias del desempleo masivo y la pobreza atendiendo a las necesidades más urgentes. No obstante, la evolución del trabajo de las organizaciones excedió esa tarea y reprodujeron diversas iniciativas de fomento al trabajo y a la educación. “A partir del 2001 lo que cambia son los reclamos y las formas de reclamar, hubo un tiempo en que no hacía falta realizar cortes o hacer una movilización porque teníamos a toda la clase media y gente que nos puteaba, que no quería saber nada, y por otro lado, el gobierno empezó a aflojar con algunos reclamos. Después se empezaron a dar cooperativas a todo el mundo, alimentos y varias cosas que se fueron flexibilizando” (Gleyza, 16.10.10).

La recomposición del tejido social post crisis es una de las principales deudas que la sociedad tiene con las organizaciones de desocupados, incluso, la resignificación de lo que el trabajo productivo significa es también atributo de estas prácticas. Comedores barriales, copas de leche –meriendas colectivas-, cooperativas y huertas comunitarias, cooperativa para la construcción de viviendas, campañas de educación popular, son sólo algunas de las iniciativas sociales encaradas. Con el tiempo, estos proyectos fueron en parte cubiertos por recursos públicos que con mucha dificultad son recuperados del gobierno de turno. El corte de ruta y la movilización siguen siendo las prácticas con que las que los participantes de la organización se valen para intervenir el campo político. La práctica ganó legitimidad con los años, sin embargo, la resistencia gubernamental sigue siendo la regla. Represión, coacción mediática, encarcelamiento y amenazas acompañan la práctica cotidiana de lucha de los trabajadores desocupados.

Ahora bien, la relación entre las organizaciones piqueteras y el gobierno no es estática sino que ha sido sujeto de transformación a partir de la pérdida de cohesión y cooptación de algunos dirigentes por parte del gobierno de Néstor Kirchner. En un

análisis que excede nuestra investigación pero que impacta en el presente del MTR, es posible afirmar que a través de la asistencia financiera directa a dirigentes de organizaciones piqueteras, a través de la creación de espacios institucionales para su participación directa, y a través de la asimilación de organizaciones piqueteras a Organizaciones No Gubernamentales, el gobierno ha tendido canales de incorporación a sectores antes contestatarios fragmentando la articulación del movimiento, acallando reclamos postergados y oficialmente criminalizando a las organizaciones de desocupados ideológicamente más radicales.

Quienes luchan

A lo largo de los años, el Movimiento Teresa Rodríguez fue extendiéndose. “Nuestro movimiento está asentado hasta aquí, en diversos lugares del país, entre ellos, además de Mar del Plata y Florencio Varela, Córdoba, La Matanza, Capital Federal, Lanús, San Martín, Avellaneda, La Plata, Berazategui y Merlo. A mediados del 2002, nos unimos con el movimiento Casa del Pueblo, ubicado principalmente en la Capital Federal. Con el devenir de la lucha y la situación política en nuestro país, a principios de 2003 el MTR sufre una nueva división, generándose a partir de ella las tres ramas, de las cuales dos mantienen el nombre: el MTR liderado por Roberto Martino, la UTP (Unión de Trabajadores Piqueteros) y el MTR que en este momento narra esta historia, que a los fines de nuestra lucha con el Estado por la obtención de nuestras reivindicaciones, nos diferenciamos como MTR “12 de abril” (Garrido, 2005). La práctica a la que las organizaciones piqueteras acuden sigue siendo el “piquete”, el corte de ruta, logrando la incomunicación de diversos puntos de la Capital y en algunas ocasiones, un porcentual desabastecimiento comercial. En el 2001 se produjeron ocupaciones, pero no refieren a saqueos. “El principal reclamo de nosotros era qué se vayan todos, que dejen el poder a otro que maneje

bien las cosas. Después de 2001 seguimos con las mismas actividades, nos escuchan un poco más, por lo menos, pero sigue la misma cosa” (Gno, 11.10.10)

El MTR tiene sus reuniones, sus cabildos, su mesa de delegados, una mesa directiva que está compuesta por dirigentes de Buenos Aires, del Chaco, de Santa Fe y de Neuquén. Más allá de los sucesos conocidos, los militantes del MTR se autoproclaman autónomos, ajenos a la política partidaria. Existe una franca desconfianza a los partidos políticos pero sobre todo, a las formas tradicionales de entender el poder y por tanto, las formas de realización política. “Los planes sociales se arrancaron al Gobierno en las luchas, exigiendo que llegaran a los que los necesitábamos e impidiendo que terminaran en manos de policías, funcionarios, y muchos personajes del sistema que se aprovecharon de la necesidad del pueblo. Nosotros no los manejamos, sino que lo hace el Ministerio de Trabajo y los paga el banco. Nosotros simplemente exigimos que se entreguen a los que los necesitan, y dentro de ellos a los que estamos dispuestos a luchar por eso. Desde ya que mucha gente se acerca a nuestra organización con el objetivo de ganar un plan de trabajo. Nosotros les decimos a los compañeros que se acercan que no podemos prometer nada, porque no tenemos nada para repartir. Sólo les podemos ofrecer un puesto de lucha para pelear entre todos por lo que necesitamos” (Ibid, 2005).

Hacia 2004, el MTR tomó las instalaciones de una antigua fábrica de clavos y montó una pequeña empresa. Construyeron ahí una panadería, un comedor, una guardería y una fábrica textil para la confección de guardapolvos. El emprendimiento sostenía el trabajo formal de al menos diez trabajadores a tiempo completo. En 2009, el emprendimiento fue destrozado y saqueado por fuerzas policiales. El desmantelamiento según los que estuvieron presentes obedeció a la orden de represión de manera de “frenar el ánimo de lucha”. “Vinieron y me llevaron del depósito. Ahí me llamaron, qué estaban allanando. Yo abrí la puerta,

buscaban armas, me preguntaban dónde estaba la mercadería (...) y no encontraban más que comida porque yo en ese aspecto te digo, no somos de armas ni nada ni nos metemos en cosas grandes así” (Gezy, 10.10.10).

Los trabajadores que actualmente militan en el Movimiento acudieron en búsqueda de una solución inmediata hacia fines de los años '90 y en torno de la crisis de 2001, en su mayoría tienen trayectorias vinculadas a trabajos temporales, vulnerables a los movimientos en el mercado de trabajo. “Tengo 70 años, antes era albañil. Yo participo hace 13 años principalmente me metí cuando estaba Menem de Presidente. Yo cumplía 47, 48 años. Antes, directamente para los que tenían 45 años en adelante, no había más trabajo. Y en aquel momento salí a la calle y buscaba formas donde solventar la situación mía y me fui en una reunión y encontré esto, que me orientaba y me decía ‘vení vamos a ver si te conseguimos algo’ (...) Cuando iniciamos, no teníamos nada, hacíamos rifas, juntábamos gente” (Gezy, 10.10.10). En otros casos, los militantes son de origen extranjero, asentados en zonas periféricas a la Capital sujetos a las temporadas de demanda laboral. “Mi rol es estar en el depósito. Busco mercadería en el depósito de La Plata, en el Ministerio, y lo repartimos en los comedores de Florencio Varela. Soy paraguayo pero desde que vine en el '62 estoy acá. Y vine en busca de algo mejor (...) en aquella época era jodido con Stroessner y toda mi vida acá trabajé en la construcción” (Gno, 11.10.10). Otros ven atravesar el paso del tiempo por una historia de migración que se vincula con trayectorias concatenadas a la búsqueda de un mejor espacio en el que vivir. “Mis padres son chilenos, después cuando fue el golpe se vinieron en el '75 para acá. Allá militaban en el MIR, mi papá, mi mamá militaba en el PC y en un principio les costó bastante encontrar trabajo porque después está el conflicto con Chile y al ser ellos chilenos sufrieron la discriminación, pero los primeros fueron difíciles, mi viejo tenía changas, después empezó a ir mejor” (Gleyza, 16.10.10). Lo cierto es que

su lucha generó una cohesión de una fracción de clase desfavorecida que sólo sería visible en diciembre de 2001.

El cambio de eje: la cristalización de un proyecto

Con posterioridad a los sucesos de diciembre de 2001 en Argentina, el Movimiento Teresa Rodríguez comenzó a plantear reclamos que excedían los planes sociales vinculados al trabajo. La concatenación de demandas y la efectividad de la potencia destituyente le otorgaron las herramientas para un cambio de estrategia política y a la vez, de discurso. El planteo reivindicativo se trasladó a la puja por la garantía de derechos asociados a las libertades democráticas. Como se evidencia en las trayectorias, “nosotros ya no queremos alimentos o planes, queremos que los subsidios del gobierno sean un derecho universal” (Lola, 17.10.10).

No obstante, las condiciones alcanzadas anteriormente continúan siendo recursos en arena de disputa. “Y ahora vuelve a cambiar la situación porque tenés que volver a reclamar los cortes porque la situación es otra. Ahora hay muchas cosas que tratan de ir sacándonos. Empezaron con las organizaciones más chicas y ahora están viendo a las organizaciones un poquito más grandes. Por ejemplo, subsidios que nosotros teníamos, planes sociales, nos han ido sacando, han dado de baja a los compañeros, el ingreso a las cooperativas ha tenido que ser por medio de grandes luchas porque las cooperativas eran sólo para los punteros políticos, para gente del PJ [Partido Justicialista] que antes se daban como si nada, vos las armabas, llevabas y te la daban. Ahora no” (Gleyza, 16.10.10). Hacia el año 2008 efectivamente los subsidios del Estado sufrieron cortes reiterados. No sólo disminuyeron en términos de cobertura sino que transformaron el objetivo. Un ejemplo de este derrotero es el Plan “Argentina trabaja”. Si bien la conformación de cooperativas debería ser el

paso previo para el otorgamiento de actividades productivas, en algunos casos la finalidad se diferencia. “La mayoría de las cooperativas no son productivas, ese es uno de los reclamos de la mayoría de las organizaciones (...). Nosotros limpiamos la calle y en teoría te tendrían al menos que dar las bolsas y pasar un camión para levantar la basura, no te dan bolsas y el camión pasa una vez cada tanto y los vecinos te tiran la bronca” (Lola, 17.10.10) Aún así, la organización continúa cotidianamente acorde a los objetivos fundantes. Al momento, cuentan con seis comedores y copas de leche que ofrecen merienda en el barrio a todo aquel que se acerque. Parte de los alimentos que se ofrecen son otorgados por el gobierno, parte –los productos frescos- son colectados por los participantes del MTR. “Las señoras que trabajan en los comedores lo hacen como contraprestación al plan que reciben, que es el bonaerense de 150 pesos por mes y el otro es de 200 o 300 meses, depende del plan” (Gleyza, 16.10.10)

La lucha por la entrega de alimento persiste, contra los desalojos y la represión, también. “Nosotros fuimos reprimidos por Menem, por Duhalde, por los Kirchner... fuerte fue en julio del 2009 que quisimos instalar una carpa en plaza de mayo, ahí tuvimos dos compañeros presos y varios heridos” (Gleyza, 16.10.10). La lucha por el cambio social es la lucha más amplia del movimiento. “Ahora luchamos por cosas parciales hasta eso. No podés hablar de cambio social si el compañero te dice: ‘está bien, pero yo ahora no tengo para comer, no tengo trabajo’, entonces, mientras nos vamos organizando para ese cambio social, vayamos obteniendo mejoras, arrancando al gobierno de turno porque hasta ahora ninguno cumplió con dar trabajo a todo el mundo” (Lola, 17.10.10). La conciencia de lo que su acción es capaz de lograr se muestra con claridad. El proceso de acumulación política continúa y en parte, el análisis que encausan sus propios dirigentes, les permite ser consecuentes con la capacidad adquirida. “Y después de De la Rúa sabemos que

podemos hacer lo mismo con otro que está en el poder, en ese camino vamos. Qué si vamos a seguir participando en la lucha? Y qué vamos a hacer, otra no nos queda” (Gezy, 10.10.10).

El futuro anticipado en el presente: las expectativas

¿Qué experiencias, valores y elecciones ponderan quienes participan movilizándose? ¿De qué modo en el proyecto de cada Organización el futuro se anticipa al presente como expectativa? El camino de la organización política en clave colectiva enseña que la construcción de capacidad destituyente es resultado de un proceso de acumulación política arduo e históricamente definido. En el camino, en la calle, en la fábrica, en la institución, en la salita, en el local, en la sede, en el ayllu, en la universidad, la emancipación se logra a través de la intersubjetividad.

Desde un espacio que explota la práctica académica, Raquel Gutiérrez afirma en “los ritmos del Pachakuti” que existen tiempos espasmódicos de rebelión en la historia de nuestros pueblos. Luego de desarrollar los momentos neurálgicos que la lucha del pueblo boliviano alcanza a lo largo del último siglo afirma que la “emancipación es el proceso de transformación social a lo largo del cual una porción de la sociedad recupera su posibilidad de decidir de manera no delegativa sobre los asuntos públicos y donde paulatinamente se inhibe el predominio del valor sobre las personas generalizándose otro modo de relación social que descansa en el despliegue del valor de uso de las cosas, a partir de su reapropiación por las personas libremente asociadas para sus fines autónomos” (Gutiérrez Aguilar, 2008: 23). Esto implica una valoración de los propios actos que se involucran en dinámicas colectivas que a su vez generan una transformación en la subjetivación de la propia realidad.

La emancipación no implica entonces para nuestros protagonistas, actores de la realidad social, un cambio de estado de cosas existentes “afuera”, en la correlación de fuerzas, sino antes y de manera coherente, en un cambio en el modo de concebir dicha realidad, de insertarse en ella y actuar para transformarla. Hacemos referencia a un paso previo, a una sucesión de hechos que decantan en el propio sujeto conduciendo a su propia transformación como emergente de la praxis política colectiva. La liberación es ante todo subjetiva. Ahí situamos la emancipación.

Movimiento interior y programa alternativo

El recuento de los sucesos, las percepciones y las prácticas de quienes se movilizan permite leer en acción, una agenda de reclamos, un programa que guía las luchas. Si las crisis abren la oportunidad de que los sujetos se identifiquen en confrontación con otros sectores sociales, si permite que avancen en un proceso de acumulación política, de incremento de capacidades que antes no les eran visibles, entonces, cada acontecimiento crítico de disputa esclarece las líneas que les otorgan sentido colectivo.

En el caso boliviano, el programa de las organizaciones que se movilizan tenía cinco ejes vertebradores: nacionalización del gas, industrialización, soberanía nacional, respeto a los derechos comunitarios y creación de una asamblea constituyente. Este programa se creó localmente, aglutinando los reclamos de los sectores populares al que se sumarían luego sectores medios. En el caso de Ecuador, la agenda estaba dada por el fortalecimiento institucional, por una formalización de la política que le otorgue sentido de largo plazo a las decisiones encaradas, esta demanda incorporaba el rechazo a las prácticas oligárquicas clientelares –propias

del modo de hacer política del presidente Noboa-. El cuestionamiento a la corrupción, al clientelismo y a la “huachafería” eran parte de este programa que luego asumiría como propio también el pedido de conformar una asamblea constituyente como acto magnificante para la refundación de las relaciones que se condensan formalmente en el Estado. En el caso argentino, el programa del movimiento adquiere otra configuración. Por un lado, la acción organizativa de los colectivos excede al Estado como contraparte (la recuperación de fábricas, las asambleas barriales, las ollas populares, imponen una agenda local diferenciada), por otro lado, la definición de agenda fue más compleja debido a la composición social heterogénea de la movilización. El programa del movimiento se dividió en aquellos sectores que pugnaban por el fin a la corrupción, por la generación de empleo genuino, y por darle sentido ético al quehacer político, y, aquellos otros sectores populares que reclamaban oportunidades mínimas de inclusión social, planes de empleo, formas novedosas de participación. Este pedido aglomerado en el famoso “que se vayan todos” cristalizó en la destitución la necesidad de renovación fundacional del Estado. Ahora bien, no puede desconocerse que el grado de radicalidad de cada programa obedece al elemento catalizador por excelencia, que son las crisis económicas, poniendo en evidencia la fragilidad de la hegemonía alcanzada por estos gobiernos en el escenario neoliberal. Pues, a todas luces cada programa manifiesta ser emergente de las políticas de despojo de los últimos cuarenta años.

El compromiso con cada programa establecido ocurre como condición que se va consolidando vez a vez en cada momento de confrontación, situación de intersubjetividad crucial. La creación de un programa propio implica considerar la fuerza que se tiene en la correlación de fuerzas del momento, la acumulación política producto de la experiencia de lucha, el modo en que se resuelven los

problemas. El alcance de las definiciones entonces, se cristaliza en esa instancia. Claro que el neoliberalismo no es sólo un conjunto de políticas económicas, es también expresión de la vocación de transnacionalizar el Estado. Es así que se rompe el vínculo con la sociedad civil en tanto el Estado se vuelve sujeto a decisiones políticas para el favorecimiento de intereses vinculados a empresas y agentes internacionales. De este modo ocurre un extrañamiento de la sociedad civil que se escinde de la sociedad política ya que el Estado impone una agenda ajena a quien le otorgó legitimidad fundante. La definición de cada agenda tiene como factor común compartido el reclamo por más y mejor representación.

Cuando se hace referencia al *rechazo de los modos de representación vigente* no se está más que atendiendo al reclamo de transformar ese vínculo frágil cuasi alienado en una nueva relación que otorgue a la sociedad su rol político. En tanto la sociedad tiene certezas de aquello que propugna, sabe cómo resolver sus problemas, se contrapone a la agenda de la gobernabilidad democrática. El enfrentamiento a las políticas neoliberales constituye la primera reacción, luego, la recuperación de la ciudadanía va moldeando nuevas aspiraciones en un horizonte interior que pugna por un programa que supere la crisis hegemónica. De este modo, sólo con mayores procesos de acumulación política, con los sectores populares organizados expresándose como *masa*, será posible la conformación de estructuras de rebelión capaces de fortalecer sus programas locales llevándolos al ámbito nacional, excediendo el acto destituyente. Las masas pues, pierden en la crisis su carácter de clase y expresan allí inclinaciones generales, comunes a toda la sociedad. Una vez más, las masas se afirman en la acción. El acto destituyente es sólo un momento de un proceso de expresión proyectiva de mayor alcance.

La Memoria Larga de las luchas y su confrontación con el Presente

Capítulo 4

El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer.
No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la
eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo.
Quien se aleja de su casa ya ha vuelto.
Nuestra vida es la senda futura y recorrida.
Nada nos dice adiós. Nada nos deja. No te rindas.
La ergástula es oscura, la firme trama es de incesante
hierro, pero en algún recodo de tu encierro
puede haber un descuido, una hendidura.
El camino es fatal como la flecha
pero en las grietas está Dios, que acecha.

Jorge Luis Borges, 1978

Prólogo a la versión castellana del *I-Ching*

Los movimientos sociales se construyen en una doble temporalidad. Ocurren tiempos de exposición y oportunidad para la acumulación política en que las organizaciones sociales en vinculación con otros actores del campo social se presentan en disputa por recursos ya sean materiales o simbólicos, y ocurre un otro tiempo, que no es de repliegue sino de construcción interna, silenciosa, de escucha, debate y sistematización, de arraigo al territorio, de regeneración de redes de solidaridad colectiva, de renovación de rebeldías, de construcción de nuevos objetivos colectivos. A este último tiempo, que puede ser concomitante o no con el anterior, lo denominamos “movimiento dentro del movimiento” y es la fase más importante para comprender el *horizonte interior* de un movimiento social.

Como hemos intentado evidenciar, la expresión de reclamos, la movilización, la creatividad de la lucha popular no se construye sobre bases espontáneas. Existe en cada forma particular de protesta, en la manifestación colectiva de voluntad de

cambio, en las prácticas cristalizadas en un particular *habitus de clase*, una historia concatenada, una cristalización de elementos que la memoria condensa. Quienes participan de episodios contestatarios tienen memoria histórica no importa su formación u origen de clase. En variadas ocasiones, la memoria alberga deseos de pervivir aquello que se conoció como el “momento” donde era posible vivir conforme. El deseo de vivir una situación diferente de la actual entonces, estaría condicionado por aquello conocido, por una estructura que antecede el momento político presente.

Marx afirmaba que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su exilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal” (Marx, 1852) En ese sentido, la memoria también opera como *corset* de la gestación de posibilidades alternativas.

Como veremos, “lo político cambia la forma de lo social” en ese sentido es que operan soportes históricos que se denominan *estructuras de rebelión* (Tapia, 2008). Esta idea proviene de Zavaleta y contiene algunos elementos interesantes: “Las formas de dominación a veces enfrentan coyunturas de contestación colectiva a través de formas de movilización que desbordan las instituciones y los espacios políticos reconocidos en la normalidad de las relaciones de poder que articulan al Estado. Las rebeliones son procesos de movilización política que instauran una crisis

política estatal en tanto cancelan de manera general o parcial la autoridad de las leyes y el gobierno, a partir de una fuerza resistente que a veces se proyecta como base de otra forma de gobierno y de sistema de autoridades” (Tapia, 2008: 69). En ese sentido las rebeliones serían tiempos de crisis, coyunturas o tiempos de aceleración y condensación del tiempo político, de incertidumbres y de cambio social, de novedad en la Historia.

“Mañana es el presente de mañana. Pero lo presente de mañana tiene un futuro diferente del futuro de nuestro presente. Cada presente tiene su propio futuro y el presente futuro es algo, que en el mejor de los casos podemos condicionar. Cada generación hace su presente. Viendo su presente, tiene su propio futuro y su propio pasado. Como cada presente tiene su propia historia, también tiene su propio pasado. Al cambiar con el presente el futuro, cambia igualmente el pasado. No solamente cada generación escribe su propia historia, tiene también su propio pasado (...) en la historia no hay hechos desnudos. La historia es el paso de un presente hacia otro presente por venir. Por eso no hay ningún futuro definitivo, el futuro nunca es” (Hinkelammert, 2009).

A lo largo del presente capítulo proponemos indagar en las razones de la “memoria larga” de los pueblos que participaron en las destituciones presidenciales realizando un puente que permita leer esta dimensión de las estructuras de rebelión que se conforman en las últimas décadas en Bolivia, Ecuador y Argentina. Luego de haber indagado en las condiciones y razones externas en que los movimientos sociales se desplegaron construyendo capacidad destituyente, habiendo pasado por la construcción teórica de los casos empíricos que trabajamos, y habiendo escudriñado el horizonte interior de la movilización social, nos proponemos analizar los fragmentos que la memoria condensa expresando voliciones de un proyecto alternativo. Con esta consideración sobre los elementos de la memoria larga en

términos de dominación pero también en *términos de rebelión*, apostamos a tejer una trama que incorpore los sucesos que, vivos en la memoria de quienes participaron en las movilizaciones, son evocados como ánimo de lucha.

Dividimos entonces este último capítulo en tres partes, por un lado, nos abocamos al análisis de la memoria larga en relación a los procesos políticos vinculados a lo que llamaremos “estructura hegemónica” en Bolivia, Ecuador y Argentina, en segundo lugar, abordamos brevemente la memoria larga de las luchas que se cristalizan en un imaginario de las confrontaciones presentes. En tercer lugar, colocamos al Estado y sus relaciones de dominación como objeto de análisis de modo de ver hasta qué punto la fortaleza de “lo destituyente” se enlaza con la debilidad hegemónica de “lo destituido”. Esto implica un esfuerzo de comparación y de escisión de variables elementales que den cuenta de la peculiaridad de los modos de ejercicio del poder desde arriba en América Latina.

Claro que la apuesta nos coloca en el debate sobre la temporalidad de los sucesos sociales desde el punto de vista del alcance de las transformaciones y las expectativas que allí se juegan, sobre el tiempo real y el subjetivo, sobre éste y un otro tiempo. García Canclini afirmaba hace dos décadas que la cultura latinoamericana, antes de ser una que no acaba de modernizarse, es aquella en la que concurren “temporalidades múltiples” que han desarrollado su propia dinámica de interrelación (García Canclini, 1992). En ese sentido, resulta fundamental poner en el centro de la discusión las relaciones y tensiones que se producen en ese marco signado por la heterogeneidad. Adelantándonos pues, consideramos que la apuesta por indagar en la multitemporalidad nos permitirá comprender el *piso de fondo* de procesos que tal vez, sólo en apariencia resulten novedosos.

El movimiento dentro del movimiento

Es posible reconocer en los testimonios de quienes se movilizaron en los sucesos críticos trabajados, numerosas referencias -frases que bifurcan el relato o comentarios de aparente escasa significación- a la trama de pensamiento que construye la memoria. Estas ideas no veladas pero tampoco voluntariamente explicitadas encubren una noción profunda de aquello que se defiende y a su vez, aquello que no se está dispuesto a permitir. Para llegar a esta aproximación, la metodología es minuciosa, la reconstrucción del dato, del relato, es casi infinitesimal e implica escudriñar comentarios aislados, frases no acabadas, recuerdos sólo enumerados, por eso pareciera fácil dejarse engañar sobrevalorando algunos aspectos y diluyendo otros. Con esta recuperación no pretendemos indagar en la argumentación inconsciente sino por el contrario recuperar ideas -a veces incluso intergeneracionales- que si bien nunca se pretendió explicitar a lo largo del relato de la entrevista sino sólo dejar acontecer, suman a la lectura de los movimientos sociales razones profundas.

Minas y revolución

En el caso de Bolivia, la mención de aquel tiempo en que “no faltaba nada”, en que se tenía “orgullo de ser boliviano” remite a tiempos lejanos. Escudriñando en los términos utilizados, en las evocaciones de diversos relatos de los habitantes del Alto, aparecen algunas referencias aisladas al trabajo ligado a los “hornos de fundición”. Pues, la mención de los hornos remite al tiempo en que se consideraba que los minerales extraídos de las minas podrían ser, a través del proceso de procesamiento, industrializados. La promesa de los hornos es la promesa de logro

de una fase posterior a la mera extracción de los minerales, que pervive en la memoria de un futuro promisorio.

En Bolivia, la mina es el centro de las dinámicas asociadas a la economía productiva para las clases populares. Desde tiempos de la colonia, hacia mediados del 1500 con el descubrimiento de las minas de Potosí, se consolidó un proceso de acumulación del capital que incorporó a través de la extracción de plata el trabajo de los indígenas –adultos y niños-. No sólo el comercio de los metales favorecía a la metrópoli española sino que en Bolivia también se conformó una clase burguesa cohesionada detrás de los intereses extractivistas. Si bien a los pies del cerro de Potosí en el siglo XVII se formó una de las ciudades más ricas del continente, siendo considerada centro económico incluso de regiones como Chile y Argentina, la ostentación de aquella época pervive con diferente significación en prácticas que sólo en pequeña medida se fueron modificando. Asimismo, la “hacienda” era la unidad productiva central del orden oligárquico. “Pongueaje” era el nombre uno de los variados tipos de relación servil mediante la cual el dueño de la hacienda, *por derecho*, controlaba al trabajador indígena.

Ahora bien, la mina no sólo es referida en torno de los hornos de fundición, sino también como espacio de interrelación crucial en torno a un trabajo digno. Alrededor de la actividad minera hay una miríada de relaciones sociales que se entretajan. Lo obrero y lo indígena se unen, la forma sindicato asume la transformación del campesino. La superexplotación del trabajador, que al menos 12 horas del día se encuentra dentro de la mina, en las profundidades, siempre susceptible de ser fagocitado, en condiciones insalubres, con la hoja de coca como soporte alimenticio. Los niños, que por su condición corporal no sólo cuentan con mayor tolerancia para el trabajo prolongado sino que además logran llegar a espacios en que cuerpos grandes no caben. Las mujeres, que “fian”, reciben el

dinero de pago y lo administran, ellas son quienes fuera de la mina recrean el espacio comunitario –pulperías mineras- donde comida, intercambio y política se entremezclan. Y del otro lado los patrones, quienes reciben el beneficio de lo producido entregando como contrapartida el porcentaje destinado a cada tipo y peso de metal salvado.

La estructura social que se consolida con los años obedece a esa dinámica productiva. Las clases oligárquicas que comandaron procesos de modernización en Bolivia siguieron este ciclo extractivo. Propietarios de minas como los Patiño, Hochschild y Aramayo entre otros militares y políticos, ejercieron el poder político controlando a su vez la extirpación de estaño. Y esta referencia se suma a otras que operan en la memoria. Minas, recursos y guerra son conceptos que se entrecruzan configurando percepciones. Y resultan numerosas las referencias que se desprenden de la apropiación de recursos, no sólo a nivel interno sino también en relación a potencias extranjeras que en diversos puntos de la historia desmembraron el país sembrando una intensa discordia aún presente de la memoria larga de los bolivianos. Sólo basta recordar que el interés de Inglaterra por el salitre de Antofagasta desencadenó la Guerra del Pacífico que duró hasta 1883. Yendo un poco más lejos en el tiempo, la inolvidable guerra del Chaco que se sostuvo desde 1932 hasta 1935, es parte de este interés desmedido que enfrentó a Paraguay con su vecina Bolivia. Paso a paso, saqueo por saqueo, a la par que Bolivia perdía recursos, más de la mitad del territorio chaqueño y la siempre dolorosa salida al mar, en la memoria la percepción de engaño y despojo se irían transformando en una super-lógica desconfianza al extranjero. “La guerra que nos dejó sin mar es algo que duele hasta hoy. Duele, grave duele. Por eso la noticia de la salida del gas por Chile nos tocó aquí, y eso no se perdona” (Diana, 4.9.10).

Claro que procesos de despojo tienen como contracara procesos de construcción de revigorización de valores nacionales. El sentimiento de pertenencia a la propia tierra, que excede toda filiación con el suelo solamente, reconoce un espíritu de rebelión arraigado³². Recuperando el argumento inicial, podríamos afirmar que hay dos momentos históricos que marcan la realidad boliviana. Uno es la guerra del Chaco, donde la evocación a las batallas revela un momento e intersubjetividad crucial. Y en segundo lugar, la revolución de 1952, momento en que la sociedad boliviana es liderada por la clase obrera alcanzando uno de los mayores grados de autodeterminación. Las minas, soporte económico defendido por sus trabajadores, fueron nacionalizadas en dicha oportunidad. Esta fue una victoria popular a la que se llegó por medio de luchas concatenadas. La reforma agraria y el voto universal fueron también parte del “triumfo” de la revolución³³.

René Zavaleta trabaja en su obra estos dos momentos históricos y asume que “la crisis no sólo revela lo que hay de nacional en Bolivia sino que es en sí misma un acto nacionalizador: los tiempos diversos se alteran con su irrupción. Tú perteneces a un modo de producción y yo a otro pero ni tú ni yo somos los mismos después de

³² “No es lo mismo ser hijos estatales e ideológicos del espacio, como los andinos, que el tener avidez por un territorio no referido a la propia identidad que, para ser algo poderoso, debe ser la consecuencia de una identidad previamente existente” (Zavaleta, 2008 [1986]: 33)

³³ “La dirigencia de la revolución oligárquica y antiimperialista de 1952 en Bolivia debió apelar al apoyo de los campesinos indígenas quechuas y aymaras en los valles y en el altiplano, como fuerza de masas necesarias para que las elites mestizas progresistas pudieran derrotar a la oligarquía minera y terrateniente. Para ganar a las masas indias e incorporarlas como su base social al lado del proletariado minero, establecieron el voto universal, nacionalizaron las minas y diseñaron una reforma agraria que además de la ineludible satisfacción de la demandas de tierras, les permitiera subordinar clientelarmente a las masas campesinas quechuas y aymaras. Para ello impusieron a las comunidades indígenas la forma de organización sindical, como instrumento del reparto de la tierra y comercialización de la producción y mecanismo de control vertical” (Zavaleta, 1983 y Rivera, 1983 y 1996 en Escárzaga, 2004) Aún cuando los sindicatos campesinos sirvieron como mecanismo clientelar para el control vertical del campesinado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), “el periodo de imposición de usos ajenos y de identidades distintas a las suyas, no resultó un periodo de destrucción cultural y pérdida de autonomía como en otros países, sino uno de acumulación y preparación para su reconstitución autónoma (...) Bolivia ha vivido procesos políticos que han contribuido a consolidar sujetos étnicos que asumieron tempranamente -tal vez nunca lo perdieron- la conciencia de su enorme fuerza social y potencial político en tanto mayoría” (Escárzaga, 2004: 4)

la batalla de Nanawa. Tal es el principio de intersubjetividad” (Zavaleta, 1979: 19). En relación a la revolución del '52, una síntesis acabada de su pensamiento lo condujo a considerar que “la historia del estado de 1952 es la historia de las mutilaciones a la autodeterminación popular aunque es verdad que el momento más alto de toda la autodeterminación del país es el momento constitutivo del estado” (Zavaleta, 1979: 43). Pues, la historia daría vueltas y la remembranza de los tiempos del trabajo en la mina, del trabajo digno, del esfuerzo que constituyó formas familiares singulares, arraigadas al territorio, encuentran su crisis con el proceso de privatizaciones propio del gobierno de Víctor Paz Estenssoro primero y del militar Banzer.

“El cierre de la minería estatal en 1985 fue el punto central del ajuste neoliberal que llevó al desempleo a 30 mil mineros y empleados públicos” (Kruse, 2000 en Escárzaga, 2004: 9). Lo cierto es que la relocalización minera dejó multitud de trabajadores desocupados que tuvieron que migrar para conseguir mejores condiciones de vida para sus familias. El Alto es resultado de ese movimiento migratorio, la importante cantidad de obreros que llegan al Chapare a trabajar en el cultivo de coca, también. “Los campamentos se convertían en ‘pueblos fantasmas’, los parajes mineros quedaban abandonados y los ‘Tíos’ de las minas desolados. Ciudades capitales, El Alto, pueblos como Tupiza y localidades rurales como el Chapare y Los Yungas, veían llegar cientos de familias mineras que buscaban un nuevo espacio donde vivir (...) la memoria minera iba a desplegarse en los nuevos espacios que los trabajadores, ahora convertidos en cocaleros, taxistas, albañiles, pequeños comerciantes, ocuparían a lo largo y ancho del país” (Cajías de la Vega, 2006: 39).

Es así que los factores a los que hacemos referencia cuando recuperamos la memoria larga de los bolivianos: Estado del '52, clase obrera, campesinado, sistema

de organización sindical, vida en la mina, gobierno de Banzer, composición abigarrada, movilización urbana, defensa de la democracia representativa, se implican mutuamente. Siguiendo esta lógica, “si se dice que Bolivia es una formación social abigarrada es porque en ella no sólo se han superpuesto las épocas económicas (las de uso taxonómico común) sin combinarse demasiado, como si el feudalismo perteneciera a una cultura y el capitalismo a otra y ocurrieran sin embargo en el mismo escenario o como si hubiera un país en el feudalismo y otro en el capitalismo, superpuestos y no combinados sino en poco. Tenemos, por ejemplo, un estrato, el neurálgico, que es el que proviene de la construcción de la agricultura andina o sea de la formación del espacio; tenemos por otra parte (...) el que resulta del epicentro potosino, que es el mayor caso de descampesinización colonial; verdaderas densidades temporales mezcladas no obstante sólo entre sí del modo más variado, sino que también con el particularismo de cada región porque aquí cada valle es una patria, es un compuesto en el que cada pueblo viste, canta, come y produce de un modo particular y hablan lenguas y acentos diferentes son que unos y otros puedan llamarse por un instante la lengua universal de todos” (Zavaleta, 1979: 17).

Actualmente, desde una óptica que se transformó en conceptos y contenidos desde la Presidencia del indígena Evo Morales, la defensa de la democracia parece capturar y englobar sin mucha claridad algunos de estos procesos. Probablemente, los bolivianos acepten esta formal democracia porque se sienten hacedores de su configuración, porque la conciben como cristalización de sucesivas luchas encaradas por ellos mismos. La memoria de los entrevistados de El Alto se anida en un tiempo que antecede la embestida neoliberal. En las luchas de los noventa, en el 2000, en el 2003 y en el 2005, en el tiempo corto, se reclama por un lado la presencia de un Estado con empresas propias que garantice de trabajo, y por otro, se exige que la

nacionalización de hidrocarburos se realice con la industrialización como objetivo. La historia ha enseñado que “más Estado” e “industrialización” en el presente, son claves persistentes para la percepción de bienestar social de los bolivianos. Si la memoria larga del movimiento campesino e indígena en Bolivia acumula desde tiempos coloniales varias muestras de su poder de autodeterminación, a partir del ‘52 la memoria corta incorpora a la democracia a su intersubjetividad originaria³⁴ (Zavaleta, 1979).

La democracia representativa, instrumento de la burguesía y chaleco de contención cuasi anacrónico de la permanencia de relaciones coloniales en Bolivia, se convirtió en bandera de las masas populares bolivianas. Esa contradicción insuperable permea la realidad hasta nuestros días. La crisis abre la reflexión e invita a evadir lo supuestamente conocido sin ignorar lo que sucede.

Los pactos democrático-militares

En el caso de Ecuador, los vestigios que *la memoria de los procesos dominantes* recupera se asocian a la fuerte presencia de los militares. Referencias a “los beneficios que generan para los sectores más humildes”, para “el afianzamiento de las libertades políticas” y a la “custodia de la democracia”, se encuentran en muchos de los testimonios de los ecuatorianos entrevistados en Quito.

³⁴ La dictadura militar encabezada por Hugo Bánzer (1971-1978) fue matizada por un conflictivo periodo de transición a la democracia: amago de apertura democrática con restricciones políticas (1977), huelga de hambre de mujeres mineras (hacia fines de 1977), éxito de la huelga y elecciones anuladas por fraude (en 1978); poco después se sucedió un golpe de Estado, el gobierno del general Juan Pereda Asbún, también interrumpido, seguido por el militar David Padilla Arancibia. En 1978 por falta de mayoría el congreso se elige presidente interino a Walter Guevara Arze, hasta que Alberto Natusch Busch con el apoyo del MNR interrumpe con un nuevo golpe de estado. Esta inestabilidad continúa hasta 1979. La obra de Zavaleta se detiene en analizar la resistencia popular a Natusch Busch. En esta oportunidad, por primera vez René Zavaleta evidencia la colocación del tema de la democracia en la voz del pueblo (Antezana, 2009).

La presencia de militares nacionalistas en Ecuador genera una adhesión que sólo puede explicarse comprendiendo la transformación que la sociedad ecuatoriana tuvo de la mano de José María Velasco Ibarra a mediados de la década de los '40. En términos de aspiraciones populares, el gobierno militar asumió un periodo de transición a la democracia que, plagado de ambivalencias, encausó una oleada anti-oligárquica. La figura de Velasco logró encausar esperanzas de sectores sociales emergentes y excluidos tanto en la costa como en la sierra. Aún cuando su presencia no creó bases institucionales, un proceso de industrialización o acuerdos de larga data histórica, como los casos de Perón en Argentina o Vargas en Brasil, su presencia es insoslayable de las evocaciones sobre aquel *pasado mejor*.

Velasco realizó la “prolongación exitosa y estable hacia el Estado de los mecanismos clientelares y paternalistas surgidos en las haciendas serranas (...) creando un Estado transformista” (Ospina, 2005b: 83), en ese sentido, desmanteló la complejidad de las relaciones de poder oligárquicas creando un Estado moderno basado en relaciones clientelares propias, de las haciendas pre-capitalistas. “Cuando la modernización tendió a debilitar los marcos locales del gamonalismo, a favorecer las migraciones constantes, a desligar la dominación de su extremo localismo de antaño; los aparatos burocráticos del Estado retomaron las prácticas usuales de un pasado familiar para reconvertirlas en lealtades políticas nuevas de caudillos diferentes” (Ibid, 2005b). Si bien esta estructura de acuerdos políticos cívico-militares para el ejercicio del poder encuentra un rechazo explícito –asociado al temor- por parte de los sectores medios, esto no es así para las clases acomodadas y los sectores populares. El liderazgo carismático militar continúa teniendo desde mediados de siglo características tentadoras que se reproducen y evolucionan en nuevas características. El autoritarismo encuentra allí también cabida ya que prácticas populares y mando militar se mixturán. En ese sentido, la presidencia de

Lucio Gutiérrez comprendió la situación y desarrolló en condición de posibilidad un intento de imitación de aquellos modos de hacer política (también en términos de sostenimiento de redes clientelares para el involucramiento de los sectores populares). Un Presidente nacionalista militar evocaba a otro Presidente nacionalista militar.

Ahora bien, la peculiaridad militar ecuatoriana alcanza otros aspectos. Ya en 1941 las fuerzas armadas recientemente profesionalizadas acometieron una embestida sustentada en la duda de políticos civiles atribuyéndoles poca capacidad de enfrentamiento contra el Perú. La derrota de la guerra con Perú “sumió a los ecuatorianos en un agrave humillación nacional” (García Gallegos, 2009: 185). Luego, desde los años '60, los militares se consolidaron como estructura autónoma consagrada popularmente -incluso constitucionalmente- y las condiciones de adhesión a la Doctrina de Seguridad Nacional en el marco de la Alianza por el Progreso les permitió construir un proyecto de nación propio.

“Durante las dos dictaduras militares institucionales: 1963-1965; 1972-1979, pudieron desplegar todo un conjunto de principios de políticas de desarrollo, con una notable sincronía con tecnócratas civiles de orientación cepalina. Incluso, (...) tuvieron la oportunidad de manejar directamente los nuevos recursos petroleros que pusieron al Ecuador en una nueva fase económica y con posibilidades de emprender en un desarrollo industrial a la vez que empujar la modernización del sector agrario” (Ibid, 2009). Pero esta presencia no sólo da cuenta de su potencia de influencia en la vida política del país sino también en la vida económica. En 1979, la ley de Seguridad Nacional que hasta la democracia se mantenía encubierta, permitió el involucramiento de las fuerzas armadas en actividades de carácter “administrativo”³⁵. Esto significa que la ley explícitamente habilita al Comando

³⁵ <http://www.resdal.org/Archivo/d0000285.htm>

Conjunto de las Fuerzas Armadas a modificar contratos de explotación de hidrocarburos, a controlar la importación y exportación de armas de fuego y a emitir informes previos para las actividades empresariales de PetroEcuador. Además de estas atribuciones, el Comando Conjunto se institucionaliza como fuerza de co-gobierno para todo régimen civil³⁶.

Ahora bien, las instituciones tradicionales se ponen en evidencia una vez más en torno de argumentos que refieren a tiempos en que “los pobres eran tenidos en cuenta” en Ecuador. Otras referencias, más cercanas a la afectividad popular, evocan a “las comunidades”. Las comunidades a diferencia de la primera impresión que resulta de la escucha, no remiten a colectivos indígenas sino a espacios horizontales que la Iglesia Católica colaboró en recrear. “La sociedad ecuatoriana, identificada como una nación profundamente religiosa, ha experimentado en las últimas décadas un proceso continuo de secularización, que se expresa de diferentes formas. Ser ecuatoriano se identificaba con católico, pero hoy esa identidad ha cambiado, va cambiando sustancialmente; las transformaciones sociales, con sus efectos racionales y científicos, han fragmentado la visión del mundo proporcionada por el cristianismo y descentralizaron lo institucionalizado (ritos, símbolos, mitos, instituciones)” (Rodas, 2009: 299). En pleno acuerdo con esta afirmación, es posible “amén” de esa transformación en curso, percibir huellas de un pasado sellado por la impronta evangelizadora en el presente. La década del '60 en particular estuvo plagada de intentos de reconocer en las poblaciones desfavorecidas, claramente indígenas, un sujeto revolucionario.

³⁶ Actualmente la Marina de Ecuador es propietaria de FLOPEC (empresa de transporte de carga) y de ASTINAVE (empresa de reparación de flota naval). La Fuerza Aérea es dueña de TAME (principal empresa aérea de aviación internacional) y la Fuerza Terrestre cuenta con 18 empresas que funcionan como propiedades mixtas vinculadas a la compra de recursos militares que van desde uniformes hasta automotrices (Los datos recuperados se sustentan en la investigación de García Gallegos, 2009 y en fuentes periodísticas que comentan sólo brevemente estos datos, pues aún en el presente son de carácter reservado).

Monseñor Leónidas Proaño, Obispo de Riobamba a mediados de los '50, fue uno de los impulsores de esta corriente. La idea de una "una teología que partiera de la palabra viva de la realidad de nuestros pueblos", de una Teología de la Liberación, impregnó a las comunidades empobrecidas en todos los órdenes. La llamada Iglesia de los Pobres trabajó identificando al indio como el más pobre de los pobres. Proaño impulsó la creación de "aldeas cristianas", que consistían en comunidades que realizaban evangelización a domicilio. Más tarde, hacia mediados de los '60 fundó las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, por medio de las cuales se les daba a los indígenas acceso preferencial a la educación. Aún cuando la Teología de la Liberación fue rechazada por instancias de poder de la Iglesia³⁷ y sufrió intensa represión en los dos gobiernos militares en virtud de su planteo de participación del pueblo en el proceso de cambio social, la Diócesis de Proaño desarrolló tareas de formación para líderes comunales en el Instituto Tepeyac.

Ahora bien, existe un reconocimiento histórico del rol de la Iglesia en Ecuador que va más allá de esta última fase de "carácter progresista". Las primeras misiones en Ecuador fueron desarrollados por grupos salesianos. En tiempos en que el Estado ecuatoriano no tenía capacidad para crear instituciones que le dieran presencia territorial, en miras a protegerse de cualquier intromisión peruana, se otorgaron tierras a los padres salesianos. La Iglesia creó hospitales y escuelas contrayendo al mismo tiempo el compromiso de infundir el nacionalismo ecuatoriano. "Los misioneros salesianos son pioneros dentro de la Iglesia Católica en la promoción de la identidad y el orgullo étnicos a través de grupos pastorales con sensibilidad cultural. Este proceso de etnogenesis no supone tanto una vuelta a la tradición,

³⁷ En enero de 1985, cuando el Papa Juan Pablo II realizó una visita oficial a Ecuador, no visitó Riobamba, la cuna del movimiento de liberación indígena, sino Latacunga. Allí Proaño celebró una misa en la que afirmó: "Los indios han recuperado su palabra. Ahora los indígenas se están organizando con la ayuda de la iglesia y otros sectores, buscando una sociedad nueva que les permita implantar una política propia con liberación económica" (El Comercio, Wordpress 25.2.12).

como una depuración de las tradiciones y un proceso de modernización y de articulación al Estado, ya que para los salesianos la identidad indígena y el nacionalismo ecuatoriano nunca fueron contradictorios sino complementarios” (Martínez Novo, 2009: 255). Dentro de esta tendencia que permeó las formas organizativas de las comunidades indígenas, se destaca la presencia de sectores aún hoy vinculados a la Iglesia, particularmente en la Amazonía donde los salesianos crearon la Federación Shuar.

Aquello que podemos derivar de esta conformación social que mixtura de manera confusa liberación espiritual con liberación de relaciones de explotación en las comunidades indígenas del Ecuador, es que como resultado de esta hibridación de fuentes de dominación, los alcances políticos de las prácticas indígenas se vieron matizados, claramente limitados, pues la defensa de sus derechos nunca habilitó un cuestionamiento que permitiera escindirse de las relaciones de poder impuestas por el Estado. Así es que Ecuador evidencia que Iglesia y Fuerzas Armadas son actores decisivos de antaño pero también del presente para entender la conformación de su estructura social. Huellas en la memoria, recuerdos intergeneracionales, anhelos inacabados, formas organizativas específicas, valores, símbolos, se funden en una especificidad que –con frecuencia en América Latina- repercute sobre las diferentes escalas de subversión.

Ser o no ser nacional y popular

La memoria guarda vestigios que en ocasiones indescifrables vertiginosamente pone a contraluz. No se trata de un proceso conciente sino reactivo, resultado de recuerdos “auxiliares” que se disparan en determinadas instancias de diálogo. El caso argentino brilla por su especificidad en este aspecto,

pues las promesas que el gobierno de De la Rúa realizó en el año 2000 no se acercaban al modelo nacional desarrollista presente en la memoria del pueblo de la mano del General Perón. En aras de alcanzar la justicia social se presentó como opción legalista fuertemente signada por la lucha contra la corrupción, contra el clientelismo y oponiéndose al rol paternalista del Estado. Pues, la memoria larga del pueblo le recordaría que medidas impopulares como el Estado de sitio al que se llamó en diciembre de 2001 siguen siendo prácticas autoritarias fuertemente recordadas por la sociedad argentina que vivió el periodo militar de la década de '70 y '80.

La referencia nacional y popular sigue siendo la lente desde la cual se miran los procesos políticos en Argentina. “Nosotros creemos que hasta ahora ningún gobierno ha sido para o de los trabajadores, ni el peronismo. Creemos en algo nuevo. Ahora no tenemos relación con el gobierno, depende de la presión, pero es oposición. Es cierto que el MTD Evita, o D’Elia tiene beneficios que el resto no tiene pero eso no replantea una alianza (Gleyza, 16.10.10).

El populismo encarnado en el gobierno de Juan Domingo Perón supuso un proceso homogeneizador en términos sociales que dio dimensión nacional a los derechos. Aquellas conquistas como el sufragio femenino, el trabajo masivo, la salud como garantía, y la elevación del nivel educativo, se universalizaron. Asimismo, la expansión política incorporó el proceso de *asalarización* masiva habilitando la creación de organizaciones laborales sólidas que involucraban a grandes masas de obreros al campo político. La mediación entre capital y trabajo fue la bandera del gobierno y una efectiva estrategia de articulación que consiguió convertir sus prácticas en hegemónicas.

Perón representó los intereses de un sector nacionalista que planteó la necesidad de crear un desarrollo industrial independiente que incorporara a los

trabajadores al sistema político-económico. Incluso, desde la Secretaría de Trabajo se sancionaron leyes que establecieron un salario mínimo que procurara abastecer dignamente las necesidades de alimentación y vivienda. Se estableció el seguro social y la jubilación como derecho, se crearon los llamados “tribunales de trabajo”, cuyo objetivo era mediar en los conflictos con el Estado. En suma, las mejoras salariales, el posicionamiento preferencial de las organizaciones sindicales, una renovada política social y el reconocimiento de las asociaciones de profesionales generaron una aceptación creciente que vieron en la generación de mecanismos de movilidad ascendente, mejores oportunidades de vida.

Sin embargo, la lenta descomposición del populismo hacia mediados de los años '50 como resultado de la crisis de la dominación que se materializó en el golpe de Estado contra Perón, supuso la paulatina fragmentación de las solidaridades sociales previamente gestadas. Esto configuraría una marca en la memoria al momento de referirse a “aquellos tiempos mejores”. Después del peronismo, “ni la pérdida de homogeneidad territorial, ni los grandes actores corporativos en crisis, siguieron estructurando identidades estables” (Aboy Carlés, 2009: 80). Es así que los movimientos sociales que se presentan en el escenario de la protesta a lo largo de la década de los años '90 reclamaban el daño inferido por una situación de semiexclusión de derechos previamente adquiridos, se configura una protesta generalizada que confronta con un discurso sustentado en la fragilidad de la ciudadanía.

Como podemos evidenciar, en cada caso existen reminiscencias que evocan a procesos políticos acontecidos en los años '50 que lograron incorporar las pretensiones populares del momento, en la matriz estatal. Estos procesos, en los tres casos vinculados con proyectos populistas, funcionan como *estructuras*

hegemónicas en términos de Gramsci, es decir, constructos de relaciones de dominación que involucraron a los sectores populares habilitando su percepción del protagonismo en el curso de la Historia. “La dominación es una relación política que, por un lado, se organiza y reproduce como Estado, pero es algo que también se configura al organizar la cultura de una sociedad o un país” (Tapia, 2008b: 101).

Es así que en términos culturales, el sentido común compartido es un tipo de producción política y a su vez, arena de conflicto para la lucha por la hegemonía. Más aún, incorpora afectos, habilita la consideración de lo que es justo, como articulador, la organización del sentido común se refiere a la construcción de poder. El sentido común es “una normativa que ordena el sentido de los hechos sociales (...) es un compuesto de memoria y valoración. El sentido común contiene un tipo de memoria histórica y un modo de producir memoria histórica, es decir, de ordenar los hechos sociales e históricos de acuerdo a una estructura ideológicamente armada en el proceso de constitución de una cultura política como hegemónica” (Tapia, 2008b, 103)

La memoria larga de las luchas

La memoria larga de los acontecimientos tiene una doble potencialidad, permite explicar eslabones que en la memoria relatan aspectos desde el pasado en términos de percepciones de la dominación, o por el contrario, permite rastrear elementos contra-hegemónicos que disparan acontecimientos, luchas, vividas por generaciones anteriores buscando transformar la dominación impuesta como recreación del presente. Tiempos y condiciones se funden, se entremezclan y operan en simultáneo.

En Bolivia, el siglo dieciocho estuvo marcado por “reformas de mercado” de España hacia la colonia que forzaron a los indígenas a comprar y endeudarse con los repartos de mercancías. Esto generó la rebelión de 1781 que tuvo como principal desencadenante el cerco sobre la ciudad de La Paz bajo el mando de Julián Apaza-Tupaq Katari y sus seguidores. “Si miramos la rebelión de Katari desde el presente, la memoria de las acciones se proyecta en el ciclo de levantamientos y bloqueos de caminos de los años 2000-2005, con epicentro en la ciudad de El Alto, uno de los cuarteles generales de las tropas rebeldes en 1781. Lo que se ha vivido en los años recientes evoca una inversión del tiempo histórico, la insurgencia de un pasado y un futuro que puede culminar en catástrofe o en renovación. En la historiografía del movimiento de Tupaq Katari ha sido frecuente la explicación del radicalismo y la violencia colectiva que lo caracterizó, a partir de una serie de atribuciones esencialistas que aluden al carácter “indómito”, “salvaje” e “irracional” de los indios, y en particular de la “raza aymara” (Rivera, 2010: 10).

Pues, la geografía, los espacios, las relaciones que se tejen en un territorio determinado también forman parte de las implicancias que la memoria larga adquiere en la lucha. Un ejemplo de esta recuperación es lo que sucede en el famoso cerro boliviano Killi-Killi. En la actualidad, el cerro donde fue expuesta la cabeza de Katari después de su descuartizamiento, se ha convertido hoy en un mirador turístico de la ciudad de La Paz. Aún cuando su presencia es parte del año, cada 14 de noviembre el cerro convoca a comunidades aimaras y movimientos políticos indianistas que recuerdan la continuidad de la lucha e invocan a “la reunificación del cuerpo político fragmentado de la sociedad indígena” (Rivera, 2010). Esta evocación ya había estado presente en los años setenta, cuando se reorganizó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, bajo la égida del movimiento katarista, decretando un masivo bloqueo de caminos

en noviembre de 1979, que paralizó las comunicaciones y abastecimientos de las ciudades durante varias semanas. Como afirma la intelectual boliviana Silvia Rivera, la Historia es como un movimiento en espiral. La memoria histórica se reactiva y a la vez se reelabora y resignifica en las crisis y ciclos de rebelión posteriores. No hay “post” ni “pre” en una visión de la historia que no es lineal ni teleológica. El mundo indígena no concibe a la historia linealmente, y el pasado-futuro están contenidos en el presente.

En el caso argentino la memoria larga adquiere una connotación asociada a ideas libertarias propias del esquema ideológico anarco-sindical de principios del siglo XX. En conversación con el historiador Adolfo Gilly, algunas ideas trabajadas sostienen que los eslabones que los sentidos obreros luego nucleados en el peronismo en los '40 y '50, son producto de un nacionalismo que adquirió sustancia a partir de la impronta migratoria. Resistencia, trabajo, formato de organización sindical y apuesta de ampliación de derechos han sido constantes que asociadas al trabajo se presentan una vez en el imaginario combativo.

El debate de la ciudadanía que de aquí se deriva clama la evocación al ánimo de lucha heredado más tarde por la era populista. El populismo es la conjunción de dos movimientos: “fundacionalismo implícito en su dimensión rupturista, esto es, el advenimiento de un sujeto subalternizado al centro de la vida política, de una parte, y, la pretensión hegemónica, y siempre fracasada de esa *plebs* de encarar a la totalidad del *populus*” (Aboy Carlés, 2009: 76). El pueblo que se constituye en las dos primeras décadas del siglo XX de la mano del irigoyenismo y más tarde, el pueblo movimentado evocado como “comunidad obrera” por el peronismo fue, en cada instancia, la encarnación de una Argentina excluida, desplazada del sentido de lo público que veía en su accionar la transformación histórica –el famoso sujeto-. La ruptura del pueblo como actor asociado al poder imprime en la memoria larga los

elementos de lucha que lo transforman en sujeto emancipatorio. Aquí es donde nos permitimos tomar distancia de las perspectivas conservadoras que anulan la capacidad de decisión y elección de los trabajadores de fábricas vinculados al orden peronista entendiéndolos como reproductores políticos acríticos. Sostenemos que existe una ruptura que contrapone pueblo a poder en la propia manifestación de “ocupar un lugar en la historia”, apropiarse del sentido identitario emergente.

En relación al caso ecuatoriano, los vestigios de la memoria en relación a sus luchas emancipatorias se remontan a 1532 y la siempre evocada captura, prisión y asesinato de Atahualpa en Cajamarca (previo pedido al conminado hijo del Sol, emperador del mayor imperio conocido, la renuncia a su origen, sus creencias, su imperio y su trono), como hecho emblemático que desencadenará diversas rebeliones por parte de los indígenas que habitaban la tierra recién colonizada por los españoles. Ahora bien, más allá del ánimo que moviliza en el imaginario la venganza sobre lo destruido por los colonizadores, la historia reciente arroja elementos que tejen puentes analíticos hacia un presente más sensible a comparaciones de procesos que se reproducen de manera diferenciada evocando un pasado que se revive. Antes de la expulsión de los jesuitas, en Quito ocurrió un hecho pionero del todo significativo para nuestro análisis de la resistencia que entonces ya podía catalogarse como “urbana”. En 1785 en respuesta a medidas fiscales impuestas por Carlos III de España protestas contra las aduanas estallaron en la región quiteña. El famoso grito “Abajo el mal gobierno, afuera los chapetones!” (Lara, 2009:246) se convirtió en aclamación famosa reutilizada décadas después. En aquel momento la casa de Estancos fue incendiada y más tarde el Palacio de gobierno como ícono de la colonia, fue asaltado. Las autoridades de entonces debieron buscar asilo en el convento de la Concepción. Esta victoria popular destituyente sería recordada porque la política que le siguió fue además de

la abolición de las aduanas, la expulsión de todo aquel español que no hubiese formado familia en territorio ecuatoriano. El siglo XX encuentra en los sucesivos gobiernos de Velasco Ibarra una dominación por consenso que en diferentes mandatos alternos desde 1938 hasta 1972 se desarrolla buscando ampliar la ciudadanía ecuatoriana. La incorporación ciudadana al orden vigente se manifiesta como la clave sin encontrar grandes actos de resistencia debido a organizaciones intermedias que operaron activamente moderando las apuestas desde el Estado. La Iglesia primero y más tarde, la intervención de organizaciones sociales, operan hasta el presente en la lógica de “cooperación para el desarrollo”, asentando las bases del orden, regulando el ánimo rebelde. Pero los ciclos no se cierran, los noventa y más tarde el ciclo de destituciones por movilización popular, transformarían este derrotero.

Como consecuencia, es posible dar cuenta del modo en que la memoria construye su bagaje para interpretar las acciones del presente valorizando la experiencia acumulada. No podemos dejar de mencionar que los distintos niveles que cristalizan la dimensión cultural de la memoria son analizados por Silvia Rivera quien recupera la “síntesis entre la memoria larga -luchas anticoloniales, orden ético prehispánico- y la memoria corta – que involucra el poder revolucionario de los sindicatos- en el caso de Bolivia. Efectivamente la memoria tiene un rol central para dar carácter nuevo a las orientaciones políticas asumidas. *Lo más parecido a la práctica misma es la memoria organizada de la práctica.*

La naturaleza de aquello que se destituye

Comprender la fortaleza de lo destituyente conduce a detenerse a observar la debilidad o solidez de aquello que se destituye. La figura del Presidente representa

la cristalización de intereses políticos materializados en la orientación general del gobierno. Dar cuenta del rechazo a la figura del primer mandatario implica exponer las razones de impugnación de un orden que se recrea al interior del Estado y que involucran al propio carácter del Estado en un proceso de crítica. En ese sentido, incorporamos al análisis el elemento formal de la dominación, el Estado, que en cada uno de los casos analizados contiene especificidades que explican la reconfiguración del orden político posterior a las destituciones. El Estado puede ser entendido como un proceso, como una forma de la vida social que no está dada de antemano, que se realiza en el conflicto, en cuya configuración participan también las clases subalternas y cuyos fundamentos inmateriales se construyen en los tiempos largos de la historia (Roux, 2005: 24). El Estado es asimismo “un espacio ilusorio de comunidad, al servicio de un modo de acumulación” (Tapia, 2010: 5). Para Pierre Bourdieu, además, el Estado no se apodera únicamente del monopolio del empleo legítimo de la violencia física sino también de la violencia simbólica. Desde su perspectiva los poderes del Estado han logrado tal concentración de dicho capital que consiguen producir o imponer las categorías de pensamiento que aplicamos a prácticamente todo lo existente en el mundo social. Y si bien es cierto que han alcanzado esta fuerza, esta caracterización no se condice con la realidad de América Latina donde la subversión a las categorías impuestas y las crisis desatadas a los largo de los últimos diez años evidencian la capacidad de respuesta social como espacio que se autonomiza de las relaciones estatales. Si bien desde el Estado se inculcan formas simbólicas de pensamiento, marcos sociales de percepción, cauces por donde se debe perfilar la memoria histórica, el propio *habitus* recreado en prácticas cotidianas por un lado, y “el principio esperanza” como ánimo de lucha de restitución de un pasado que se vive en el presente, transforman esa impronta refundando esquemas de percepción y acción contestatarios.

En Bolivia la formalización del Estado a lo largo del siglo XIX y XX aconteció en diversas oleadas que tuvieron como resultado la incorporación indígena en la gestación de la nación. Existe desde el intento de encarar el proyecto de Estado Nación una incapacidad de unir las “dos Bolivias”, la indígena y la blanco-mestiza, tornándose esta dificultad visible en la instalación del Estado del '52 que pretendió construir una burguesía nacional y un discurso de mestizaje tendiente a la homogeneización. En ese sentido, procesos de organización estratégica fueron encarados desde el Estado, siendo la habilitación de sindicalización uno de los más importantes. Como afirma Zavaleta, el Estado nunca fue síntesis de su sociedad, sucesivos movimientos reivindicatorios dan cuenta de esta resistencia.

Ahora bien, para los casos de condición multisocietal –casos en que la sociedad contiene al movimiento de otras sociedades en su interior- las condiciones de la dominación son diferentes, pues ocurre una superposición de autoridades y procesos de legitimación en la que el Estado brilla por su incapacidad hegemónica. Vale recordar que una sociedad abigarrada es “una sociedad en que coexisten desarticuladamente varios tiempos históricos, modos de producción, concepciones del mundo, lenguas, culturas y estructuras de autoridad” (Tapia, 2010: 100), entonces la persistencia de modos de ejercicio y de autoridades alternativas desafían el monopolio del poder y de la política del Estado nación moderno. En sociedades como la boliviana y la ecuatoriana, donde se desarrollan estructuras comunitarias indígenas con formas de producción propias y dinámicas de autogobierno, varios territorios al interior del país se hallan distanciados de las formas de política del tipo monopólico-estatal. Es así que se constituyen *archipiélagos de poder*, espacios en donde claramente se desconocen las estructuras de autoridad, administración y justicia típicas del Estado nación moderno. De aquí que se constate la configuración de un “Estado aparente” como lo llamó Zavaleta, o

sea, una estructura de relaciones que reclama ser un Estado-nación unificado pero que en verdad sólo se corresponde de manera patrimonialista con algunos sectores del país. La hegemonía estatal en consecuencia se encuentra en entredicho.

Los sucesos de reivindicación presentes en las crisis manifiestan esta fractura estructural, una fuerza contenida que no logra ser abarcativa y reconocida por todos. El cuestionamiento a la dimensión estatal es constitutivo de estas sociedades abigarradas. En el caso de Bolivia el *Estado aparente* como entidad de autoridad no hegemónica se vuelve evidente, pues al no incorporar en sus estructuras la presencia en el territorio de 32 grupos étnicos en tanto formaciones económico-sociales diferenciadas, se manifiestan relaciones de legitimidad fragmentaria. En el caso de Ecuador no obstante, la configuración social es más compleja pues el vínculo entre las comunidades indígenas como formaciones sociales diferenciadas, y el Estado, se da a través de organizaciones intermedias. Estas organizaciones inhiben la alienación y colocan a las comunidades en situación de “integración” constitutiva en constante progreso. Más aún, en el caso ecuatoriano, las diferencias regionales que forman parte de una delimitación territorial política resultado de procesos históricos de diferenciación y segregación derivados del sistema colonial de grandes haciendas, se integraron al Estado en un “sistema de preferencias” según la zona y los recursos estratégicos con los que cuenta. En ese sentido, existe una mayor dificultad para dar cuenta de los “archipiélagos” comunitarios constitutivos de prácticas de legitimación de autoridad diferente a la del Estado, a las que refería Zavaleta. Existen comunidades en relación de extrañamiento con el Estado y existen otras intensamente integradas. Y es que la estructuración política demarca desde el Estado ecuatoriano relaciones cuasi-autónomas, específicas, con cada una de las regiones. De este modo se articulan las negociaciones para la ordenación del proceso de acumulación económica y político-organizativo hasta el presente. Ahora

bien, si la condición para la definición de una conceptualización de Estado es la acumulación en términos de apropiación estatal, incluyendo el tributo a la entidad público-administrativa, en el caso de Ecuador hay evidencias de una acumulación del tipo patrimonial que manifiesta una vez más la efectiva cristalización de un Estado aparente.

Lo interesante del debate en torno del *Estado aparente* en países de condición multisocietal en América Latina radica en el reconocimiento de la dimensión de la disputa al Estado-nación como monopolio de la fuerza y la política producto de la concentración de los medios de producción. Para que el Estado sea hegemónico no deberían existir otras estructuras de autoridad en su demarcación territorial. Y en Bolivia y Ecuador no sólo hay otras formaciones económico-sociales con modos de producción, visiones de mundo y estructuras de autoridad propias, además, coexisten diversos tiempos y territorios históricos materializados en estas estructuras comunitarias. A diferencia de los contenidos de luchas anteriores, donde los reclamos sociales orientados a los gobiernos no ponían en entredicho el carácter de Estado aparente, en los procesos que analizamos se presentaron múltiples elementos que cuestionaron dimensiones estructurales referidas a la falta de presencia del conjunto de los componentes de la sociedad en estos Estados. No había lo que Zavaleta denomina el “óptimo social” (Zavaleta, 1988).

En el caso argentino la presencia estatal no sólo como garante del orden impuesto sino también como “viabilizador” de la acumulación, es más clara. Su rol integrador desde inicios del siglo XX y más tarde a lo largo de la década de los años '40 y '50 acompañó la extensión de derechos individuales y colectivos, así como en los '60, fue impulsor del pleno empleo, extendida educación formal, crecimiento económico e incipiente industrialización, creando todo este proceso instituciones sociales y políticas de carácter estratégico que permitieron su afianzamiento. En

Argentina no se discute la vigencia del Estado aun cuando la crisis pueda llegar a límites inéditos.

No obstante, la pérdida de hegemonía de las relaciones estatales de finales de 2001 encuentra en la configuración sociohistórica del régimen político y del modo de acumulación su explicación inmediata. En 1989 se crearon las bases para la construcción de consenso en torno del modelo neoliberal. La crisis hiperinflacionaria fue resultado del fin de un modo de relación capital-trabajo y de un tipo de dominación estatal. Se generó un proceso de disolución social y se rompieron las estrategias de lucha obrera que tenían como bandera la reivindicación sindical. El resultado fue una reestructuración de las relaciones capitalistas en donde la burguesía nacional en crisis sufrió un reposicionamiento al tener que retejer redes con el mercado mundial. Es así que comenzó a construirse el consenso en torno a las políticas de apertura a capitales externos, desregulación del mercado, privatizaciones y flexibilización de las condiciones de trabajo. Las condiciones de reproducción se ampliaban transformándose y con ellas se modificaba la inserción de las clases populares a la matriz distributiva conocida. El factor disciplinador de la hiperinflación operó y aún hoy opera en Argentina. Es condición de consenso por la amenaza de disolución social que representa en términos coercitivos.

Con el programa neoliberal se promovió una reestructuración productiva reorientando la actividad industrial nacional hacia una competencia para la cual no se encontraba en condiciones de posicionarse. Como resultado quebraron empresas y en algunos casos desaparecieron ramas enteras de producción, justamente las de mayor valor agregado. Al mismo tiempo, creció la participación de las manufacturas en las exportaciones (Piva, 2009). Este movimiento superó la contradicción productiva entre agro e industria que había dominado el desarrollo económico argentino en términos de preponderancia. Es así que se vuelve dominante en la

economía la industria productora de mercancías de bajo valor agregado y las materias primas orientadas a la exportación. Acompañando la implantación del modelo neoliberal se dio también un proceso de dependencia financiera en el cual se valorizaban flujos de dinero provenientes del extranjero –muchos de ellos en forma de deuda- orientándose algunas veces a “procesos de tecnologización” y otras veces a sostener el equilibrio de la balanza de pagos en el marco de la convertibilidad. Ese dinero después de cumplir su rol dinamizador interno, redundaba en una llana fuga de capitales.

Como hemos afirmado, la salida hiperinflacionaria fue el elemento legitimador del nuevo modo de acumulación y del posicionamiento de un nuevo bloque dominante. “Sobre esta base, la acción del Estado en su ejecución del programa de reformas neoliberales, pudo presentar la ofensiva del capital como expresión del interés general, traducirla en hegemonía política” (Piva, 2009: 80). Como consecuencia, la transformación de la estructura económica argentina tuvo un efecto transformador de la estructura social. Las consecuencias vinculadas a la pobreza y al desempleo produjeron las premisas de su propia reproducción y posterior crisis. El proceso de desindustrialización acompañado del debilitamiento del aparato del Estado, la privatización de las empresas públicas y los efectos del desguace sindical³⁸, contribuyeron a crear una sólida conjunción de intereses dentro de la clase dominante en torno del nuevo modelo de acumulación y su profundización. El cambio en la correlación de fuerzas entonces, en términos de hegemonía de un tipo de Estado –acumulador transnacionalizado- desanclado de toda forma de organización estable de los trabajadores, tuvo como desencadenante

³⁸ La fragmentación sindical fue “inicialmente resultado del fracaso de la estrategia dominante de la clase obrera. Durante 1989 y 1990 la conflictividad obrera cayó y se fracturó la Confederación General del Trabajo. Pero posteriormente, dado que el proceso de reestructuración del capital fue desigual según ramas y tamaño de las empresas, la fragmentación de la fuerza de trabajo se desarrolló como resultado de las transformaciones del modo de acumulación. Al mismo tiempo, la dinámica reformista produjo un fuerte incremento del desempleo y el subempleo” (Piva, 2009: 80)

la profundización de un modelo de acumulación de valorización financiera excluyente. En la medida en que las condiciones de trabajo de clases medias y populares se empobrecían y los salarios bajaban comenzó a dificultarse la apariencia de “bienestar general” típica de la dominación hegemónica. La dinámica de acumulación inhibió la creación de mecanismos que institucionalmente canalizaran las crecientes demandas de una sociedad en proceso de polarización. Incluso las instituciones del Estado dejaron de canalizar las demandas de los diversos sectores productivos internos y de los sectores medios y populares que históricamente legitimaron la institución estatal. Cambia la representación de intereses dentro del Estado, lo cual redundaba en un cambio en el carácter del Estado.

Por esto, la viabilidad de la dominación comenzó a depender más y más de mecanismos coercitivos. De este modo entonces, ocurre la pérdida de hegemonía. Los intereses de la clase burguesa dejaron de representarse como la condensación de intereses de todas las clases sociales. Con posterioridad a la apuesta neoliberal, como resultado de las privatizaciones, la desregulación y la caída de la tasa de productividad, no se contó siquiera con los recursos que permitieran darle cauce a una salida a la crisis política. Es en ese contexto en que los reclamos piqueteros que comenzaron en las provincias –a partir de masivos despidos de trabajadores públicos- hacia 1997, generaron un efecto *agregativo*. La figura del desocupado, la demanda de trabajo, la necesidad de subsidios o salarios dignos se convirtieron en demandas generalizadas. Incluso, incorporando a sectores medios urbanos empobrecidos que por primera vez se involucraban a la dinámica contestataria. Bajo estas condiciones estalla la crisis de fines de 2001. Es pues una crisis hegemónica estatal y de un modelo de acumulación del capital que no podía seguir sosteniéndose. A contraluz, ocurrió un proceso de fortalecimiento de grupos sociales excluidos que irrumpen con un reclamo cargado de fuertes reminiscencias:

trabajo. Todo esto explica el modo en que reclamos que atraviesan el derrotero inmediato de los sectores medios y populares, se transformen en un proceso acumulativo de crítica de un Estado ajeno a los intereses populares que encarnaba los intereses dominantes des-nacionalizadores.

La movilización como espejo del tejido social

La trama temporal espiralada que sostiene y da sentido al relato de la Historia despliega un presente cargado de reminiscencias e invocaciones a un pasado tan lejano como sorpresivamente actual. En este marco de memorias se destacan puntos neurálgicos que ponen en evidencia la forma que adquiere la sociedad. A estas instancias Zavaleta las denomina *momentos constitutivos* y en ellas radica la identificación del cambio de horizonte de sentido en la orientación política de una conformación social, la renovación ideológica o la transformación del imaginario de sociedad posible.

Existe en este sentido poco lineal, en variadas experiencias, un deseo de retorno a un pasado cargado de promesas no saldadas y al mismo tiempo, a la negación de ciertas dimensiones de ese mismo pasado, que realizan el deseo de hacer presente *aquellos tiempos mejores*. La idea del *eterno retorno* de Nietzsche se transforma así en sueño y pesadilla, en un movimiento dialéctico que tarde o temprano deberá encontrar su deseo de fin. La sola posibilidad de repetir todo tal como lo hemos vivido hasta el infinito opaca la historia y transforma en nimiedades a sus protagonistas.

Entonces, ¿De dónde deriva la vitalidad de la fuerza de la movilización social en medio de una crisis que remite a la revitalización de procesos inmersos en la Historia? ¿Qué dimensiones catalizan su explosión transformadora o su implosión estéril?

El presente de la capacidad destituyente refresca sucesos que remiten a una Historia presente, futura y pasada. Sucesos de destitución presidencial pueden reproducirse en la Región, las claves analíticas arrojadas permiten leer a través del cristal de la crisis los elementos que conforman esta potencia latente. “Nosotros decimos que por la situación económica y por la situación política puede haber otro 2001, en realidad creemos que deberíamos llegar a otra situación así ya con un marco de alianza mucho más amplio y varios sectores organizados planteando otra propuesta, las asambleas del 2001 quedaron en la nada, habría que volver a impulsar esas cosas. Todo eso fue muy aislado, no hubo unidad que diera una alternativa en 2001 entonces volvieron los mismos” (Gleyza, 16.10.10).

En Bolivia, aun cuando el “civismo” es reconocido como atributo diferente de la política (“la política es cosa de los criollos”), el civismo de las juntas vecinales a partir de octubre de 2003 muestra una revalorización sociocultural destacable. “Ahora sabemos que el Estado es una guerra, hay que saber jugar táctica y estratégicamente” (Dani, 26.10.10). Según los kataristas, el discurso del gobierno ha vaciado el contenido reivindicativo, ha expropiado el proyecto indígena. “Hoy Katari se ha vuelto un slogan, los indígenas que están en el gobierno tienen mente colonial” (Odin, 26.10.10). Las comunidades del Alto están en pleno proceso de concientización, de revaloración de su horizonte interior. “Veremos qué pasa cuando la gente se acuerde que puede cambiar gobiernos” (Dani, 26.10.10).

Y Ecuador no es la excepción: “Además de su política, de su proyecto como gobierno, el de Correa es un gobierno que representa a los mismos sectores oligárquicos de este país que de alguna manera se están renovando, hay una nueva burguesía. (...) el gobierno se apropió a cabalidad de las propuestas del movimiento indígena para el discurso. Una construcción histórica de los pueblos de este país está en el discurso del presidente, pero del discurso a la aplicación no existe

absolutamente nada. Nosotros, la CONAIE, cualquiera sea el dirigente, estamos fortaleciendo, retomando con fuerza la agenda del movimiento indígena. No quedarnos en la coyuntura es lo que importa. Hay que mirar mucho más allá de los temas coyunturales (...) la CONAIE está viva, está presente” (Macas, 23.11.10).

Es posible considerar que leer los acontecimientos a partir de la crisis permite tejer una “malla” de significados encontrando en los sucesos conflictivos, de desorden y rebelión, la complejidad de la conformación social latinoamericana. La crisis, en tanto develadora de relaciones sumergidas, es oportunidad que abre nuevos horizontes de visibilidad. El poder popular latente, la construcción de capacidad destituyente, cuenta con propiedades que lo convierten en instrumento político privilegiado para comprender no sólo la forma del movimiento, la comprensión para la acción, sino también el proceso de conformación de su movimiento interior, su pasado y proyección. Postular a contracorriente la maravillosa experiencia de la crisis no puede implicar más que el enfrentamiento al temor de la siempre subversiva capacidad de transformación.

) Reflexiones conclusivas (

El análisis de las movilizaciones sociales desde la perspectiva del horizonte interior permite recuperar tanto el entramado histórico que, como un pasaje de diapositivas entreteje un derrotero de las prácticas y los sentidos que se aducen a las acciones contestatarias en tiempos de crisis, como el contenido profundo de la primera cristalización que las organizaciones expresan como proyecto contrahegemónico.

Haber recorrido el sinuoso derrotero de las movilizaciones sociales de 2001, 2003 y 2005 en Argentina, Bolivia y Ecuador implicó derrumbar cánones sobre el estudio de los movimientos sociales en América Latina. En primer lugar, se evidencia la factibilidad y la extrema importancia de comparar casos con estructuras sociales y formaciones político-económicas diferentes. América Latina es un mosaico heterogéneo con peculiaridades que contiene un denso espacio de intersecciones. No es casual que tres crisis de la magnitud de los casos que estudiamos hayan acontecido en un periodo de cinco años y sean derivado de procesos político-económicos de matriz ideológica común. Comparar es habilitar el espacio de diálogo y debate, abrir la densidad de elementos yuxtapuestos que se combinan en el desenvolvimiento de procesos políticos convergentes. Si bien cada sociedad, cada movimiento social, parte de condiciones históricas divergentes, reconocemos en el sustrato de su derrotero, en la construcción de capacidad destituyente, puntos en común. Consideramos que la comparación, el análisis conjunto que interconecta varios casos, es una apuesta fértil para aprender de experiencias diferentes, señalar consecuencias de acciones políticas realizadas y en todo caso, evitar reiterar experiencias con consecuencias no deseadas.

En segundo lugar, otro de los obstáculos sorteados fue el desafío teórico de orientar un análisis investigativo a nivel doctoral que tuviera como marco teórico el aporte de intelectuales latinoamericanos entre los que se destacan bolivianos y ecuatorianos. Reconocer la utilización y efectiva incorporación del sociólogo francés Pierre Bourdieu relajó las expectativas de una tesis de este tipo a los ojos de la tendencia sociológica dominante, aún así, creemos haber logrado dar cuenta que en las elaboraciones de René Zavaleta se encuentran las explicaciones más excelsas sobre el desarrollo, las relaciones de poder, la configuración de las sociedades, sus crisis y las transformaciones políticas que experimentó América Latina en el siglo XX.

En tercer lugar, no puede desconocerse que la primera y más importante recuperación de conocimiento provino de los testimonios recuperados en El Alto, en Quito y en Florencio Varela. El saber de quienes se movilizan en condiciones críticas de precariedad obliga al reconocimiento de la propia ignorancia más allá de toda lectura previa. De aquí el agradecimiento por la apertura de horizontes de comprensión y de sentido.

Finalmente, vale detenerse en el aporte que creemos, puede derivarse de la investigación. Pensar América Latina a partir de sus crisis des-hilvana sus particularidades, las razones de su desarrollo desigual, su entramado de relaciones político-económicas, sus conflictos y manifestaciones de voluntad de cambio. La apertura teórica que esta perspectiva abre habilita una profundización de los estudios sobre los movimientos sociales que exceda la consideración de su protagonismo como sectores excluidos con estrategias de supervivencia solamente, como anomalías que exceden en su acción el carácter institucional en la canalización de conflictos en democracia, o como sujetos históricos protagonistas del cambio revolucionario en la marcha de la Historia. A partir del método de conocimiento de la crisis, posicionamos a los sujetos de confrontación –como característica

ontológica- en su contexto, indagando en la estructura hegemónica que los involucra (la tendencia a reproducir “su mejor momento del pasado”), considerando *el movimiento dentro del movimiento* como espacio-tiempo de articulación social intersubjetiva orientada a la apuesta por un cambio de lugar social.

Incluso, los procesos vividos dan cuenta de un proceso de acumulación política como resultado de las crisis destituyentes. Hemos constatado que se incorporaron nuevos sectores sociales a la dinámica de la protesta desde el año 2001. Por primera vez, sectores que se sentían ajenos al acontecer político salieron a la calle a reclamar lo que consideraban justo postergando sus tareas cotidianas, sus necesidades inmediatas. Entonces, comprendimos que quienes protagonizaron las movilizaciones estudiadas no entienden al poder como recurso externo sino como parte de sus relaciones sociales cotidianas. Así brillan por su intensidad y claridad en términos de percepción, los movimientos indígenas de la región que con posterioridad a los actos de destitución se vieron fortalecidos y aún en el caso de Ecuador, cohesionados internamente. El fortalecimiento de estos colectivos en tanto interlocutores cruciales, ha tenido consecuencias políticas impactantes para los gobiernos que se instalan como resultado de las destituciones. Pues, el análisis de lo acontecido a lo largo de los primeros años de este siglo permite explicar el derrotero de los gobiernos actuales en su vínculo interrumpido con los sectores sociales movilizados que les dieron legitimidad. La instalación del nuevo patrón de acumulación que involucra la dinámica de extracción o acumulación por desposesión –en términos de Harvey- es parte de este debate en el que los movimientos sociales adquieren nuevamente protagonismo.

Marx afirmaba en el siglo XIX que “la revolución social (...) no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar su propia tarea

antes de despojarse de toda veneración supersticiosa por el pasado. Las anteriores revoluciones necesitaban remontarse a los recuerdos de la historia universal para aturdirse acerca de su propio contenido. La revolución (...) debe dejar que los muertos entierren a sus muertos, para cobrar conciencia de su propio contenido” (Marx, 1852). De aquí la derivación de la necesidad de poner en crisis la estructura hegemónica de la que forman parte los sujetos de confrontación y romper con el sentido común que la legitima.

El compromiso de los colectivos con pretensiones contrahegemónicas no sólo involucra la confrontación con el poder establecido, sino también la recreación de imaginarios de resistencia contruidos contra la apatía, la discriminación, el sentimiento de impotencia, contra el individualismo generalizado y las actuales formas de dominación que revisten nuevos rostros pero viejos contenidos. Subvertir el sentido común es en sí mismo un acto emancipatorio.

) Referencias bibliográficas (

- ABOY CARLÉS (2009) “La sangre de Esteno. Transformaciones de la ciudadanía en Argentina: del populismo a la inflexión particularista”, en DELAMATA, Gabriela, –coord.- *Movilizaciones sociales: nuevas ciudadanía? Reclamos, derechos, Estado, en Argentina, Bolivia y Brasil*, Biblos, Buenos Aires.
- ANTEZANA, Luis (2009) “La crisis como método en René Zavaleta Mercado” en *Ecuador Debate*, nro. 77, agosto, Caap, Quito.
- ALVAREZ-LARRAURI, Selene (2004) “Habitus, campo y violencia simbólica. Una construcción sociológica de la salud”, en *Revista Acta Sociológica*, Núm. 40, enero-abril, Ciudad de Mexico.
- BALÁN, Jorge y JELIN, Elizabeth (1973) *Migración, estructura ocupacional y movilidad social: el caso de Monterrey*, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México.
- BELGHAZI, Taieb y MADANI, Mohammed (2001) *Actions Collectives: De la mobilisation des ressources à la prise de parole*, Publicaciones de la Facultad de Letras, Rabat, Marruecos.
- BERTAUX, Daniel (2005) *Los Relatos de Vida. Perspectiva etnosociológica*, Bellaterra, Barcelona.
- BORÓN, Atilio (2004) “Raíces de la resistencia al neoliberalismo” en *América Latina en Movimiento*, No. 385-386, edición especial, Foro Social de las Américas, ALAI, 20 julio.
- BOURDIEU, Pierre (1991) *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Taurus, Madrid.
- _____ (1997) *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Anagrama, Barcelona.
- _____ (2009) *El sentido práctico*, Siglo XXI, Buenos Aires. [1980]

- BUSTAMANTE, Fernando (2005) “En los arrabales del Estado de naturaleza” en *Revista Ecuador Debate*, número 64, abril de 2005, Nueva Sociedad, Quito.
- BURGOS, Elizabeth (2005) “Bolivia o la pasión nacional” en *Rev. Nuevo mundo, mundos nuevos*. Disponible en: <http://nuevomundo.revues.org/35>
- CAJÍAS DE LA VEGA, Magdalena (2008) “El poder de la memoria: los mineros en las jornadas de octubre de 2003” en ROBINS, Nicholas: *Conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia*, Plural, La Paz.
- CALDERÓN, Fernando (2008) *Escenarios políticos en América Latina. Conceptos, método y observatorio regional*, PAPEP, PNUD-Siglo XXI, Mexico.
- CALDERÓN, Fernando y JELIN, Elizabeth -Comps.- (1987) *Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y realidades*, CEDES, Buenos Aires.
- CERRUTTI GULDBERG, Horacio y Mondragón González, Carlos (2006) *Resistencia y ciudadanía restringida. Política y sociedad en América Latina y el Caribe*, CCyDEL-UNAM, Mexico.
- CHOQUE, Lucila (2006) “Movimientos sociales: Warmis de pie, luchas por una vida digna... Participación de las mujeres alteñas en la guerra del gas del 2003”, en TAPIA, Luis –coord.-: *Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia*, Tercera Piel, La Paz.
- CIRIZA, Alejandra (2000) “¿Golpe de estado o revuelta india en el Ecuador?” en *Revista OSAL*, Nro. 1, año 1, Clacso, Buenos Aires.
- Comisión ecuatoriana para el control cívico de la corrupción (2001) “Informe del Período Comprendido entre Marzo de 2000 y Febrero de 2001”. Disponible en Internet: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo25.pdf
- Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas (2003) “Manifiesto al pueblo boliviano”, Cochabamba, 4 de octubre, disponible en: <http://www.rebelion.org/hemeroteca/bolivia/031006coord.htm>
- DELAMATA, Gabriela –coord.- (2009) *Movilizaciones sociales: nuevas ciudadanías? Reclamos, derechos, Estado en Argentina, Bolivia y Brasil*, Biblos, Buenos Aires.

- DRI, Rubén -coord.- (2007) *Movimientos sociales. La emergencia del nuevo espíritu*, Carybe, Lanús, Pcia. De Buenos Aires.
- DUSSEL, Enrique (2007) “Cinco tesis sobre el populismo”, UAM-I, Mexico. Disponible en: <http://enriquedussel.com/txt/Populismo.5%20tesis.pdf>
- ESCÁRZAGA, Fabiola (2004) “Las autonomías posibles en Mexico, Bolivia y Perú”, texto presentado en el IV Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU), Quito.
- FLORES, et. al. (2007) *Mujeres y movimientos sociales en El Alto. Fronteras entre la participación política y la vida cotidiana*, PIEB, La Paz.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (1990) “La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu”, introducción a *Sociología y cultura* (1990), Grijalbo-Conaculta, Mexico. Texto completo disponible en: www.scribd.com/doc/13032293/Bordieu-Pierre-Sociologia-y-Cultura
- _____ (1992) *Culturas híbridas*, Sudamericana, Buenos Aires.
- GARCÍA GALLEGOS, Bertha (2005) “El 20 de abril: presente y pasado de un proyecto militar corporativo”, en *Rev. Iconos* nro. 23, Flacso Ecuador, Quito.
- _____ (2009) “Singularidad de las Fuerzas Armadas y perfiles militares. De militares a empresarios: la crisis actual de las FFAA” en MONTES DEL CASTILLO, Ángel, *Ecuador contemporáneo*, Edit.um, Murcia.
- GARRIDO, Luciana (2005) “Hablan las Organizaciones: Movimiento Teresa Rodríguez”. Disponible en www.segundoenfoque.com.ar/horg_mtererod.htm
- GERMANI, Gino (1973) *El concepto de marginalidad*, Nueva visión, Buenos Aires.
- GILLY, Adolfo (2009) *Historias clandestinas*, Los nuestros – La jornada, Mexico.
- GIRIBETS, Miguel (2009) “Algunas consideraciones sobre la crisis actual del capitalismo”. Disponible en: www.eumed.net/libros/2009c/599/

- GOMEZ LEYTON, Juan Carlos (2009) “El poderoso poder constituyente”, en ALAI. Disponible en Internet: lists.econ.utah.edu/pipermail/reconquista-popular/2009-July/077259.html
- GUERRA BRAVO, Samuel (2005) *La moral emergente de los forajidos*, Radmandí, Quito.
- GUTIÉRREZ AGUILAR, Raquel (2008) *Los ritmos del Pachakuti. Movilización y levantamiento indígena-popular en Bolivia*, Sal y Limón, Mexico.
- HINKELAMMERT, Franz (2009) “Sobre la reconstitución del pensamiento crítico”, en *Rev. Ecuador Debate*, nro. 77, CAAP, Quito.
- HOETMER, Raphael (2007) “Los movimientos sociales latinoamericanos hoy. Reflexiones preliminares” en *Revista América Latina en Movimiento*, Núm. 424-425, Octubre, Alai.
- HOPENHAYN, Martín (2012) “Relatos sobre la pobreza en América Latina”, en *Revista Interpretando*, núm. 4, marzo. En: www.revistainterpretando.com
- IBARRA, Hernán (2009) “Estado nacional y diversidad cultural. Estado Nación cultura nacional y diversidad cultural” en MONTES DEL CASTILLO, Ángel (2009) *Ecuador contemporáneo*, Ediciones de la Universidad de Murcia, Quito.
- LARA, Jorge (2009) *Breve historia contemporánea del Ecuador*, FCE, Bogotá.
- LARAÑA, Enrique (1999) *La construcción de los movimientos sociales*, Alianza editorial, Madrid.
- Latinobarómetro. Informes anuales 2005 y 2008. Disponibles en Internet: www.latinobarometro.org/
- LENIN, Vladimir (1902) *Qué hacer?*, Proyecto Espartaco 2000 – 2001 [1902] Disponible en : http://www.bvsst.org.ve/documentos/pnf/que_hacer.pdf
- LEVY, Bettina y GIANATELLI, Natalia -Comps.- (2008) *La política en movimiento. Identidades y experiencia de organización en América Latina*, Clacso, Buenos Aires.

- MACAS, Luis (2000) “Diez años del levantamiento del Inti Raymi de junio de 1990: Un balance provisional”. Disponible en Internet: www.icci.nativeweb.org/boletin/15/macas.html
- MARTÍNEZ NOVO, Carmen (2009) *Repensando los movimientos indígenas*, Flacso, Quito.
- MAMANI, Pablo (2003) “El rugir de la multitud: levantamiento de la ciudad aymara de El Alto y caída del gobierno de Sánchez de Lozada”, en *Revista OSAL*, Nro. 12, Año 4, Clacso, Buenos Aires.
- MARX, Karl (1852) *El 18 brumario de Luis Bonaparte*, disponible en: <http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm>
- MAYORGA UGARTE, Antonio (2007) *Gonismo, discurso y poder*, Plural, Quito.
- MERINO, Gerardo (2005) *Abril bombas mil. La represión desde el poder*, Comisión ecuménica por los derechos humanos, Quito.
- MIRZA, Christian Adel (2006) *Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina. La construcción de nuevas democracias*, Clacso, Buenos Aires.
- NUN, José (2001) [1969] *Marginalidad y exclusión social*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- OLIVER, Lucio (2007) Sesión introductoria del curso "Movimientos Sociales y lucha democrática en América Latina", material de trabajo del Clacso virtual, Buenos Aires.
- _____ (2008) Sexta clase del curso "Movimientos Sociales y lucha democrática en América Latina", Movimientos sociales y proyectos políticos en América Latina, Clacso virtual, Buenos Aires.
- OSPINA, Pablo (2005a) “El peso de la noche: una perspectiva histórica de la crisis política en Ecuador”, en *Revista Ecuador Debate*, número 64, abril, Nueva Sociedad, Quito.

- _____ (2005b) “El abril que se llevó al coronel que no murió en el intento”, en *Revista Ecuador Debate*, número 65, agosto, Nueva Sociedad, Quito.
- _____ (2009) “Movimientos sociales y participación política. Los movimientos sociales en el Ecuador de Rafael Correa” en MONTES DEL CASTILLO, Ángel (2009) *Ecuador contemporáneo*, Edit.um, Murcia.
- _____; KALTMEIER, Olaf y BÜSCHGES, Christian -Eds.- (2009) *Los andes en movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político*, Corporación editora nacional – Universidad Simón Bolívar, Quito.
- PANFICHI, Aldo –coord.- (2002) *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur*, FCE, Mexico.
- PANTICH, Leo y COLIN LEYS -Comps.- (2004) "El 'nuevo' imperialismo: acumulación por desposesión" en *El Nuevo desafío Imperial*, Merlin Press-Clacso, Buenos Aires.
- PIRKER, Kristina (2008) *La redefinición de lo posible. Militancia política y movilización social en El Salvador (1970-2004)*, tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM, Mexico.
- PIVA, Adrián (2007) “Luchas sociales y transformaciones económico-políticas”, en *Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina de hoy*, Prometeo, Buenos Aires.
- PORRAS VELASCO, Angélica (2005) *Tiempo de indios. La construcción de la identidad política colectiva del movimiento indio ecuatoriano*, Abya Yala, Quito.
- PRADA, Raúl (2008) *Subversiones indígenas*, Clacso – Muela del diablo, La Paz.
- Revistas OSAL 2000-2007, Núms. 1 al 22, Clacso, Buenos Aires. Disponible en: www.clacso.org.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal/publicaciones/revistas
- RAMÍREZ, Franklin (2005) *La insurrección de abril no fue sólo una fiesta*, Abya Yala – Terranueva – Ciudad centro de Investigaciones, Quito.

- REINAGA, Fausto (1978) *El pensamiento amáutico*, Unidas-PIB, Bolivia.
- REVILLA HERRERO (2007) *Visibilidad y obrismo. La estrategia del Plan Progreso en la ciudad de El Alto*, UNITAS, La Paz.
- RIVERA, Silvia (2010) *Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*, Tinta Limón, La Paz.
- RODAS, Hernán (2009) "Religión y cultura. La iglesia ecuatoriana entre la oferta y la demanda religiosa", en MONTES DEL CASTILLO, Ángel: *Ecuador contemporáneo: análisis y alternativas actuales*, Edit.um, Quito.
- ROJAS REYES, Carlos (2009) "Agustín Cueva y la historicidad perdida" en *Ecuador Debate*, nro. 77, agosto, Caap, Quito.
- ROUX, Rhina (2005) *El príncipe mexicano*, ERA, Ciudad de Mexico.
- ROZÉ, Jorge Prospero, MURILLO, Susana y NÚÑEZ, Ana -Comps.- (2005) *Nuevas identidades urbanas en América Latina*, Espacio, Buenos Aires.
- SÁNCHEZ PARGA, José (2005) "Del conflicto social al ciclo político de la protesta", en *Revista Ecuador Debate*, número 64, abril, Nueva Sociedad, Quito.
- SCOTT, James (2004) *Los dominados y el arte de la resistencia*, Era, Mexico.
- SEOANE, José y TADDEI, Emilio (2004) "Levantamiento popular y luchas sociales en América Latina: del octubre boliviano a las protestas contra el ALCA, 1 de septiembre. Disponible en Internet: www.social-movements.org/fr/node/view/506
- _____ y Algranatti, Clara (2002) "Tras el 11 de septiembre. Conflicto social y hegemonía norteamericana en América Latina", OSAL Nro. 6, Clacso, Buenos Aires.
- _____ (2006) "Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina" en BORÓN, Atilio y LECHINI, Gladys: *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico*, Clacso, Buenos Aires.

- SEOANE, José y NACCI, María José (2007) “Movimientos sociales y democracia en América Latina, frente al neoliberalismo de guerra” en DE LA FUENTE, Manuel y HUFTY, Marc (eds.): *Movimientos sociales y ciudadanía*, Plural, Buenos Aires.
- SIERRA, María Teresa (1997) “Esencialismo y autonomía: paradojas de las reivindicaciones indígenas”, en *Revista Alteridades*, Nro. 7, Instituto de Investigaciones Antropológicas UAM, Mexico.
- SVAMPA, Maristella (2007) “Movimientos sociales y escenario político: las nuevas inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina”, julio, disponible en Internet: <http://cetri.domainepublic.net/IMG/pdf/ensayo38.pdf>
- _____ (2008) *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Siglo XXI-Clacso, Buenos Aires.
- TAPIA, Luis (2003a) “La cuarta derrota del neoliberalismo en Bolivia”, en *Revista OSAL*, Nro. 12, Año 4, Clacso, Buenos Aires.
- _____ (2003b) “La producción teórica para pensar América Latina” en Aguiluz, Maya y De los Ríos Méndez, Norma (2003): *René Zavaleta, ensayo, testimonio y reflexiones*, UNAM-UNSA, Buenos Aires.
- _____ (2008) *Política salvaje*, Clacso-Muela del diablo, Bolivia.
- _____ (2008b) “La reforma del sentido común en la dominación neoliberal y en la constitución de nuevos bloques históricos nacional-populares”, en CECEÑA, Ana Esther, *De los saberes de la emancipación y de la dominación*, Clacso, Buenos Aires.
- _____; MOKRANI, Dunia y CHÁVEZ, Patricia (2007) “Poder y cambio en Bolivia 2003-2007. Transformaciones en las relaciones de poder en las concepciones de democracia y en el modelo de gobernabilidad”, PIEB – Embajada de Bolivia en los Países Bajos, La Paz.
- _____; GARCÍA LINERA, Álvaro; PRADA, Raúl y VEGA CAMACHO, Oscar (2010) *El Estado, campo de lucha*, Clacso, Buenos Aires.

- VILLEGAS, Pablo (2010) “Empresas Transnacionales y Resistencias” en Revista Pueblos. www.revistapueblos.org/spip.php?article1794 Nota del 13 de enero.
- WARD, Peter; PERLMAN, Janice; JELIN, Elizabeth; SAFA, Helen; ROBERTS, Bryan y GONZÁLES DE LA ROCHA, Mercedes (2004) “From the Marginality of the 1960s to the "New Poverty" of Today: A LARR Research Forum”, en *Latin American Research Review*, Vol. 39, Num. 1, Texas.
- ZAVALETA, René (1974) “La revolución democrática de 1952 y las tendencias sociológicas emergentes”, Ponencia presentada al XI Congreso latinoamericano de Sociología, Costa Rica.
- _____ (1979) “Las masas en noviembre” en *Bolivia hoy* [1983], Siglo XXI, Mexico.
- _____ (1988) *Clases sociales y conocimiento*, Los amigos del Libro, La Paz.
- _____ (2008) [1986] *Lo nacional - popular en Bolivia*, Plural, La Paz.
- ZIBECHI, Raúl (2007) *Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Programa democracia y transformación global, Lima.
- _____ (2011) “Ecuador: El Estado fuerte y la criminalización a los movimientos”, disponible en: www.kaosenlared.net